



LAS SOCIEDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL CONTEXTO DE LA POSTPANDEMIA (2021-2022)

Documento Completo



CENTRO DE GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO



Colección Investigaciones CELAM

Presidente del CELAM

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo de Trujillo, Perú

1^{er} Vicepresidente del CELAM

Card. Odilo Pedro Scherer
Arzobispo de São Paulo, Brasil

2^{do} Vicepresidente del CELAM

Card. Leopoldo José Brenes
Arzobispo de Managua, Nicaragua

Presidente del Consejo de Asuntos Económicos

Mons. Rogelio Cabrera López
Arzobispo de Monterrey, México

Secretario General

Mons. Jorge Eduardo Lozano
Arzobispo de San Juan de Cuyo, Argentina

Secretario General Adjunto

P. Pedro Brassesco

Director Centro de Gestión del Conocimiento

Mg. Guillermo Sandoval Vásquez

Coordinador del estudio

Dr. Agustín Salvia

Investigador compilador/autor

Lic. Enzo Rave
Observatorio de la Deuda Social
Pontificia Universidad Católica Argentina

Participantes del estudio

Equipos de investigación de la
Red de Observatorios de la Deuda Social de América Lati-
na y Caribe (RedODSAL)
Organización de Universidades Católicas de América Lati-
na y el Caribe (Oducal)

Asistencia técnica

Mónica D'Amico
Observatorio de la Deuda Social
Pontificia Universidad Católica Argentina

Aporte teológico pastoral

Mons. Jaime Mancera Casas

Consejo del Centro de Gestión del Conocimiento del Celam

Card. Oscar Andrés Rodríguez (Coordinador) · Mons. Jaime Calderón (subcoordinador) · Mons. Jorge Eduardo Lozano · Mons. Pedro Ossandon · Mons. Pierre André Dumas · Mons. Jaime Mancera · Mons. José Dolores Grullón · Pbro. David Solano · Pbro. Enrique Quiroga · Pbro. Peter Hughes · Hna. Maricarmen Bracamonte · Dra. Waleska Sanabria · Dra. María Clara Bingemar · Dr. Rodrigo Guerra · Dr. Adrián Arias · Dr. Juan Esteban Belderraín · Dr. Juan Carlos Nuñez

Equipo del Centro de Gestión del Conocimiento

Mg. Guillermo Sandoval (Director) · Dr. Agustín Salvia (Coordinador Área Observatorio Socio-Antropológico Pastoral) · Mg. Francisco Campos (Coordinación Área Conocimiento Compartido).

Con las debidas licencias eclesíásticas. Reservados todos los derechos. Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte por cualquier medio sin el permiso previo por escrito del Celam.

© Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, Celam

Carrera 5 N.º 118-31

Apartado Aéreo 51086

Tel.: (571) 587 97 10

Fax: (571) 587 97 17

celam@celam.org

ÍNDICE

Prólogo.....	7
Introducción	9
1. Situación económica.....	13
1.1. Crecimiento e inflación	13
1.2. Deuda	17
1.3. Comercio	19
2. Situación social	21
2.1. Pobreza y desigualdad	21
2.2. El mercado de trabajo luego de la crisis de 2020	25
2.3. Protección social	32
2.4. Desarrollo humano.....	36
2.5. Alimentación.....	37
2.6. Educación.....	41
2.7. Hacia el fin de la pandemia de COVID-19: contagios, muertes y vacunación.....	44
2.8. Infancia y adolescencia.....	55
2.9. Migrantes.....	68
2.10. Personas Mayores.....	74
3. Situación ambiental.....	77
3.1. Cambio climático y desastres naturales	77
3.2. Protección legal del ambiente	80

4. Situación sociopolítica.....	84
5. Contribución teológico-pastoral.....	92
6. Referencias bibliográficas.....	98

Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos: «He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. [...] Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos! [...] Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se construyen juntos». Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos.

Carta Encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, 8.

El Vaticano, 2020

Prólogo

Los resultados de investigación que se reflejan en este resumen ejecutivo vuelven a confirmar la necesidad de cambios estructurales que enfrenten las desigualdades y las exclusiones que atraviesan históricamente a nuestra región y que se han acentuado nuevamente durante y después de la pandemia por COVID-19.

Los datos de organismos internacionales y centros de estudios nos muestran la profundización de los graves efectos del COVID. También hay algunas miradas optimistas respecto de algún nivel de recuperación económica y del empleo; pero no así en materia de pobreza, precariedad e informalidad laboral. Sin embargo, es evidente que, si mantenemos las actuales estructuras, continuarán ahondándose la inequidad y el descarte de personas humanas, así como también el daño en nuestra Casa Común.

Discernir los signos de los tiempos es clave para fundar sólidamente la acción pastoral de nuestra Iglesia. El conocimiento experto, junto al sentir del Pueblo de Dios en medio de las raíces de nuestras sociedades (como el expresado en el Tiempo de Escucha de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe), son de gran utilidad para esta tarea. Ambos se complementan y dan luces para comprender la realidad y actuar en consecuencia. En este sentido, el nuevo informe que nos entrega el Observatorio Socio Antropológico y Pastoral (OSAP) del Centro de Gestión del Conocimiento del CELAM, no es un aporte técnico más. Tiene respaldo académico, analiza la realidad de América Latina y el Caribe desde una mirada creyente e incorpora una reflexión teológico-pastoral.

En este documento encontraremos datos respecto de la magnitud de la crisis, pero al mismo tiempo la forma en que han reaccionado los Estados, evitando que el desastre fuera tres veces peor. Sin embargo, este accionar no logró mejorar la cantidad y calidad de los trabajos y ha aumentado la inflación agravando la inseguridad alimentaria de los más pobres. De igual manera, advierte que el financiamiento de la ayuda a la población está aumentando el endeudamiento de nuestros pueblos. Es una señal de alerta, pues en el fondo esto significa que el costo de la pandemia será financiado con mayor pobreza.

Nos preocupa muy especialmente que estamos perdiendo, en la práctica, una generación en términos formativos y de integración social. La educación ha sufrido fuertemente el impacto del COVID. También nos alarma que la recuperación del empleo será más lenta de lo previsto y, según se señala, más lenta que la recuperación de la economía. No hay mayor

pobreza que no tener un trabajo, nos ha dicho con razón el Papa Francisco. En este ítem, los más afectados son las mujeres y los jóvenes.

Igualmente nos duele que, en materia de vivienda y salud, los déficits están lejos de reducirse. Una evidencia de ello es que, si bien en nuestra región vive poco más del 8% de la población mundial, el contagio se eleva al 20% del total global, y las muertes, a un 30% de los fallecimientos por COVID en el mundo. Nos inquieta también la situación de la democracia en nuestros países. La población percibe grandes déficits que se hacen necesarios abordar con seriedad.

El panorama para Latinoamérica y el Caribe en 2023 no es muy alentador. Si bien es cierto que cada país tiene su propia realidad, muchos de estos tendrán retos similares, por ejemplo, lidiar con los nefastos efectos de la pandemia, enfrentar los efectos de los altos niveles de inflación y el aumento de la pobreza, con sus correlatos en materia de violencia, migraciones y crisis de representatividad política.

Todo esto nos lleva a ponernos en búsqueda de caminos superadores. No podemos olvidar nunca que Dios siempre sigue creando, y para hacerlo hoy pide que pongamos en movimiento nuestra inteligencia y nuestras manos. El compromiso con la justicia y la solidaridad hunde sus raíces en el amor a Dios y al prójimo. Esta enseñanza, al asumirla a fondo, tiene una muy clara consecuencia en la dimensión social de la evangelización.

En este sentido, presentamos este informe con la esperanza puesta en Dios y también en cada uno de nuestros hermanos, bajo la protección de Nuestra Señora de Guadalupe.

P O Jorge Eduardo Lozano
Arzobispo de San Juan de Cuyo, Argentina
Secretario General del Celam (periodo 2020-2023).

Introducción

En medio de la recuperación de América Latina y el Caribe luego de la pandemia de la COVID-19, la necesidad de continuar con un crecimiento dinámico, inclusivo y sostenible sigue siendo primordial, y cada vez más urgente. Tras un repunte del 6,9 % en 2021, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) regional crezca un 3 % en 2022, una tasa superior a la prevista debido al aumento de los precios de la materia prima.

Sin embargo, la incertidumbre a nivel global derivada de la guerra en Ucrania, el aumento de las tasas de interés en los países desarrollados y las persistentes presiones inflacionarias afectarán a las economías de la región. Se prevén bajas tasas de crecimiento del 1,3 % y 2,4 % en 2023 y 2024. Para consolidar la recuperación, promover el crecimiento y reducir la pobreza y la desigualdad, los países deben seguir invirtiendo en programas sociales e infraestructura. Dicho esto, pueden mejorar la eficiencia del gasto público y así obtener un aumento del 4,4 % del PIB en promedio.

El informe Panorama Social 2022 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que 201 millones de personas (32,1 % de la población total de la región) viven en situación de pobreza, de los que 82 millones (13,1 %) se encuentran en pobreza extrema. Pese a la leve disminución registrada en 2021, las proyecciones indican que las tasas de pobreza y extrema pobreza se mantuvieron en 2022 por encima de los niveles prepandemia en América Latina y el Caribe. Los niveles proyectados de pobreza extrema en 2022 representan un retroceso de un cuarto de siglo para la región.

Pero la incidencia de la pobreza es mayor en algunos grupos de la población en la región: más del 45 % de la población infantil y adolescente vive en la pobreza y la tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres en todos los países. De igual forma, la pobreza es considerablemente más alta en la población indígena o afrodescendiente.

En efecto, las secuelas de la crisis de la COVID-19 llevarán años en desaparecer si los países de América Latina y el Caribe no toman medidas inmediatas para impulsar un proceso de recuperación. Con la pobreza extrema en su mayor nivel en décadas, los retos que se plantean desde hace tiempo en materia de infraestructura, educación, innovación y eficiencia del gasto deben afrontarse con reformas políticas que también aborden los efectos del cambio climático y aprovechen las enormes oportunidades de crecimiento hacia economías más sostenibles.

En el ámbito educativo, desde el comienzo de la pandemia los alumnos de la región han perdido parcial o completamente en promedio dos tercios de los días de clases presenciales. Esto equivale a una pérdida estimada de 1,5 años de aprendizaje y afecta en mayor medida a los más pequeños y los más vulnerables. América Latina y el Caribe sufrió el apagón educativo más prolongado a nivel internacional (en promedio 70 semanas de cierre de establecimientos frente a 41 semanas en el resto del mundo), lo que exacerbó las desigualdades preexistentes en materia de acceso, inclusión y calidad. En este período, una de las principales limitaciones para la continuidad educativa fueron las desigualdades en el acceso a conectividad, equipamiento y habilidades digitales. En 2021, en 8 de 12 países de la región más del 60% de la población pobre menor de 18 años no tenía conectividad en el hogar. Es por ello por lo que urge abordar la crisis silenciosa de la educación para evitar el riesgo de una generación perdida.

De no actuar ahora, la CEPAL advierte sobre el riesgo de cicatriz permanente en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones más jóvenes de la región. Por ejemplo, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja de forma remunerada aumentó de 22,3% en 2019 a 28,7% en 2020, afectando especialmente a las mujeres jóvenes (36% de ellas se encontraba en esta situación, comparado con un 22% de los hombres). A mediano plazo, será necesario recuperar la educación primaria para contrarrestar los años perdidos de aprendizaje con políticas de reinscripción y retención de estudiantes; nivelación del aprendizaje; priorización de las competencias fundamentales para cerrar las brechas de conocimiento; implementación de programas para cumplir con las metas de aprendizaje y; desarrollo de la salud y el bienestar psicosocial y emocional de docentes y estudiantes.

Los costos a largo plazo de la crisis en la salud y la educación deben ser subsanados de manera urgente, tanto para reactivar el crecimiento como para mitigar el aumento en la desigualdad. En cuanto al empleo, este aumentó hasta casi recuperar los niveles anteriores a la pandemia a finales de 2021, tras una caída del 20 %. Pero la proporción del empleo formal ha caído casi 5 puntos porcentuales. De hecho, muchos de los nuevos puestos de trabajo, sobre todo para las mujeres, se encuentran en pequeñas empresas que a menudo son informales. En tanto, la desocupación proyectada para 2022 representa un retroceso de 22 años, afectando especialmente a las mujeres, para las que la desocupación sube de 9,5% en 2019 a 11,6% en 2022.

En el sector de las industrias pueden aflorar oportunidades tras las crisis que desencadenan una reestructuración económica a gran escala. Por ejemplo, si bien el sector de servicios ha sido muy castigado, la aceleración de la digitalización podría ayudar a impulsar sectores como las tecnologías de la información, las finanzas y la logística, que a su vez pueden mejorar la competitividad del mercado y aumentar la eficiencia económica. Sin embargo, si no se abor-

dan los factores estructurales, es probable que el crecimiento débil y lento se mantenga y sea insuficiente para avanzar en la lucha contra la pobreza, y las tensiones sociales.

La región está sufriendo los efectos cada vez más graves del cambio climático que ya ha ocasionado importantes pérdidas económicas y sociales. Los huracanes, las inundaciones y las sequías son cada vez más frecuentes, y se estima que 17 millones de personas podrían verse obligados a abandonar sus hogares y casi 6 millones a caer en pobreza extrema de aquí a 2030, sobre todo debido a la falta de agua potable, así como a una mayor exposición al calor excesivo y a las inundaciones.

El crecimiento verde es una oportunidad para la región ya que América Latina y el Caribe contribuye con solo el 8 % de las emisiones mundiales de GEI y tiene enormes ventajas comparativas verdes, que pueden ser aprovechadas para nuevas industrias y exportaciones. Además, la región tiene un enorme potencial en electricidad renovable -solar, eólica y geotérmica- y un vasto capital natural -agua, árboles, biodiversidad- que ofrece el potencial para nuevas industrias.

El panorama para Latinoamérica en 2023 no es muy alentador. Si bien es cierto que cada país tiene su propia realidad, muchos de estos tendrán retos similares, por ejemplo, lidiar con los nefastos efectos de la pandemia del COVID-19, los altos niveles de inflación, el aumento de la pobreza, la violencia, la crisis migratoria y de representatividad política, entre otros. En este marco, el mayor reto para América Latina será mitigar el efecto de los shocks económicos externos que habrán de generar los desequilibrios postpandemia a nivel mundial. Este complejo escenario acrecienta las dificultades de los gobiernos para dar respuesta a los problemas de las poblaciones más vulnerables y podría generar mayor inestabilidad política. La falta de capacidad estatal se manifiesta tanto en la debilidad para enfrentar el avance del crimen organizado como en la incapacidad de implementar políticas públicas con un impacto significativo en la vida de los sectores más necesitados.

Por otra parte, en el campo político, el principal desafío del continente es la amenaza que está viviendo la democracia. Es una crisis muy profunda, que va más allá de América Latina, pero que se manifiesta en la región de manera muy fuerte. Se hace cada vez más evidente la desconexión de los gobernantes con las demandas ciudadanas, lo cual se manifiesta en la creciente insatisfacción de la población con los gobernantes y las instituciones y en el voto castigo a los oficialismos. En las últimas 15 elecciones, los oficialismos, sin importar su orientación política, fueron derrotados.

Las instituciones carecen de legitimidad, no solo los dirigentes o los partidos políticos. Las instituciones están siendo puestas en cuestión con mucha fuerza. No solo se desconfía de los políticos, también de los legisladores, los jueces, los médicos, los universitarios, la prensa.

Esta crisis de representación deja abierta la puerta al surgimiento de nuevas figuras populistas y autoritarias que capitalizan el descontento ciudadano para ganar adeptos.

En conclusión, estamos ante una cascada de crisis que ha exacerbado las desigualdades y carencias de la región. No es momento para cambios graduales, sino para políticas transformadoras. Se requieren esfuerzos intersectoriales de política pública que vinculen la oferta educativa con la salud, el trabajo y la protección social, y que permitan asentar mecanismos para garantizar un nivel de bienestar e ingresos en una era de volatilidad e incertidumbre. Para ello es clave construir nuevos pactos sociales acompañados de contratos fiscales para avanzar en el fortalecimiento de la democracia, la cohesión social y garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social en la región. La institucionalidad social es un factor crítico para la efectividad de las políticas sociales y un elemento transversal para alcanzar un desarrollo social inclusivo.

A continuación, se presenta información descriptiva para América Latina y el Caribe que da cuenta del impacto de la crisis de 2020 a causa de la pandemia de COVID-19 a lo largo de 2021 y 2022, como así también sobre las proyecciones disponibles para 2023. Esta información se agrupa en 4 apartados que responden a la situación económica, social, ambiental y sociopolítica de la región.

Los datos provienen de informes e investigaciones de organismos multilaterales, instituciones internacionales y centros académicos regionales, tales como la CEPAL, OIT, UNICEF, FAO, entre otras. A su vez, se ha procurado -en la medida que la disponibilidad de datos lo permitió- introducir análisis subregionales en función de las zonas geográficas de interés para el CELAM: el Cono Sur, los Países Bolivarianos, México y Centroamérica y el Caribe.

1. Situación económica

1.1. Crecimiento e inflación

La situación económica mundial en lo que respecta al 2022 es desalentadora. A grandes rasgos, se evidencia una desaceleración del crecimiento luego del recupero en 2021 de los niveles de producción. En parte, esto es resultado de las fuertes presiones inflacionarias presentes a nivel mundial, que en un primer momento tuvieron lugar como consecuencia de los cuellos de botella generados en la oferta de insumos y bienes finales en 2020 (por el freno en la producción y su posterior reactivación dada por la disponibilidad de vacunas que permitió retomar sin riesgos la actividad económica). Esto derivó en un aumento del precio de los insumos debido a su escasez por el stop productivo. Ante tal escenario, los distintos países han adoptado políticas económicas con matices contractivos (OIT, 2022a).

Según los datos más actuales del Banco Mundial (2023), la economía de América Latina y el Caribe creció 6,8% en 2021 (luego de la caída de -6,2% de 2020). El FMI (2022) proyectó para 2022 un crecimiento del 4,4%, pero la invasión rusa en Ucrania no hizo más exacerbar los problemas ya existentes, dejando a los países con la disyuntiva de evitar la recesión o endurecer sus políticas monetarias y financieras para mantener controlada a la inflación.

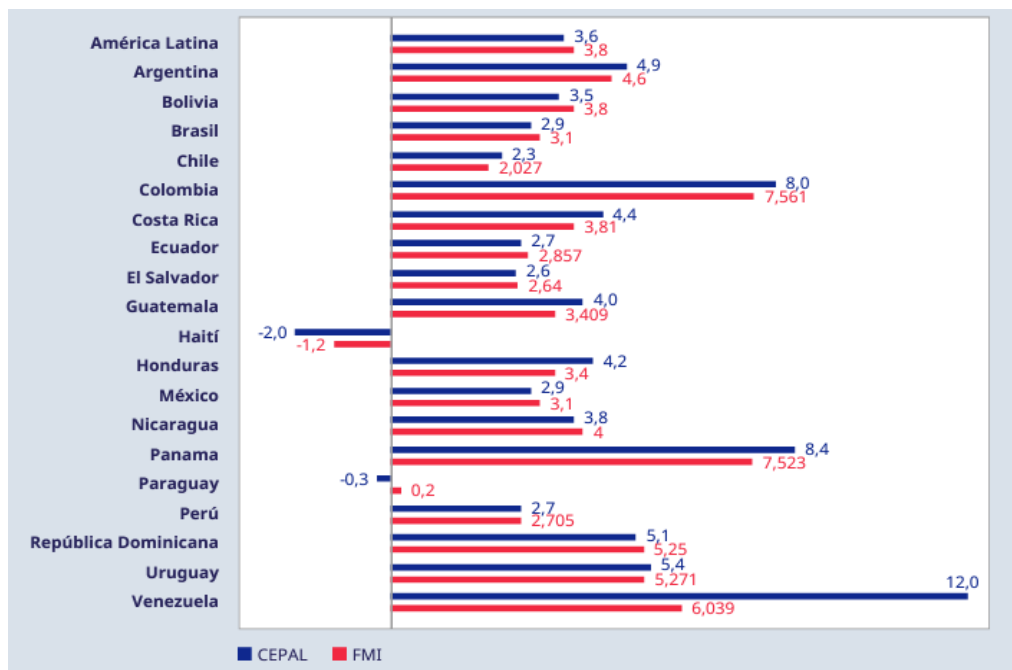
En 2022 hubo una desaceleración del crecimiento, que se ubicó en torno al 3,6% - 3,8% (FMI, 2022; CEPAL, 2022c; Banco Mundial, 2023). En el Cono Sur, las estimaciones para 2022 dan cuenta de un crecimiento de 5,4% en Uruguay, 4,9% en Argentina, 2,9% en Brasil y 2,3% en Chile. Por su parte, en Paraguay se registraría una contracción del PBI de 0,3%. Respecto a los Países Bolivarianos, se registra una estimación de crecimiento del 12% del PBI en Venezuela y del 8% en Colombia, mientras que en Ecuador y Perú esto desciende al 2,7%.

En Centroamérica se observan estimaciones de crecimiento del 8,4% para Panamá, 4,4% para Costa Rica, 4,2% para Honduras, 4% para Guatemala, 2,9% para México y 2,6% para El Salvador. En el Caribe se registra una perspectiva de crecimiento de 5,1% para República Dominicana y una contracción de 2% del PBI en Haití.

Cabe destacar que en el Caribe se registran heterogéneas perspectivas de crecimiento para 2022, según se tomen en consideración distintos países y sus matrices productivas en los análisis (OIT, 2022c). En este sentido, se prevé que el PBI del Caribe creció en orden al 10% en 2022. Sin embargo, si se excluye el crecimiento de Guyana (52%), este promedio

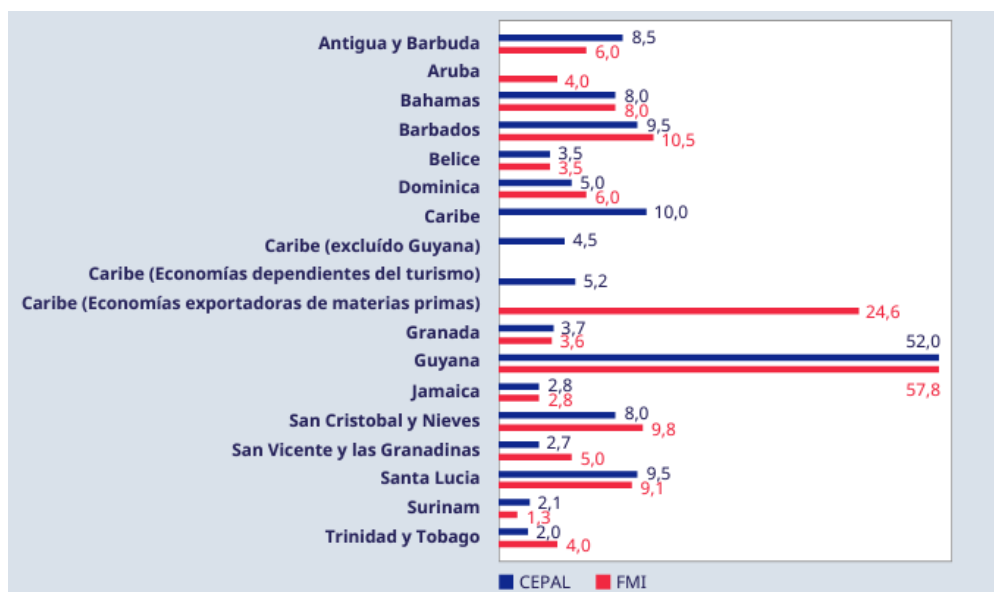
subregional cae al 4,5%. Asimismo, el crecimiento de las economías del caribe dependientes del turismo fue de 5,2% (CEPAL), mientras que el crecimiento de las economías del caribe vinculadas a la exportación primaria habría sido de 24,6% (FMI).

Figura 1: Crecimiento del PBI estimado para 2022.



Fuente: OIT (2022c) en base a datos de CEPAL y FMI.

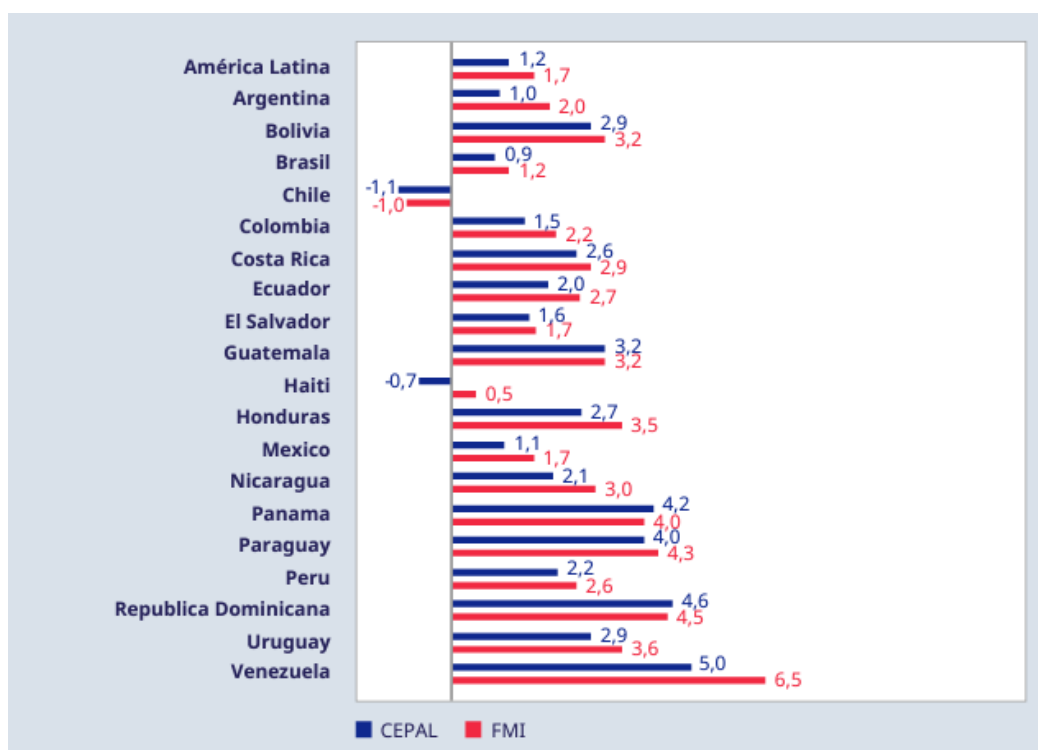
Figura 2: Crecimiento del PBI estimado para 2022.



Fuente: OIT (2022c) en base a datos de CEPAL y FMI.

Las proyecciones para los siguientes dos años no muestran indicios de una recuperación satisfactoria, ya que se prevé las tendencias de desaceleración continúen con un promedio de 1,2% para 2023 (1% en Sudamérica, 1,6% en Centroamérica y 3,3% en el Caribe) y 2,4% para 2024 (CEPAL, 2022c).

Figura 3: Crecimiento del PBI proyectado para 2023.



Fuente: OIT (2022c) en base a datos de CEPAL y FMI.

La guerra en Europa produce efectos negativos para América Latina y el Caribe. Por un lado, genera un impacto directo en el aumento de precios de alimentos e hidrocarburos -ya que tanto Rusia como Ucrania son exportadores de cereales y el primero tiene una alta participación en la producción mundial de combustibles-. Este es el mayor shock de precios desde la década de 1970. En economías emergentes y en desarrollo, la cantidad de hogares con bajos ingresos es significativa por lo que la suba de estos precios tiene un correlato directo con el incremento del valor de la canasta básica, dando lugar a un impacto distributivo-regresivo, evidenciado en la baja del PIB per cápita.

El impacto indirecto de la guerra en América Latina y el Caribe se evidencia mediante el deterioro general de la economía mundial y las modificaciones en los términos de intercambio. Debido a esto, hay una menor oferta de divisas provenientes del comercio y sumado al turbulento contexto internacional, el acceso al financiamiento externo también se dificulta (OIT, 2022a). Como resultado, los gobiernos tienen menos herramientas para conducir sus economías.

Si bien la inflación afectó a toda la región, se pueden observar variaciones según las subregiones analizadas. En el Cono Sur, sin contar a Argentina por su inflación crónica (con una suba del 65%), para junio de 2022 se observa un 11,3 % de variación en el IPC con respecto al mismo periodo del año anterior, siendo Uruguay el país que menos subas sufrió (9,3%), seguido por Paraguay (11,5%), Brasil (11,9%) y Chile (12,5%).

En lo que respecta los Países Bolivarianos, hubo un alza del 6,3% en los precios regionales (excluyendo del promedio a Venezuela, cuya inflación fue del 157,2% en el período analizado). Bolivia percibió un 1,8% de variación interanual mientras que Colombia alcanzó un 9,7%. Con valores intermedios se ubican Ecuador (4,2%) y Perú (8,8%).

En Centroamérica¹ se percibió una variación del 8,4% en junio de 2022, siendo Panamá el menos afectado con un 5,2% de aumento en su IPC. Honduras, Nicaragua y Costa Rica tuvieron alzas en torno al 10%. Con valores intermedios se ubican El Salvador (7,8%) y Guatemala (7,6%).

Por último, para el Caribe (ver países con información disponible) se evidenció un aumento del IPC del 23,1%. El país menos afectado fue Guyana con 4,7%, seguido por República Dominicana con 9,5% y Surinam con un 55,1%.

Tabla 1: Índice de Precios al Consumidor por país. Variación porcentual en 12 meses.

Subregión	País	jun-21	<<
Cono Sur	Chile	3,8	12,5
	Paraguay	4,5	11,5
	Uruguay	7,3	9,3
	Brasil	8,3	11,9
	Argentina	48,3	65
Países Bolivarianos	Ecuador	-0,70	4,2
	Bolivia	0,2	1,8
	Perú	3,3	8,8
	Colombia	3,6	9,7
	Venezuela	2507,9	157,2

¹ Es importante tener en cuenta que tanto Centroamérica como el Caribe son economías ligadas muy fuertemente al ritmo de expansión y contracción de Estados Unidos, siendo más proclives a sufrir desbarajustes en función del funcionamiento de la economía norteamericana.

México y Centroamérica	Panamá	1,6	5,2
	Costa Rica	1,9	10,1
	El Salvador	2,6	7,8
	Guatemala	3,9	7,6
	Nicaragua	4,1	10,2
	Honduras	4,7	10,2
	México	5,9	8
Caribe	Guyana	6,5	4,7
	Rep. Dominicana	9,3	9,5
	Surinam	54	55,1

Fuente: elaboración propia en base a CEPAL (2022a).

1.2. Deuda

Los niveles de deuda en la región se mantienen en altos históricos, lo cual demuestra la necesidad de financiamiento para poder hacerle frente a la pandemia de COVID-19. Los valores más preocupantes son los arrojados para el Caribe con un promedio del 70,8% del PIB, donde Surinam muestra preocupantes números en ascenso (131,2%) debido a la devaluación de su moneda. Detrás se encuentra República Dominicana con un 47,7% y Guyana con 33,4%, ambos con menores números de deuda que los presentados en 2021.

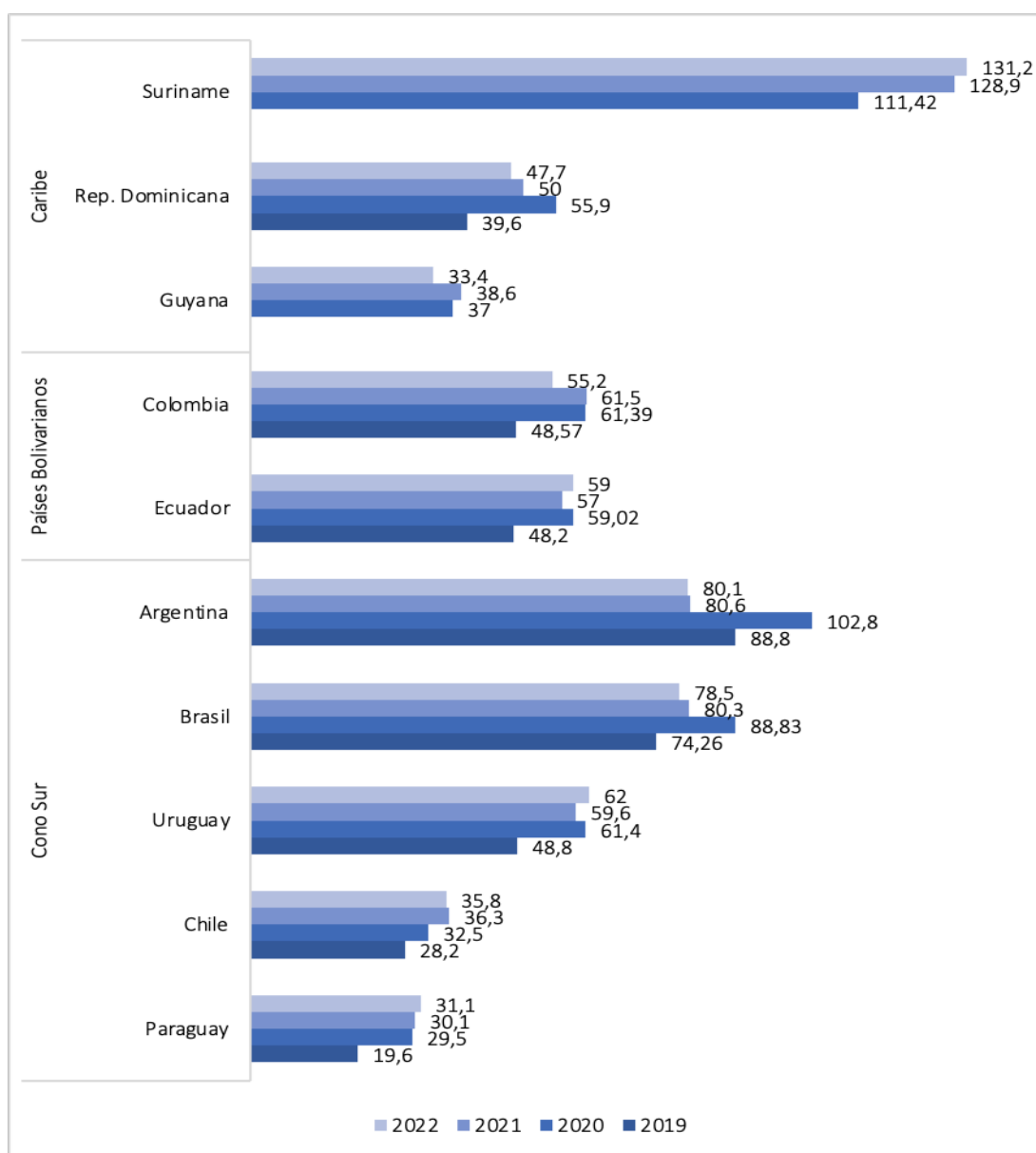
El Cono Sur es la segunda subregión con valores más altos de deuda (57,5%). Argentina tiene una deuda equivalente al 80% de su PBI, seguida por Brasil con un 78,5%. Más lejos se ubica Uruguay con una deuda del 62% de su PIB, aunque fue el único país de la región que de 2021 a 2022 aumentó su porcentaje de deuda. Los porcentajes más bajos son los de Chile con un 35,8% y Paraguay con un 31,1%.

Centroamérica tiene una deuda promediada en el 50,5% del PIB regional. Sin embargo, Costa Rica y Panamá tienen valores superiores de deuda, 69,9% y 60,7% respectivamente. Tanto Honduras como El Salvador presentan una deuda equivalente al 55% de su PBI. Por su parte, la de Nicaragua adquiere un valor del 43,7% del PIB y México tan solo un 38,6%. Guatemala es el país con menor proporción de deuda, al ser del 29,6% de su PIB.

La información disponible para los Países Bolivarianos indica que Colombia tiene una deuda equivalente al 55,2% de su PBI, mientras que la deuda de Ecuador llega al 59% de su PBI.

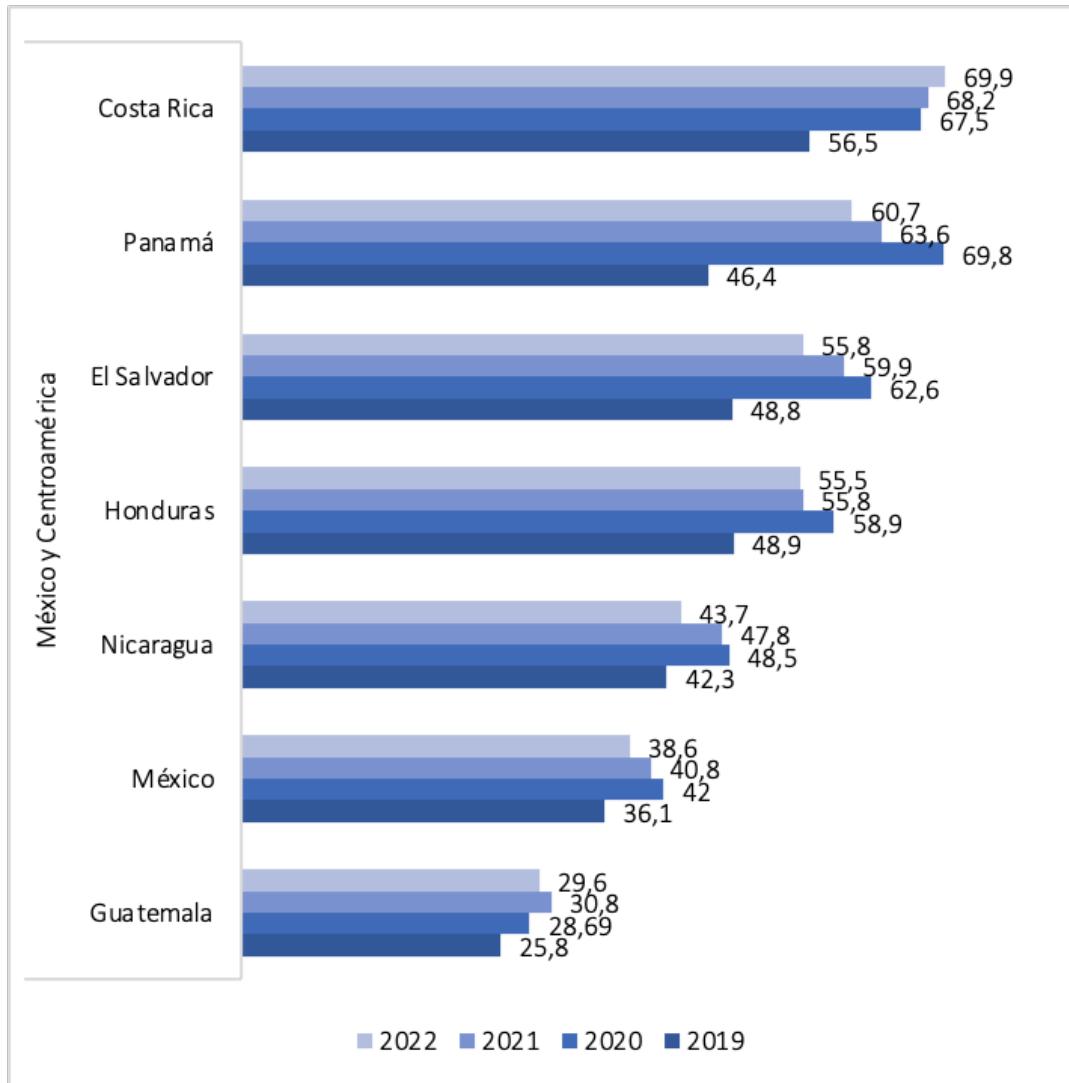
De cara al 2023 los gobiernos latinoamericanos tendrán el doble desafío de apalancar la reactivación económica a la par de controlar la inflación. Como el acceso al financiamiento externo es restringido y en muchos casos los términos de intercambio son desfavorables, teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de los estratos más bajos ante la suba del precio de los productos de las canastas básicas, el verdadero desafío reside en encontrar nuevas políticas económicas estructurales que permitan una mejor distribución de los ingresos a la par de un mayor nivel productivo y disminución del déficit.

Figura 4: Deuda pública bruta del gobierno central. Países de América Latina y el Caribe. 2020-2022. (En porcentaje del PIB)



Fuente: elaboración propia en base a CEPAL (2022a).

Figura 5: Deuda pública bruta del gobierno central. Países de América Latina y el Caribe. 2020-2022. (En porcentaje del PBI)



Fuente: elaboración propia en base a CEPAL (2022a).

1.3. Comercio

El comercio internacional también se ha visto tambaleado debido a la guerra ruso-ucraniana. La OMC antes del conflicto preveía un crecimiento del 4,7%, luego del mismo dicha proyección descendió al 3% (OMC, 2022). A esto se le suma la interrupción de navegación en el Mar Negro, lo cual encarece el gasto de transporte de alimentos y combustible. A raíz de esto, se proyecta un aumento del 55% con respecto del 2021 en el valor de los productos

energéticos y del 15% en la producción agropecuaria. Este cambio ha generado impactos diferidos según el tipo de producción a exportar e importar por país.

Para aquellos países de la región exportadores de hidrocarburos existe un beneficio del 17%, esto incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam. En contrapartida se puede observar que aquellos países importadores de energía pagarán los costes del aumento, siendo las principales afectadas las economías Centroamericanas y del Caribe (CEPAL, 2022b).

Un efecto de matiz neutro se registra en Argentina y Perú, que son productores de petróleo y a la par importan productos refinados -los cuales también han aumentado su valor-. Para Chile, que es exportador de minerales, se espera una disminución en los términos de intercambio con respecto al 2021 e incluso 2020.

Al observar la información de CEPAL (2022a) para los términos de intercambio (TI)² de cada país, se toma nota de que los TI más favorables durante el segundo trimestre de 2022 fueron los percibidos por los Países Bolivarianos -Perú, Ecuador y Bolivia- (114,5). Esto se debe a que estos países son exportadores de energía, la cual está afectada por subas considerables en su valor. Se evidencia en el resultado de TI de Bolivia, configurado en 132,9, seguido por Ecuador (106,8) y Perú (103,8).

La segunda subregión más favorecida por el contexto internacional en sus términos de intercambio es el Cono Sur, con un TI de 111,2. A la cabeza se ubica Brasil con un TI de 129, seguido por Argentina y Chile ambos con TI de 112. Por último, se ubican Paraguay (TI 108,9) y Uruguay (TI 93,7).

En cuanto a Centroamérica y Caribe, la coyuntura actual hace que las condiciones del comercio internacional sean más desfavorables para esta subregión. Los TI para la subregión de México y Centroamérica son de 67,2 aunque se evidencia una amplia brecha entre los países que la componen. Mientras que los TI para México y Costa Rica son de 96,2 y 81,1 respectivamente, en el caso de Guatemala sus TI descienden a 49 y en el caso de El Salvador a 42,5. Por su parte, República Dominicana tiene unos TI de 51,5.

2 Es una medida que indica la relación entre el precio de las exportaciones (E) e importaciones (I) de un país, de manera que: $TI = E/I$.

2. Situación social

2.1. Pobreza y desigualdad

La región de América Latina y el Caribe atraviesa un escenario complejo. La crisis producto de la pandemia de COVID-19 generó un deterioro en la situación socioeconómica que profundizó problemáticas y desigualdades preexistentes. Si bien el año 2021 marcó el inicio de un proceso de recuperación, la región quedó expuesta a los vaivenes y cambios de un escenario global incierto, que en combinación con los conflictos propios de la región y/o internos de cada país, configuran un panorama de incertidumbre que dificulta superar los retrocesos que impuso la pandemia de COVID-19.

La pandemia marcó en 2020 un punto de inflexión en 30 años de esfuerzos hacia la reducción de la pobreza. El Banco Mundial (2022) estima que la pobreza mundial había disminuido de más de 1 de cada 3 personas (38 % de la población mundial) en 1990 a menos de 1 de cada 10 personas (8,4 %) en 2019. Sin embargo, en 2020 el mundo fue testigo de un retroceso en las condiciones de vida de las personas.

La reactivación económica de 2021 ayudó a muchos hogares a superar la situación de pobreza por ingresos, pero los datos de CEPAL (2022c) para los últimos dos años y las proyecciones para 2022 no son alentadoras: actualmente más de un tercio de la población de América Latina y el Caribe es pobre y la incidencia de la pobreza extrema alcanza valores que no se registraban hace 20 años. Esto significa que aproximadamente 201 millones de personas no tuvieron ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y que, de ellas, más de 80 millones de personas carecieron de los recursos incluso para adquirir una canasta básica de alimentos. Estas cifras conllevan, con respecto a 2019, que 15 millones de personas adicionales estarán en situación de pobreza y 12 millones de personas adicionales en situación de pobreza extrema.

Las perspectivas de CEPAL para 2022 son de 32,1% de personas en situación de pobreza y 13,1% en situación de pobreza extrema. Estas proyecciones tienen en cuenta el crecimiento económico esperado -con mayores niveles de empleo e ingresos- pero también la aceleración de la inflación, que merma el poder adquisitivo de las personas.

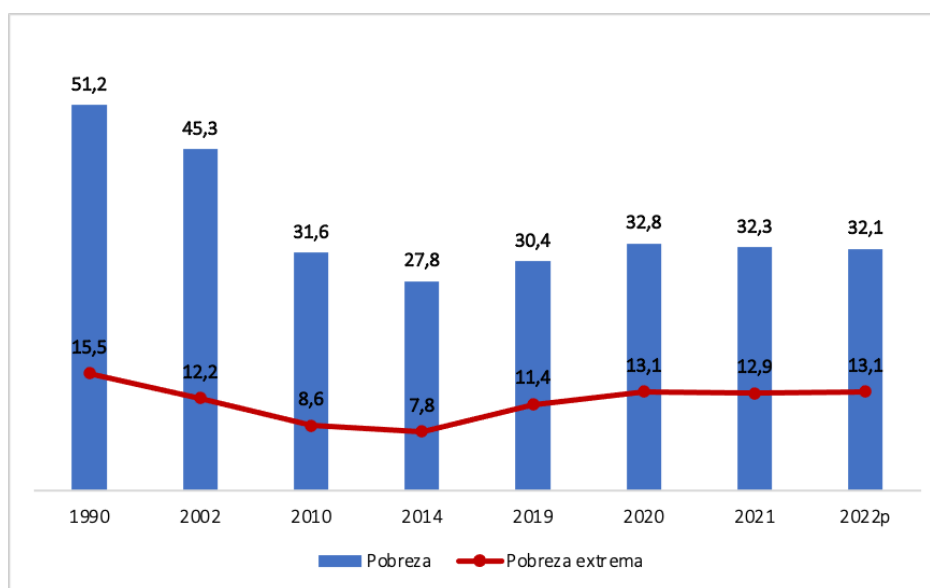
Se disponen proyecciones de pobreza por país publicadas por la CEPAL (2022b) que denotan para 2022 un agravamiento de las tendencias observadas en 2021, con una mayor

incidencia de la pobreza y/o estancamientos en su reducción. Según estas proyecciones, solo Bolivia, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Uruguay cerrarían el año 2022 con cifras de pobreza menores a las de 2021 (con diferencias porcentuales menores a un punto).

Los países con mayor incidencia de la pobreza en 2022 serían Honduras (56,3%), Guatemala (49,5%), Nicaragua (46%), Colombia (38%), México (36,2%) y Bolivia (30,3%). Por otro lado, Argentina, Ecuador, El Salvador y Perú registrarían niveles de pobreza entre 25% y 30%, mientras que Paraguay, Brasil, Costa Rica y Panamá tendrían cifras que oscilan entre 20% y 23%. Los tres países con menor incidencia de la pobreza serían República Dominicana (18,6%), Chile (8,9%) y Uruguay (4%). Cabe destacar que estas proyecciones contemplan un escenario base de inflación, por lo cual la situación podría ser más grave en caso de que el alza de los precios supere las previsiones (CEPAL, 2022b).

En términos de variación interanual (2021-2022), en Colombia, México, Paraguay y Brasil tendrá lugar un fuerte retroceso de la lucha contra la pobreza dado que, si la inflación se comporta según las previsiones, la pobreza crecería 1,7 puntos porcentuales en Colombia, 1,3 puntos porcentuales en México, 1,2 puntos porcentuales en el Paraguay y 1,1 puntos porcentuales en el Brasil (CEPAL, 2022b).

Figura 6: Tasas de pobreza y pobreza extrema para América Latina y el Caribe (18 países*). 1990-2022. (En porcentaje de población).



Fuente: elaboración propia en base a datos calculados por CEPAL (2022c).

* Promedio ponderado de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

p: corresponde a proyecciones.

Tabla 2: Proyecciones de pobreza total 2021-2022. (En porcentaje de población).

	2021	2022 (escenario base)	2022 (escenario base + 2 p.p. de inflación adicional*)
Argentina	29,5	29,6	30,2
Bolivia	31,2	30,3	30,7
Brasil	21,4	22,5	23
Chile	8,7	8,9	9,2
Colombia	36,3	38	39,2
Costa Rica	21,1	21,2	22,3
Ecuador	29,7	29,4	30,3
El Salvador	26,4	26,5	27,4
Guatemala	46,9	49,5	50,5
Honduras	56,2	56,3	57,3
México	34,9	36,2	37,2
Nicaragua	45,3	46	46,8
Panamá	21,6	20,8	21,2
Paraguay	21,8	23	23,4
Perú	25,1	25,5	26,1
República Dominicana	19,2	18,6	19,3
Uruguay	4,3	4	4,4

Fuente: elaboración propia sobre la base de proyecciones calculadas por CEPAL (2022b).

* 2,0 puntos porcentuales adicionales a las expectativas de inflación correspondientes al IT 2022.

Los datos de CEPAL (2022c) para 2021 ya mostraban los efectos de la crisis en la incidencia de la pobreza. En el Cono Sur, se registró que 8,3% de las personas se encontraban en situación de indigencia en Brasil, 6% en Paraguay, 3,7% en la Argentina, 3,1% en Chile y menos del 1% en Uruguay. Según estas mismas estimaciones, la Argentina fue el país de la subregión con el mayor porcentaje de pobreza total (27,3%), seguido de Brasil (24,3%), Paraguay (20,9%), Chile (10,8%) y Uruguay (4,8%). En 2021, la pobreza infantil (niños/as y adolescentes de 0 a 17 años) se ubicó en el 42% en la Argentina, 39% en Brasil, 28% en Paraguay, 20% en Chile y 10% en Uruguay.

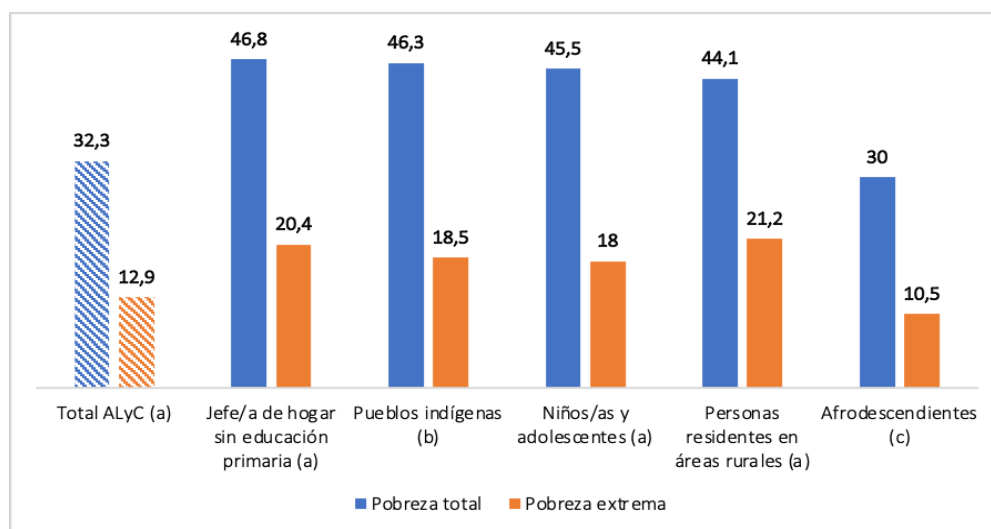
En los Países Bolivarianos, los niveles de indigencia de 2021 llegaron al 15% en Colombia, 9,9% en Bolivia, 7,6% en Ecuador y 4,1% en Perú. La incidencia de la pobreza total alcanzó a más del 35% de la población colombiana, a casi un tercio de la población de Bolivia y Ecuador y alrededor del 20% de la población peruana (CEPAL, 2022c). En esta subregión, en 2021, la pobreza infantil alcanzó al 50% de los niños/as y adolescentes en Colombia, aproximadamente al 40% en Ecuador y Bolivia y al 28% en Perú.

En Centroamérica, la pobreza extrema en 2021 fue del 9,2% en México, 8,3% en El Salvador, 5,7% en Panamá y 3,7% en Costa Rica. Por otra parte, las estimaciones de la pobreza total ascendieron al 37,4% de las personas en México, 30,7% en El Salvador, 17,3% en Panamá y 15,6% en Costa Rica. Los datos de 2021 ponen de relieve que Honduras fue el país con mayor porcentaje de niño/as y adolescentes pobres en América Latina y el Caribe, con un 62%. En México se registró un 51% de niños/as pobres, mientras que en El Salvador este porcentaje fue del 42%. Por otra parte, Costa Rica y Panamá tuvieron niveles de pobreza infantil inferiores al 30%.

La información disponible para la subregión del Caribe muestra que en República Dominicana la indigencia afectó al 5,2% de las personas y la pobreza total al 22,5% en 2021.

Por otro lado, es sabido que la pobreza en América Latina y el Caribe afecta de forma desigual a distintos grupos sociales según factores tales como la edad, condición étnico-racial o nivel educativo alcanzado. En esta línea, los datos de CEPAL (2022c) correspondientes a 2021 dan cuenta de que la pobreza y pobreza extrema afectaron con mayor intensidad a los siguientes grupos poblacionales: las personas residentes en hogares donde el/la jefe/a no finalizó la educación primaria (46,8% y 20,4% respectivamente); pueblos indígenas (46,3% y 18,5%); niños, niñas y adolescentes (45,5% y 18%); personas residentes en áreas rurales (44,1% y 21,2%); y afrodescendientes (30% y 10,5%).

Figura 7: Pobreza total y pobreza extrema según grupos poblaciones de América Latina y el Caribe. 2021.
En porcentaje de población.



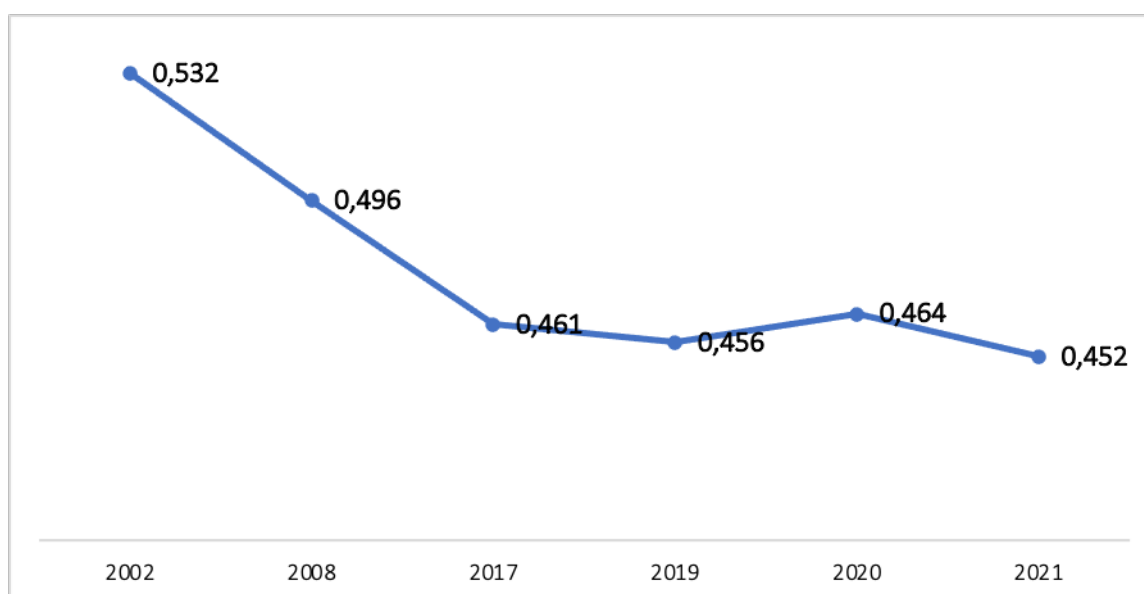
Fuente: elaboración propia en base a datos calculados por CEPAL (2022c).

- (a) 18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
 (b) 11 países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.
 (c) 8 países: Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.

Según los cálculos de CEPAL (2022c) para el Índice de Gini, la región registró un estancamiento en la reducción de desigualdad a partir de 2017 -luego de haberse observado una caída constante desde 2002-. Actualmente la región no registra mejoras significativas en la distribución del ingreso.

El año 2020 da cuenta de un leve empeoramiento en la incidencia de la desigualdad a nivel agregado, que en 2021 se revirtió y regresó a los valores previos a la pandemia. Sin embargo, este promedio regional oculta variaciones específicas en algunos países: Argentina, Paraguay y República Dominicana redujeron la desigualdad en 2020 y 2021; Brasil, Colombia y Perú tuvieron en 2021 niveles de desigualdad similares a los de 2019; y Costa Rica, Ecuador y Uruguay aumentaron la desigualdad en 2020 y 2021.

Figura 8: Índice de Desigualdad de Gini.
Promedio regional - América Latina y el Caribe (15 países*).



Fuente: elaboración propia en base a datos calculados por la CEPAL (2022).

* Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

2.2. El mercado de trabajo luego de la crisis de 2020

Es sabido que el derecho al trabajo y la situación del empleo han sufrido un impacto directo por las implicancias de la pandemia de COVID-19, principalmente por las políticas de aislamiento social que frenaron los procesos económicos, las cadenas de producción y el comercio. Esta situación generalizada a nivel mundial implicó un deterioro de los indicadores

del mercado de trabajo en 2020: se estima el PBI de América Latina se redujo un 7,5% y se perdieron más de 36 millones de puestos de trabajo (OIT, 2022b).

Según la OIT (2022a), las tasas de participación³ y de empleo⁴ de las distintas regiones del mundo han mejorado levemente en 2021 respecto a 2020. Asimismo, las proyecciones para 2022 y 2023 no indican que esta recuperación retorne a los niveles previos a la pandemia de COVID-19. La tasa de desempleo⁵ para las distintas regiones del mundo ilustra no solo el efecto de la caída de la actividad económica de 2020, sino el complejo escenario para los próximos años, ya que las proyecciones indicarían que tampoco se recuperarán los niveles de 2019. En particular, la región de las Américas ha sido una de las más golpeadas en términos de desocupación, ya que la tasa de desempleo para 2020 fue del 9,3%, mientras que la proyección para 2023 es del 7% (aún por encima del 6,4% de 2019).

Una de las principales características de Latinoamérica es la precariedad laboral, evidenciado en la incapacidad del mercado de trabajo de absorber a la fuerza laboral en el sector formal, lo cual conduce a las personas a realizar trabajos informales o de indigencia para poder obtener ingresos y subsistir. Según la OIT (2022b), en 2021, 1 de cada 2 personas ocupadas en la región estaba en condiciones de informalidad, lo cual da cuenta de la persistencia de este problema estructural.

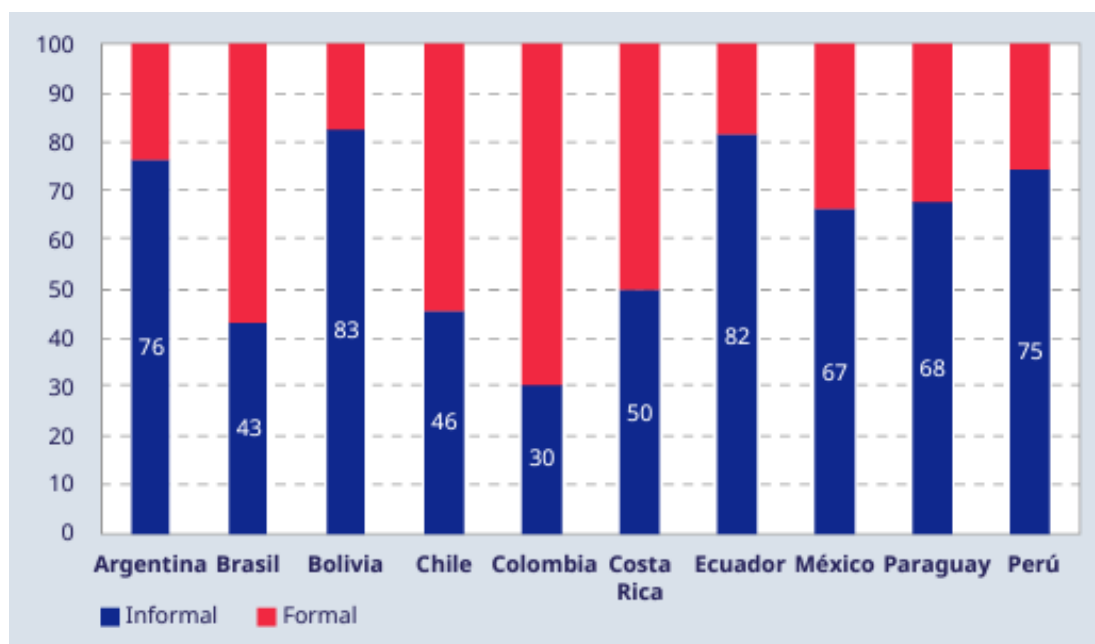
Durante 2020, la informalidad influyó en la profundización de la crisis por la pandemia de COVID-19. A diferencia de crisis anteriores -donde las personas que perdían su empleo eran captadas por el sector informal-, el año 2020 ha dejado mayores niveles de inactividad, ya que las personas despedidas como también las trabajadoras por cuenta-propia han abandonado la fuerza laboral. Sin embargo, entre el 3er trimestre de 2020 y el 3er trimestre de 2022, la recuperación del trabajo en la región ha estado traccionada por un importante aumento de la informalidad laboral. Se estima que el empleo informal ha dado cuenta de entre 40%-80% del aumento neto de trabajo entre 2020-2022 (OIT, 2022c). La tasa de informalidad regional es de casi 50%, cercano al registro de 2019 y también al observado una década atrás.

3 Es la fuerza laboral entendida como el porcentaje de la población en edad de trabajar que participa activamente en el mercado de trabajo.

4 Es el porcentaje de personas ocupadas respecto a la población en edad de trabajar.

5 Es el porcentaje de personas desocupadas respecto a la población en edad de trabajar.

Figura 9: Contribución del empleo formal y del empleo informal a la recuperación del empleo total. III trimestre 2020-III trimestre 2022.



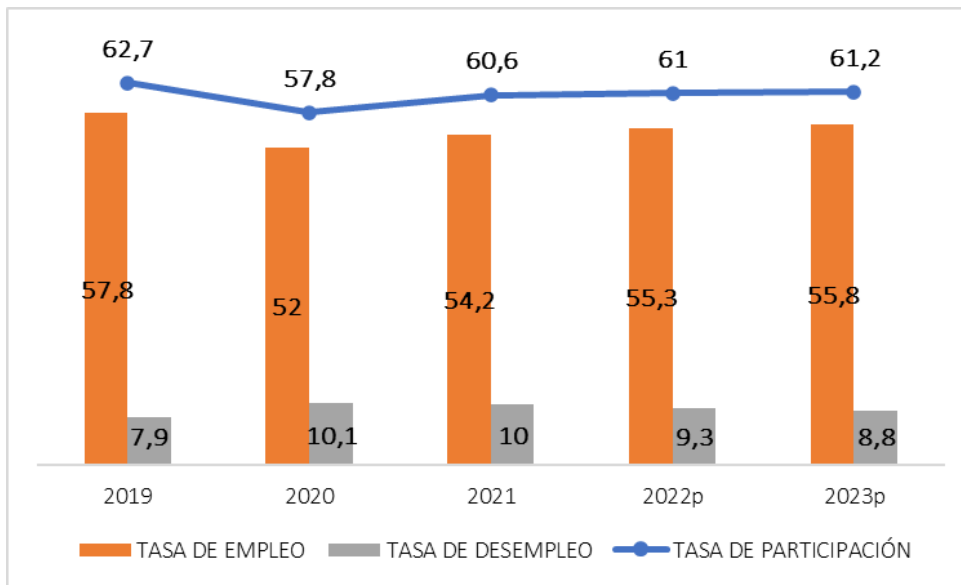
Fuente: OIT (2022c).

La OIT (2022b) también advierte que la tasa de informalidad laboral seguirá creciendo en América Latina y el Caribe mientras no aumenten las ocupaciones formales. Esta situación es crítica teniendo en cuenta el contexto actual de incertidumbre, pocas expectativas de crecimiento económico y la pérdida de poder adquisitivo a causa de la inflación. En este sentido, este panorama económico afecta con más intensidad a los ingresos de las personas trabajadoras en el sector informal.

Como se mencionó anteriormente, las proyecciones para América Latina y el Caribe muestran que los indicadores del mercado laboral aún no retornan a los niveles previos a la pandemia de COVID-19: si bien se observan mejoras en las tasas de participación, empleo y desempleo, las proyecciones para 2023 dan cuenta de un lento proceso de recuperación, donde el desempleo rondaría el 8,8%.

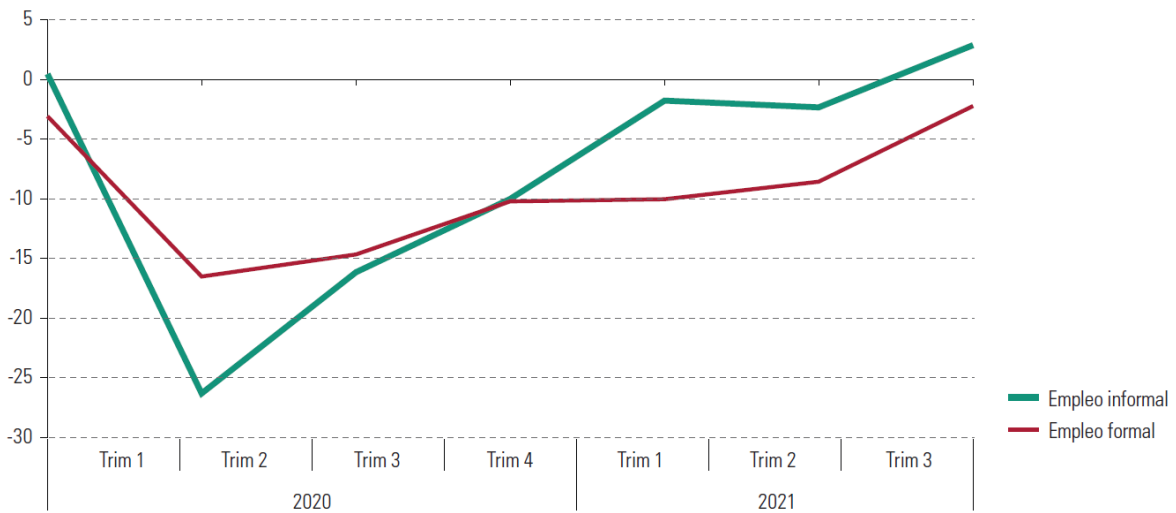
Esta situación representa un enorme desafío para los Estados en cuanto a las políticas laborales para el corto y mediano plazo, que debe ser abordado teniendo en cuenta más factores que determinan un escenario complejo, tales como el estancamiento del crecimiento económico, el aumento de la pobreza y desigualdad a causa de la pérdida de ingresos y el alza de la inflación.

Figura 10: Tasas de participación, empleo y desempleo para América Latina y el Caribe. 2019-2023.



Fuente: elaboración propia en base a estimaciones y proyecciones de la OIT (2022a).
p: corresponde a proyecciones.

Figura 11: Evolución del número de trabajadores (formales e informales) respecto de 2019. América Latina y el Caribe (10 países*). En porcentajes de variación.



Fuente: CEPAL (2022c).

* Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Al exponer el desglose por trimestres de los datos de los últimos años para América Latina y el Caribe -incluyendo las estimaciones para el primer trimestre de 2022- se puede apreciar

la magnitud de la crisis laboral y el proceso actual de recuperación que atraviesa la región. La OIT (2022b) describió a este ciclo como “una fase corta pero intensa de contracción del empleo y la larga fase de recuperación”. Como se puede ver al comparar el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2022, las tasas de participación y de empleo actuales continúan por debajo de las registradas hace tres años. En el caso del desempleo se puede observar una caída de 0,8 puntos porcentuales tomando el período de referencia. Sin embargo, la OIT advierte sobre la probabilidad de que la tasa de desocupación se incremente en un contexto donde la tasa de participación no se ha recuperado plenamente.

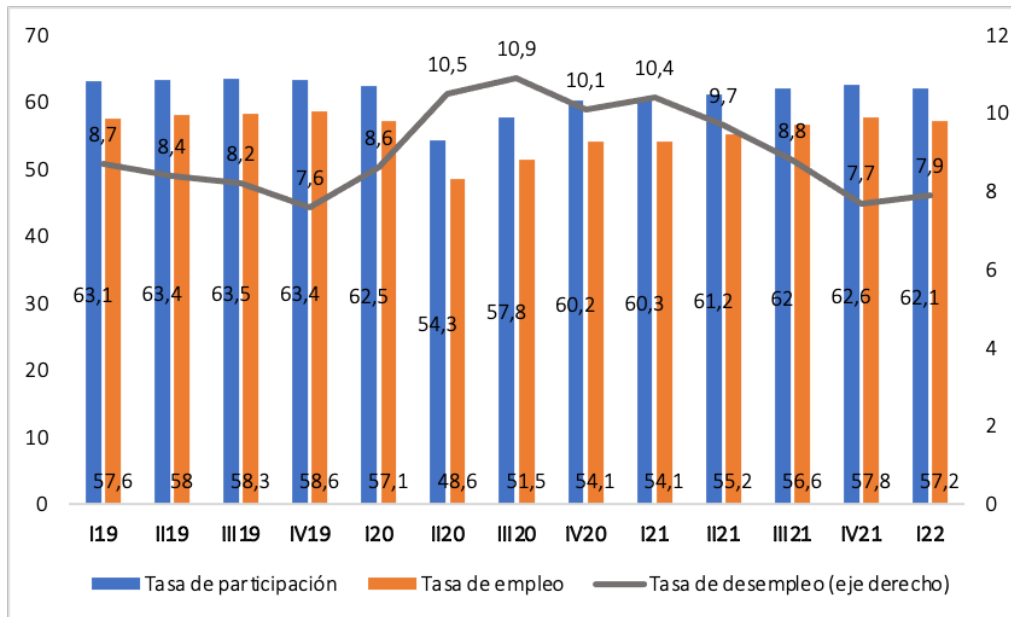
Por otro lado, siguiendo los últimos datos publicados por CEPAL (2022c), se puede tomar nota de las brechas de género al nivel del mercado de trabajo, tanto en el escenario de crisis de 2020 como en el proceso de recuperación de 2021-22. Mientras que en 2019 la brecha entre la tasa de desocupación de varones y mujeres fue de 2,7 puntos porcentuales, las proyecciones para 2022 indicarían que esta brecha creció en 3,8 puntos porcentuales.

En igual sentido, las tasas de participación proyectadas por la CEPAL también muestran que la fuerza laboral todavía no se recuperaría a los niveles de 2019. En este caso, la proyección de 2022 para la tasa de participación femenina se ubicó en un 51,1%, mientras que la tasa de participación masculina en un 74,9%.

Los primeros análisis de los datos vinculados al tercer trimestre de 2022 indicarían, según la OIT (2022c), que “el año 2022 fue relativamente bueno para las economías de la región en comparación con lo observado a nivel global. Las economías de América Latina y el Caribe continuaron la senda de recuperación que comenzó en 2021”. En este sentido, al comparar el 3er trimestre de 2019 con el 3er trimestre de 2022, se destacan la recuperación de las tasas de ocupación y desocupación. Por su parte, la tasa de participación continúa levemente por debajo de los valores observados antes de la pandemia.

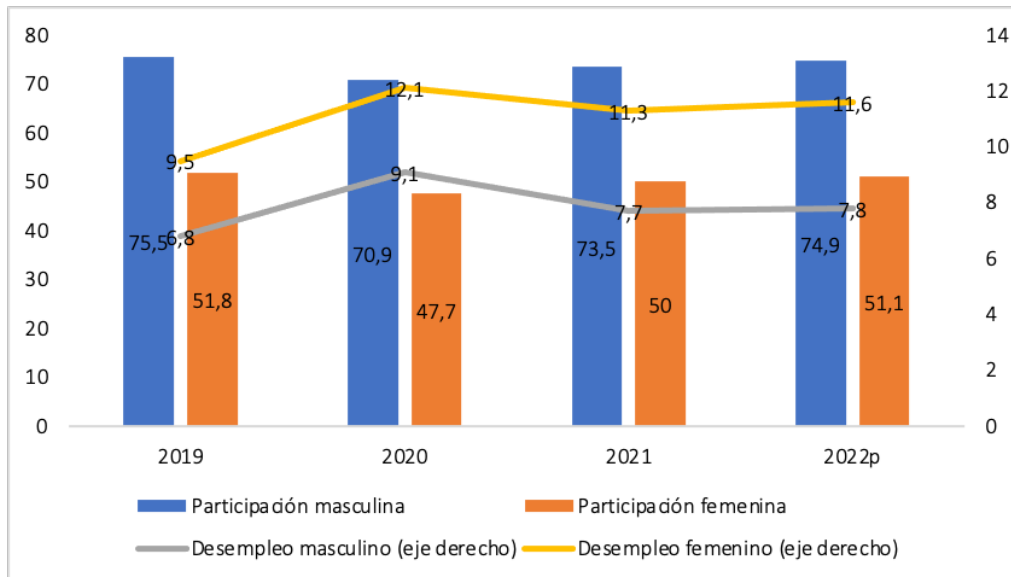
A pesar de la marcada brecha de género en el mercado laboral, la OIT (2022c) registró recientemente que el empleo femenino se recupera a mejor ritmo que el empleo masculino. Mientras que para las mujeres la tasa de ocupación aumentó 24,4% entre el 2do trimestre de 2020 y el 3er trimestre de 2022, para los hombres ese incremento fue de 18,8%. Esto implicó que durante el 3er trimestre de 2022 la tasa de ocupación de las mujeres superara levemente el registro del 3er trimestre de 2019, mientras que la tasa de ocupación de los hombres fue la misma en ambos trimestres. Al respecto, la OIT (2022c) señala la importancia de la relajación de las tareas de cuidado durante esta recuperación: “... la mayor recuperación de la oferta laboral de las mujeres estuvo potencialmente asociada a la gradual relajación de las dificultades para conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares en la medida en que fueron reabriendo los servicios educativos y de cuidado que habían sido profundamente alterados”.

Figura 12: Tasas de participación, empleo y desempleo.
América Latina y el Caribe, 1er trimestre 2019-1er trimestre 2022.



Fuente: elaboración propia en base a OIT (2022b).

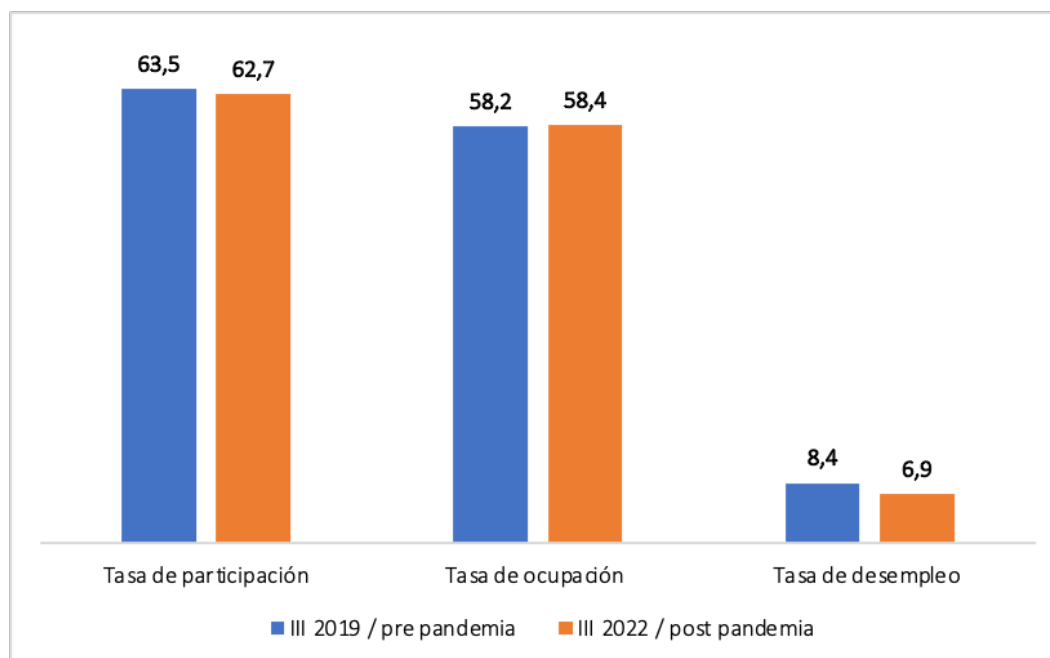
Figura 13: Tasas de participación y desempleo masculinas y femeninas.
América Latina y el Caribe*, 2019-2023.



Fuente: elaboración propia en base a CEPAL (2022c).
p: corresponde a proyecciones.

* 24 países: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

**Figura 14: Comparación III trimestre 2019 - III trimestre 2022.
América Latina y el Caribe**



Fuente: elaboración propia en base a OIT (2022c).

Tomando como referencia los datos del SEDLAC⁶ se observa que, en el Cono Sur, durante 2021, el desempleo afectó con mayor intensidad a Brasil y Chile (14% y 13,2% respectivamente). Argentina y Uruguay tuvieron niveles de desempleo en torno al 8% y en Paraguay el desempleo se ubicó en el 6%. En los Países Bolivarianos se observaron cifras de desempleo que oscilan entre 4% y 6% en Ecuador, Perú y Bolivia, ascendiendo a más del 15% en Colombia. En Centroamérica, Costa Rica y Panamá registraron tasas superiores al 10% en 2021, mientras que en México y El Salvador fueron inferiores al 5%.

La informalidad laboral se ubicó en 63,6% en Paraguay, 44,5% en Argentina, 38,3% en Brasil, 26,3% en Chile y 19% en Uruguay, según los datos actualizados de OIT (2022b) para el primer trimestre de 2022.

En los Países Bolivarianos, según la información disponible de ILOSTAT⁷ para 2021, la informalidad laboral habría llegado al 68,4% en Perú, al 68,6% en Ecuador y al 63,2% en Colombia. En Centroamérica se observan los siguientes niveles de informalidad: 69% en El Salvador, 57,1% en México, 55,7% en Panamá y 40,8% en Costa Rica. Por su parte, en el

6 SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial), consultado en enero 2023: <https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/estadisticas/sedlac/>

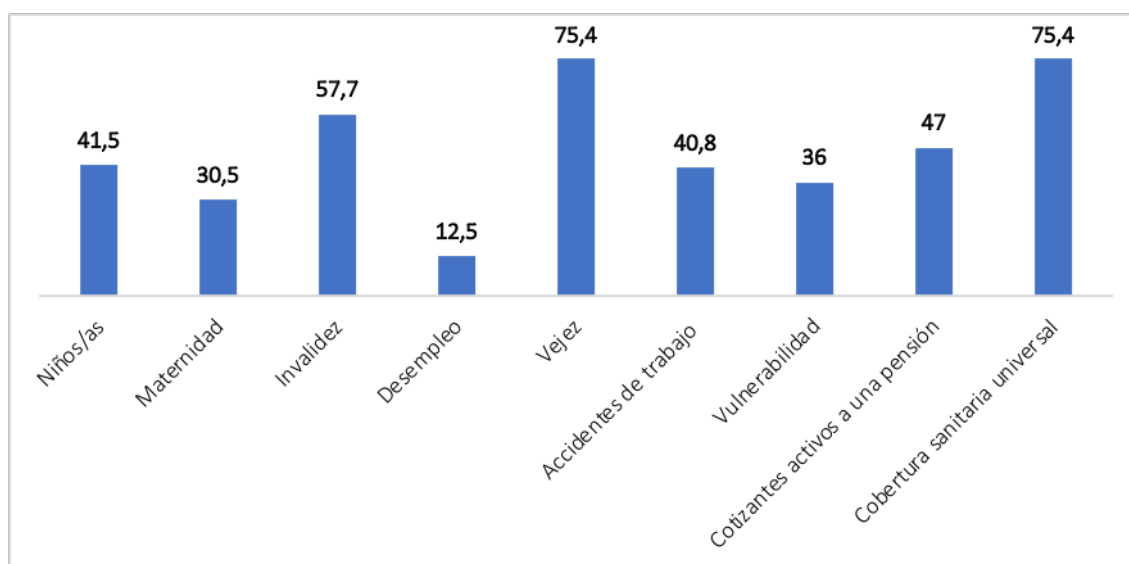
7 ILOSTAT, consultado en enero 2023 (sobre la base de encuestas nacionales): https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer31/?lang=es&segment=indicator&id=SDG_0831_SEX_ECO_RT_A

Caribe, Jamaica tuvo un 58% de informalidad laboral, República Dominicana un 57,3% y Santa Lucía un 32,5%.

2.3. Protección social

Tomando en consideración el último *Informe Mundial sobre la Protección Social* (OIT, 2021), se observa que en América Latina y el Caribe el 56,3% de la población estuvo cubierta en 2020 por al menos una prestación de protección social (este porcentaje se encuentra por encima del promedio mundial, que es del 46,9%). Si bien la región está lejos de garantizar una cobertura de protección social universal, se destaca un amplio porcentaje de personas cubiertas por prestaciones vinculadas a la vejez (75,4%) o sanitarias (75,4%). No sucede lo mismo con las prestaciones por accidentes de trabajo, vulnerabilidad y maternidad (en ningún caso superan el 40%).

Figura 15: Población cubierta por protección social según tipo de prestación recibida. Valores para América Latina y el Caribe, 2020.
En porcentajes de población.



Fuente: elaboración propia en base a las estimaciones del OIT (2021).

En un contexto de aumento de la inactividad laboral (por despidos o suspensiones en el sector formal y la imposibilidad de trabajar por cuenta propia en el sector informal), la pérdida de ingresos fue uno de los problemas más graves para la región de América Latina y el Caribe, ya afectada por persistentes niveles de pobreza.

Para afrontar la crisis sin precedentes de 2020, los Estados recurrieron a la inversión social para compensar la caída de los ingresos laborales de los hogares. De acuerdo con la CEPAL (2022c), América Latina y el Caribe registró un nivel histórico del gasto social en 2020 que, en promedio, llegó al 13,8% del PBI. Actualmente el gasto continúa en niveles superiores a los observados antes de la pandemia, pero se comienza a registrar una tendencia a la baja, ya que en 2021 se ubicó en torno al 13% del PBI.

En diferentes magnitudes, esta tendencia a la reducción del gasto social se repite en todas las subregiones y países de América Latina y el Caribe. Por lo general, esta disminución del gasto coincide con la no continuidad de los programas de apoyo y transferencias de emergencia que se implementaron en 2020.

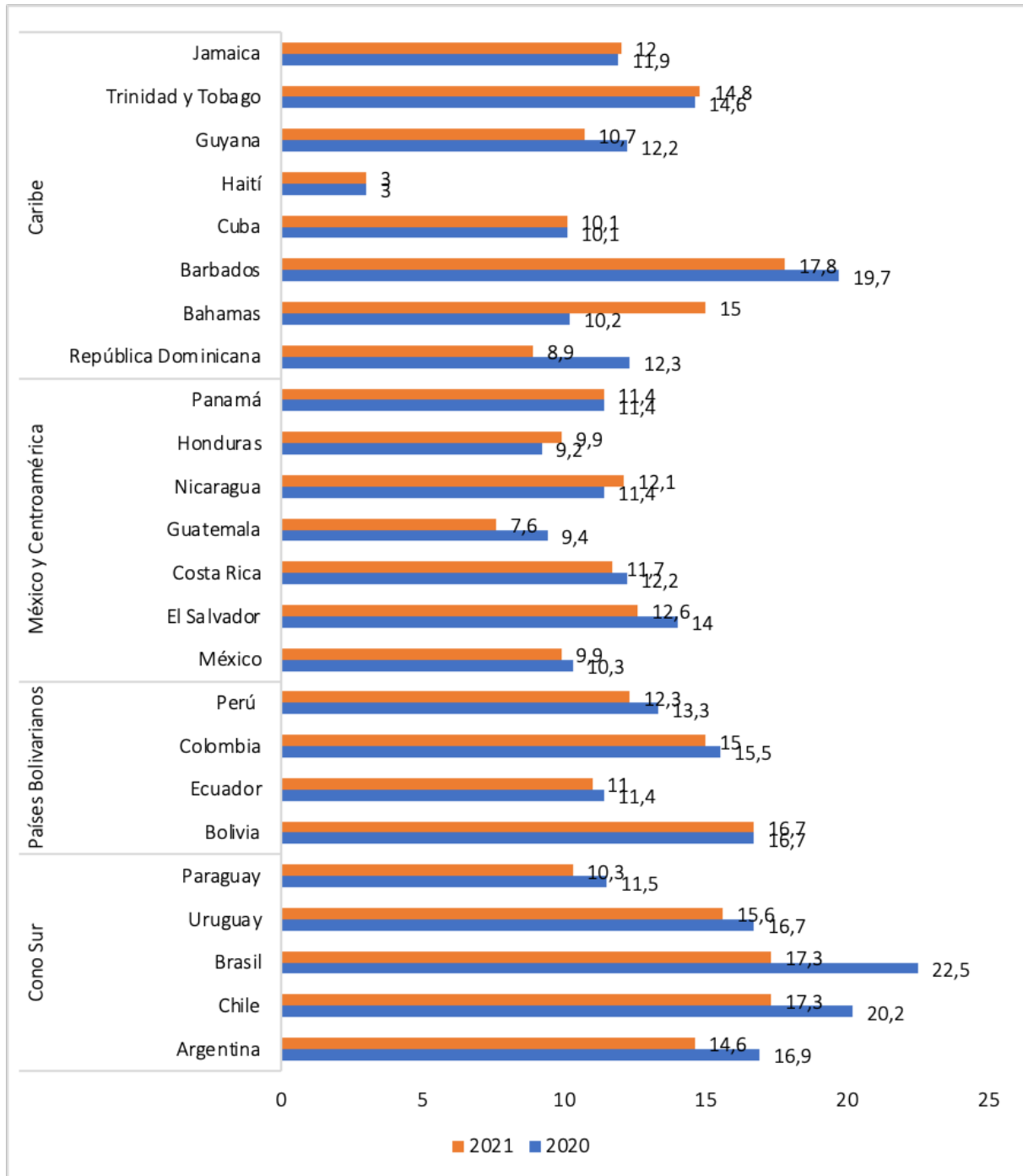
Solo 5 países aumentaron su gasto social en 2021: Nicaragua, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago y Bahamas. Por el contrario, los países que más redujeron su gasto social en 2021 fueron Brasil, República Dominicana, Chile y Argentina (entre 5,2 y 2,3 puntos porcentuales menos que en 2020).

A nivel subregional, los países del Cono Sur fueron los que registraron porcentajes más altos de gasto social respecto al PBI durante 2020, con un promedio de 17,6%, seguidos de los Países Bolivarianos (14,2%), del Caribe (11,8%) y de Centroamérica (11,1%).

Asimismo, durante 2021, los países del Cono Sur fueron los que más redujeron los niveles de gasto público, con una variación de 2,5 puntos porcentuales respecto a 2020. En el resto de las subregiones, esta disminución no representa más de 0,5 puntos porcentuales.

Por otro lado, cabe mencionar que actualmente la inversión en protección social es desigual al nivel de los países y subregiones de América Latina y el Caribe. En esta línea, los datos de CEPAL (2022c) muestran que en 2021 la protección social representó el 74,3% del gasto público en Argentina, el 72,7% en Brasil y el 70,9% en Cuba. Por el contrario, en países como Nicaragua, Panamá y Haití esta proporción desciende al 7,4%, 8,1% y 11% respectivamente.

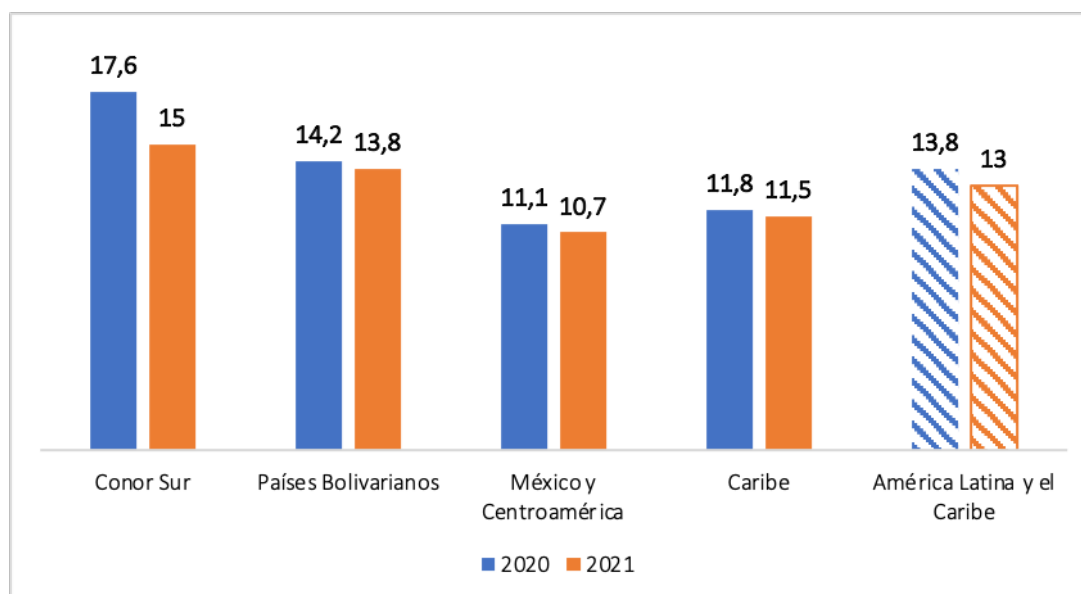
Figura 16: Gasto público social. Países de América Latina y el Caribe, 2020-2021.
Gasto expresado como porcentaje del PBI.



Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPAL (2022c).

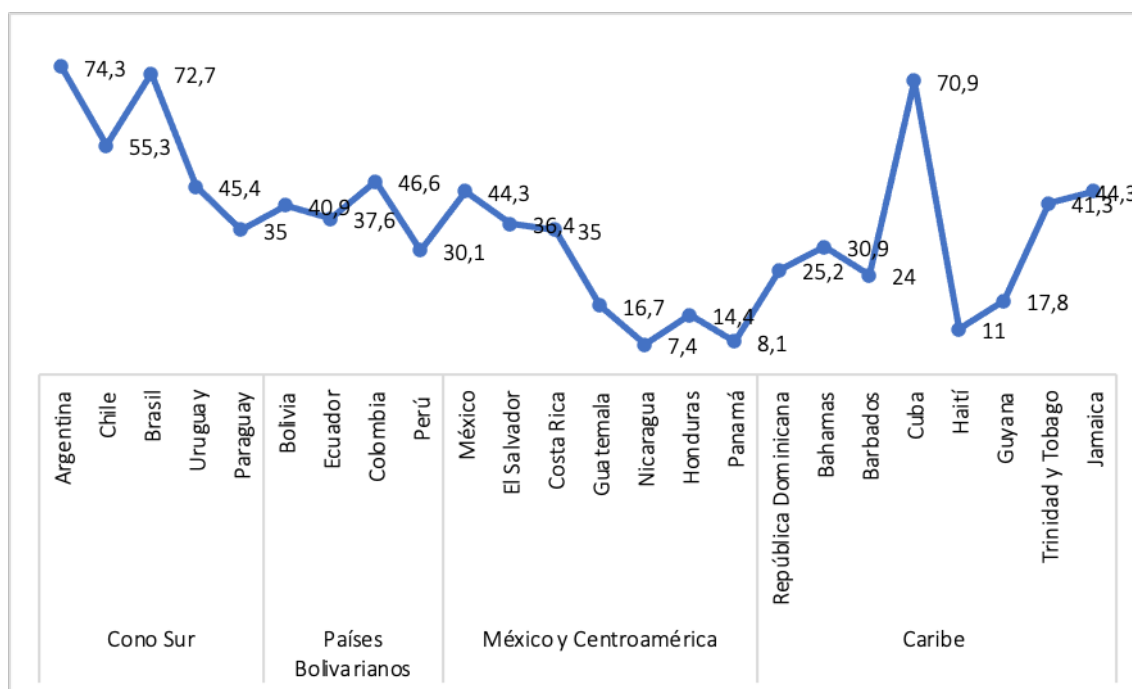
*Para Bolivia, Cuba, Haití y Panamá no se cuenta con el dato actualizado para 2021.

Figura 17: Gasto público social. Promedios para subregiones de América Latina y el Caribe, 2020-2021. Gasto expresado como porcentaje del PBI.



Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPAL (2022c).

Figura 18: Gasto en protección social. Países de América Latina y el Caribe, 2021. Gasto en protección social expresado como porcentaje respecto al gasto público social.



Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPAL (2022c).

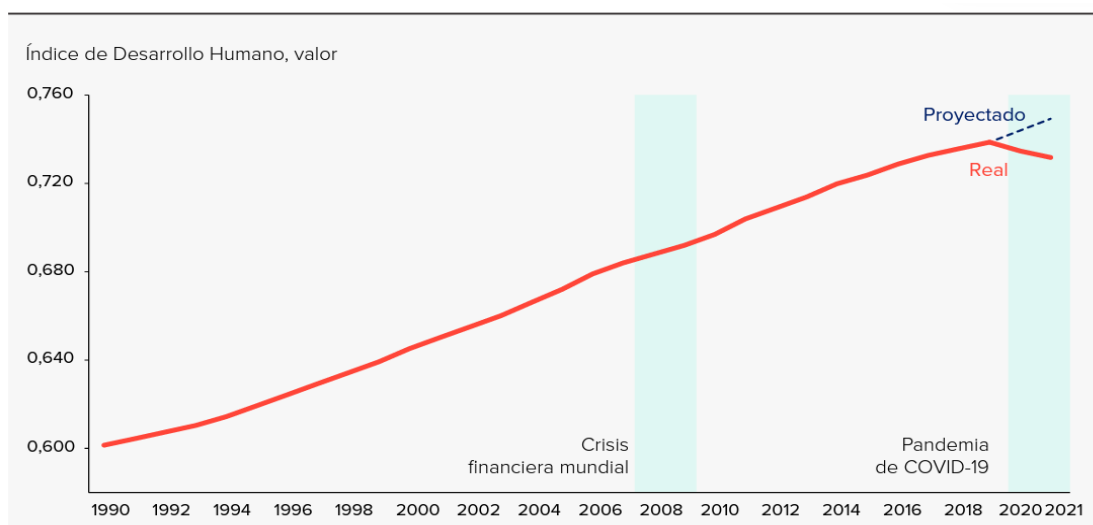
2.4. Desarrollo humano

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el PNUD lleva dos años empeorando a nivel mundial, luego de 5 años consecutivos de mejoras a nivel agregado. El IDH se configura como una herramienta que complementa las medidas de pobreza por ingresos a la hora de dar cuenta de las condiciones de vida de las personas, ya que incluye en su composición tres dimensiones: una vida larga y saludable (esperanza de vida al nacer), el conocimiento (años esperados/alcanzados de escolarización) y un nivel de vida decente (PNB per cápita).

Los cálculos del IDH para 2021 (PNUD, 2022) arrojaron un puntaje promedio de 0,754 para América Latina y el Caribe. Este resultado indica que la región tiene un desarrollo humano alto y la ubica por encima de la media mundial. Sin embargo, al igual que en el resto del mundo, el desempeño regional del IDH viene empeorando hace dos años, lo cual evidencia que la región no logra recuperar los niveles de desarrollo humano logrados hasta la aparición de la pandemia.

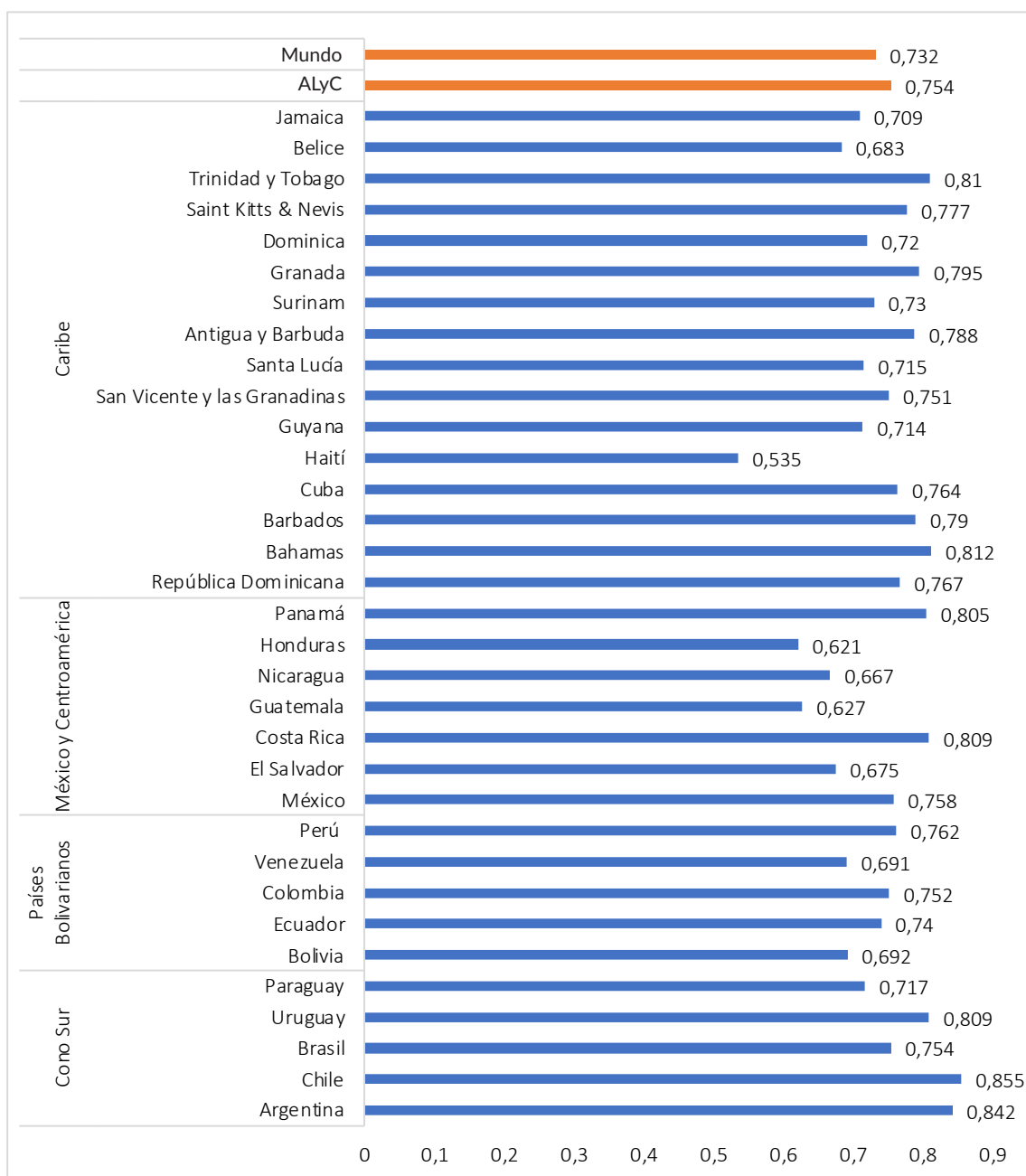
Si bien el puntaje regional del IDH para 2021 indica que la mayoría de los países de la región tienen un desarrollo humano alto. Sin embargo, este promedio regional esconde distintas situaciones particulares. En esa línea, se destacan Chile, Argentina, Uruguay, Panamá y Costa Rica como países de desarrollo humano muy alto (con puntajes superiores a 0,800). Por otro lado, hay un grupo de países con un desarrollo humano medio (con puntajes entre 0,550 y 0,699), siendo Belice, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Haití es el único país de América Latina y el Caribe con un desarrollo humano bajo.

Figura 19: Evolución del IDH a nivel mundial. 1990-2021.



Fuente: PNUD (2022).

Figura 20: IDH para los países de América Latina y el Caribe. 2021.



Fuente: elaboración propia en base a PNUD (2022).

2.5. Alimentación

La garantía de una alimentación adecuada es una de las condiciones fundamentales para el efectivo ejercicio de otros derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, el impacto de la crisis de 2020 sobre el acceso a los alimentos y nutrición reviste graves con-

secuencias para los hogares, principalmente para aquellos que se encontraban en situación de vulnerabilidad socioeconómica antes de la pandemia y para aquellos cuyas condiciones de vida fueron directamente afectadas -ya sea por el deterioro o ausencia de ingresos y/o el aumento en los precios- por la emergencia sanitaria.

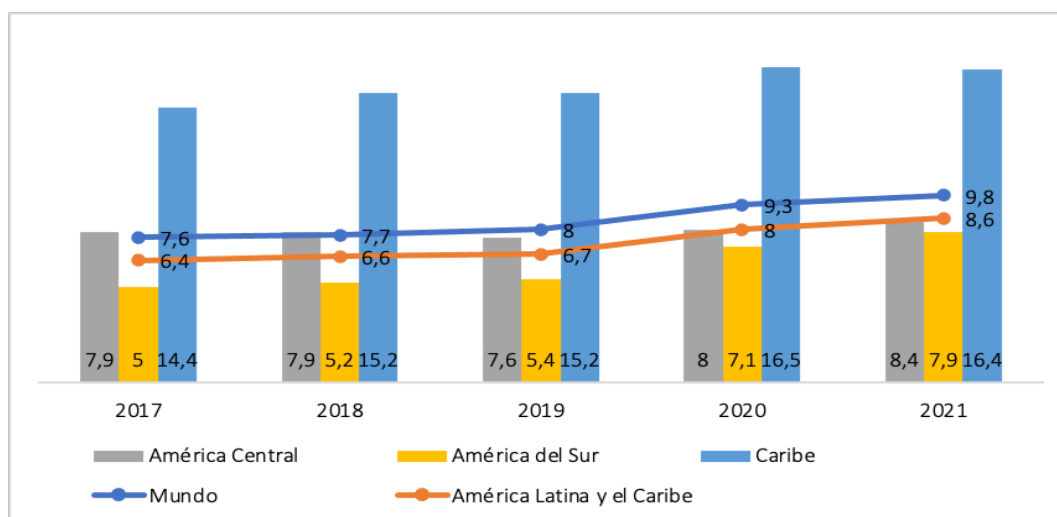
Considerando las estimaciones de FAO (2022), casi 3.100 millones de personas a nivel mundial no podían permitirse una dieta saludable en 2020, lo cual representó un incremento de 112 millones más de personas respecto a 2019. A pesar de las esperanzas depositadas en la reactivación económica, el hambre en el mundo aumentó todavía más en 2021. Esto confirma las profundas desigualdades entre países y los heterogéneos patrones de recuperación socioeconómica entre ellos. La subalimentación⁸ y la inseguridad alimentaria⁹ vienen registrando tendencias preocupantes a nivel mundial y regional, con un incremento del hambre entre 2019-2020-2021.

Al observarse los datos de FAO (2022), se registra que la subalimentación en América Latina y el Caribe pasó de 6,7% en 2019 a 8,6% en 2021. Este último dato indica que 56,5 millones de personas se vieron afectadas por el hambre en la región. La subalimentación también aumentó en las subregiones, pero a ritmos distintos: en 2021 la subalimentación de América del Sur fue de 7,9%, mientras que la de América Central fue de 8,4%. En el Caribe esto ascendió a 16,4% (6,6 puntos porcentuales más que la media mundial).

8 La subalimentación se define como la condición de un individuo cuyo consumo habitual de alimentos es insuficiente para proporcionarle la cantidad de energía alimentaria necesaria a fin de llevar una vida normal, activa y sana. Se mide teniendo en cuenta la prevalencia (porcentaje) de individuos de la población que viven en hogares donde al menos un adulto sufre inseguridad alimentaria (FAO, 2022).

9 La inseguridad alimentaria hace referencia al acceso limitado a los alimentos, a nivel individual o familiar, debido a la falta de dinero u otros recursos. La gravedad de la inseguridad alimentaria se calcula mediante la utilización de los datos recopilados con el módulo de encuesta de la escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES), un conjunto de ocho preguntas en las que se pide a los encuestados que informen de las condiciones y experiencias normalmente relacionadas con la falta de acceso a los alimentos (FAO, 2022).

Figura 21: Prevalencia de la subalimentación. Mundo y regiones de América Latina y el Caribe. 2017-2021. En porcentajes.



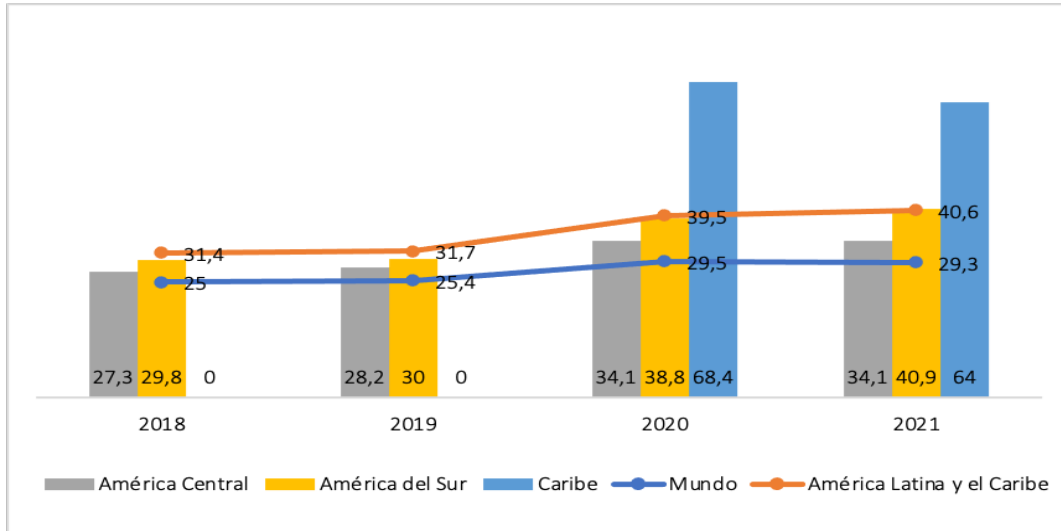
Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO (2022).

En el caso de la inseguridad alimentaria grave o moderada, se puede tomar nota de que los valores para América Latina y el Caribe se encuentran por encima de los promedios mundiales. En 2021 la inseguridad alimentaria grave o moderada alcanzó a 4 de cada 10 personas en América Latina y el Caribe, lo cual se traduce en 239,7 millones de personas que experimentaron falta de acceso a los alimentos en la región (60 millones de personas más respecto a 2019). En América Central el 34,1% de las personas experimentaron inseguridad alimentaria grave o moderadas, ascendiendo esto a 40,9% en América del Sur y a 64% en el Caribe.

El registro de la inseguridad alimentaria grave denota que, si bien América Latina y el Caribe tenía valores similares a los mundiales, a partir de 2020 se abrió una brecha. Para 2021, 14,2% de la población de la región había sufrido las formas más graves de inseguridad alimentaria, en contraste con el 11,7% a nivel mundial. En términos absolutos, esto implica que más de 80 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria grave en la región durante 2021 (31 millones más respecto a 2019).

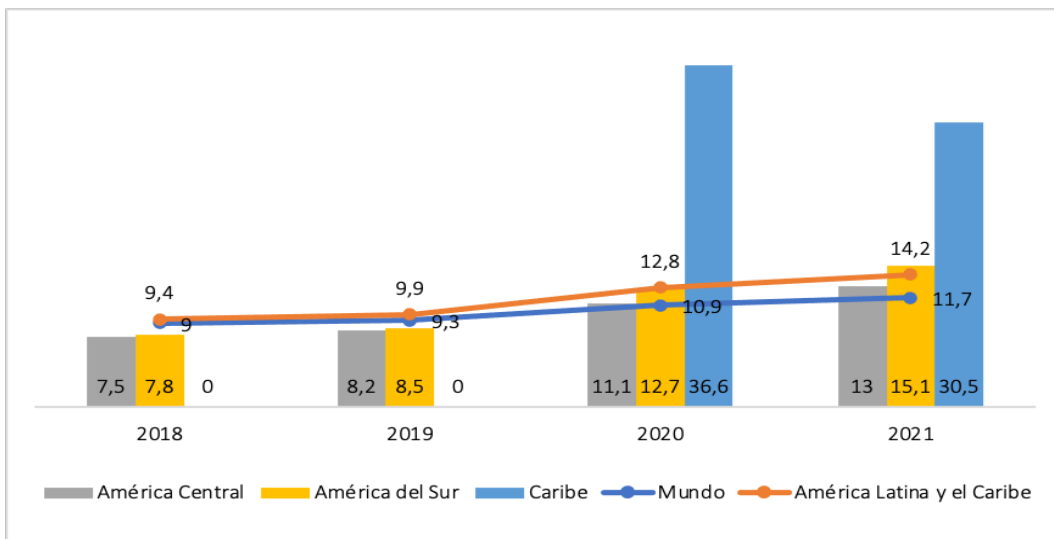
Los últimos datos de FAO (2023) indican que la subregión del Caribe es la más afectada por las privaciones en el acceso a los alimentos. Haití fue el país más afectado por la inseguridad alimentaria moderada o grave en 2019-2021, con un 82,5%. Durante el mismo periodo, en Jamaica, la mitad de la población se vio afectada (50,3%), y en Trinidad y Tobago, el 43,3%. En Barbados y San Vicente y las Granadinas, más del 30% de la población experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave. Granada y Saint Kitts y Nevis mostraron una prevalencia superior al 20%.

Figura 22: Prevalencia de la inseguridad alimentaria grave o moderada. Mundo y regiones de América Latina y el Caribe. 2018-2021. En porcentajes.



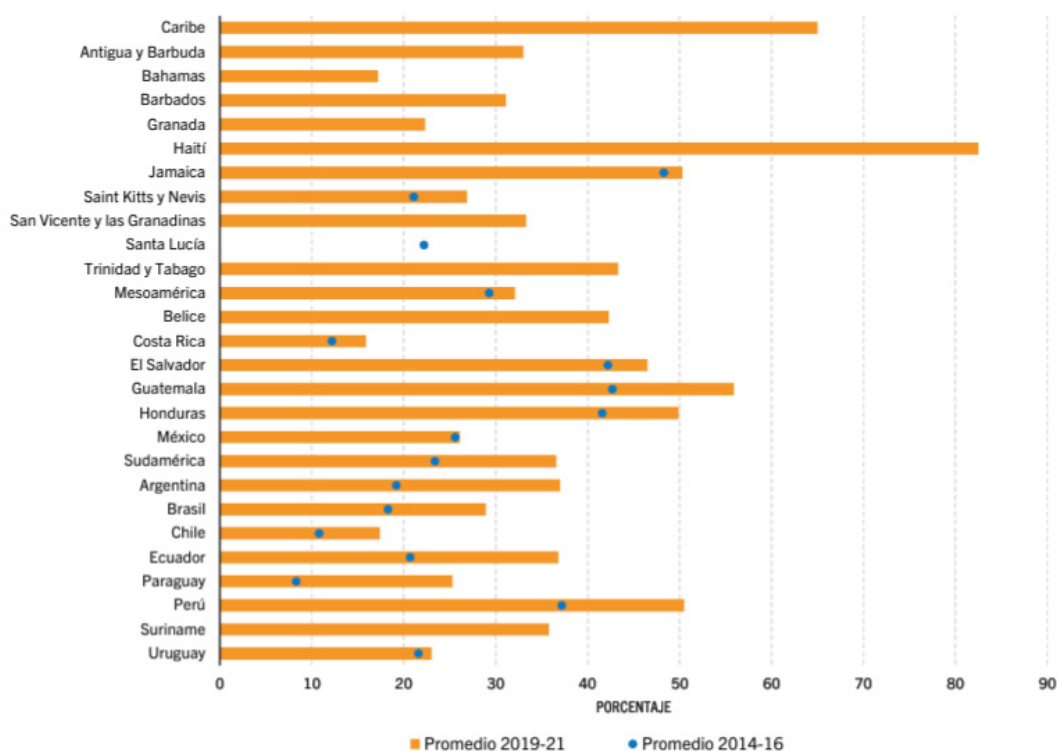
Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO (2022).

Figura 23: Prevalencia de la inseguridad alimentaria grave. Mundo y regiones de América Latina y el Caribe. 2018-2021. En porcentajes.



Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO (2022).

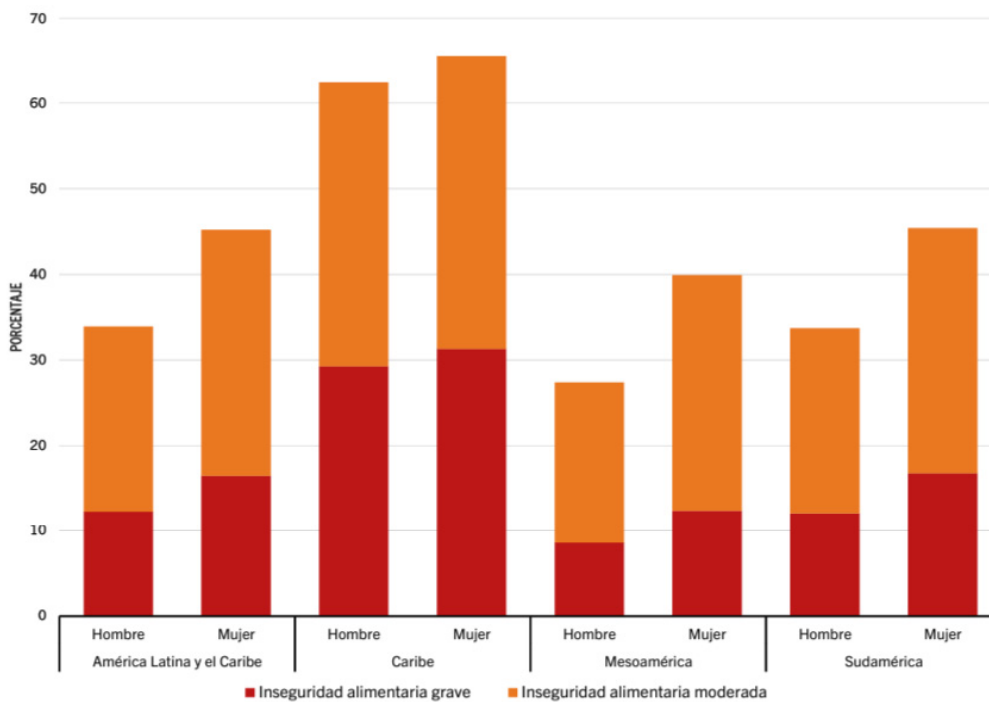
Figura 24: Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en América Latina y el Caribe. Promedios 2014-2016 y 2019-2021.



Fuente: FAO (2023).

Según FAO (2023), la pobreza, desigualdad y exclusión social suponen factores que incrementan "... el riesgo de inseguridad alimentaria, dietas poco saludables y malnutrición en todas sus formas", por esta razón, la pandemia de COVID-19 tuvo consecuencias desproporcionadas en el acceso a los alimentos por parte de grupos vulnerables. En esta línea, los últimos datos disponibles sobre inseguridad alimentaria en la región dan cuenta de la ampliación de una brecha de género: en 2021, la inseguridad alimentaria moderada o grave en América Latina y el Caribe afectó al 45,2% de las mujeres y al 33,9% de los hombres, lo cual implica una brecha de 11,3 puntos porcentuales.

Figura 25: Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave por sexo. América Latina y el Caribe y subregiones, 2021.



Fuente: FAO (2023).

2.6. Educación

Pese a los avances de las últimas décadas en acceso e inclusión educativa en todos los niveles, desde la primera infancia a la educación superior, los países de la región arrastraban serias deudas en igualdad y calidad previo a la crisis provocada por la pandemia, que ya hacían difícil alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 para el año 2030.

En 2021, el gasto en educación alcanzó 4,1% del PIB (30,5% del gasto social total) en América Latina y el Caribe. Si bien el promedio del gasto público en educación de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2019 alcanzó el 4,9% del PIB, cifra levemente superior a la de la región (4% del PIB en 2019), el gasto en educación por nivel educativo es 6 veces el monto por estudiante de América Latina y el Caribe en preprimaria, 5,7 veces en primaria, 5,3 veces en secundaria y 6,1 veces en educación terciaria.

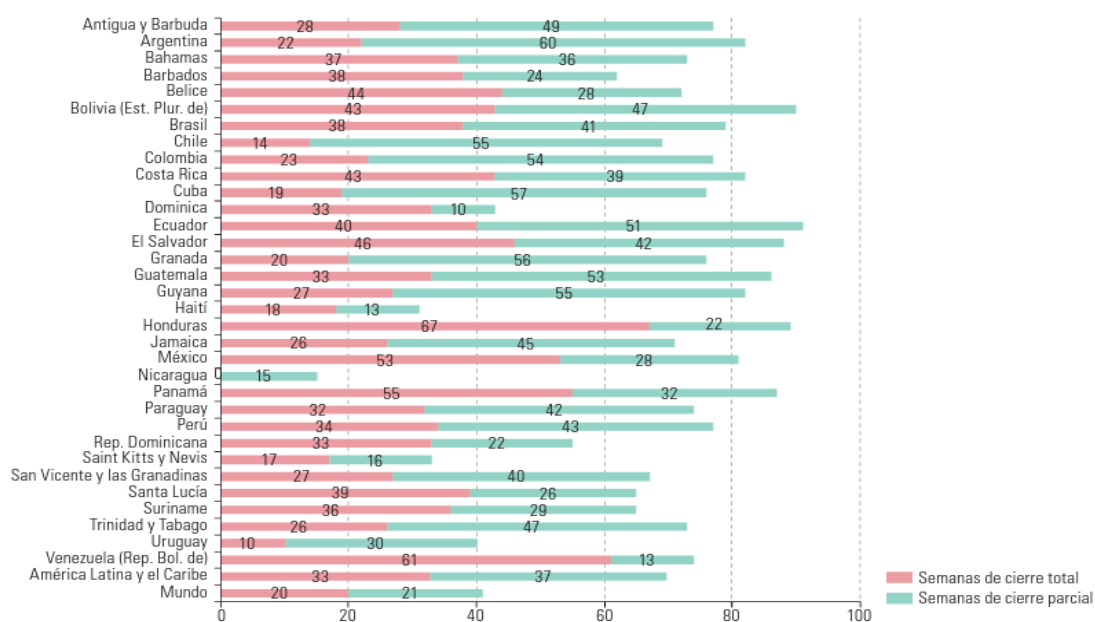
Desde el comienzo de la pandemia los alumnos de la región han perdido parcial o completamente en promedio dos tercios de los días de clases presenciales. Esto equivale a una pérdida estimada de 1,5 años de aprendizaje y afecta en mayor medida a los más pequeños

y los más vulnerables. América Latina y el Caribe sufrió el apagón educativo más prolongado a nivel internacional (en promedio 70 semanas de cierre de establecimientos frente a 41 semanas en el resto del mundo), lo que exacerbó las desigualdades preexistentes en materia de acceso, inclusión y calidad.

Figura 26: Cierre total y parcial de establecimiento educativos primarios y secundarios. Países de América Latina y el Caribe. Febrero 2020-marzo 2022. En número de semanas.

Gráfico II.1

América Latina y el Caribe (33 países) y mundo: cierre total o parcial de establecimientos de educación primaria y secundaria, febrero de 2020 a marzo de 2022 (En número de semanas)

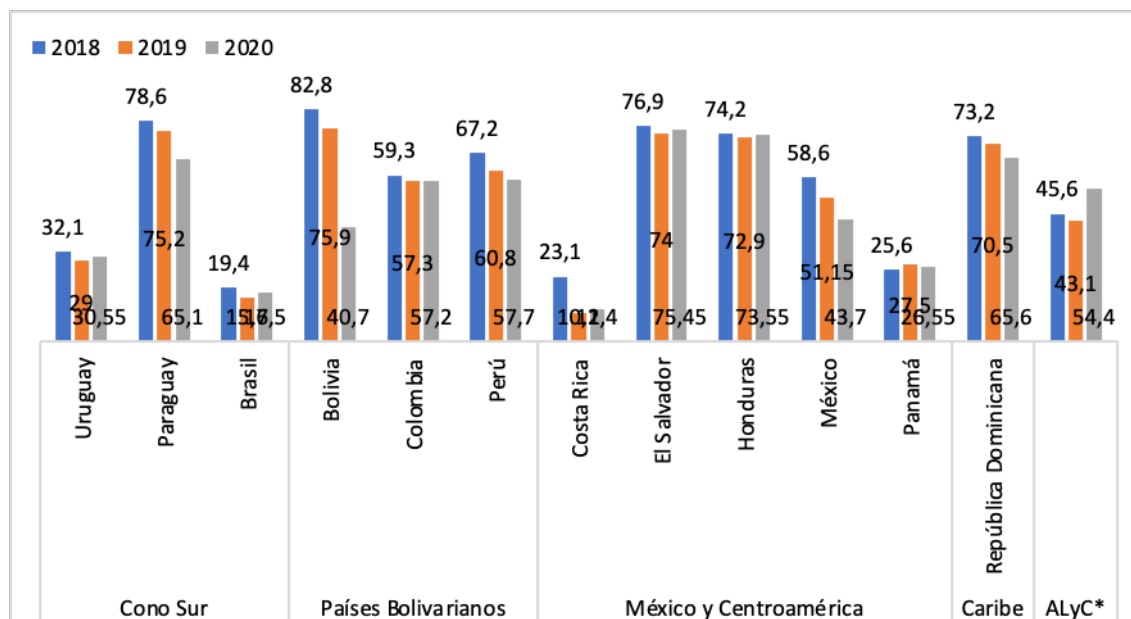


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Respuesta Educativa COVID-19 [base de datos en línea] <https://covid19.uis.unesco.org/data/>; M Huepe, A. Palma y D. Trucco, "Educación en tiempos de pandemia: una oportunidad para transformar los sistemas educativos en América Latina y el Caribe", *serie Políticas Sociales*, N° 243 (LC/TS.2022/149), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022.

Fuente: CEPAL (2022c).

Durante la pandemia, una de las principales limitaciones para la continuidad educativa fueron las desigualdades en el acceso a conectividad, equipamiento y habilidades digitales. Según los datos de CEPALSTAT (2022), en 2020 el 54,4% de la población de América Latina y el Caribe no tenían conexión a internet en sus hogares (lo cual representó un incremento de casi 10 puntos porcentuales respecto a 2018-19). Hacia 2021, en 8 de 12 países de la región, más del 60% de la población pobre menor de 18 años no tenía conectividad en el hogar.

Figura 27: Población sin acceso a internet en el hogar. Países de América Latina y el Caribe, 2018-2020. En porcentajes de personas.



Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (2022).

* Promedio ponderado

Nota: los datos 2020 de Uruguay, Brasil, El Salvador, México y Panamá son proyecciones.

De acuerdo con la CEPAL (2022c), el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja de forma remunerada aumentó de 22,3% en 2019 a 28,7% en 2020, afectando especialmente a las mujeres jóvenes (36% de ellas se encontraba en esta situación, comparado con un 22% de los hombres). Por otra parte, si bien se observa una elevada participación de las mujeres en todos los niveles educativos, persisten brechas de género importantes en términos de desempeño y áreas de formación. En promedio, las estudiantes mujeres tienen peores desempeños en matemática y ciencias durante la educación básica (CEPAL, 2022c), disparidades que se profundizan en los cuartiles de ingresos más bajos. Asimismo, en la mayoría de los países de la región la proporción de mujeres graduadas en carreras CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) no supera el 40%.

Según la CEPAL (2022c), el interés de las mujeres jóvenes respecto a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas está influenciado por factores como el nivel educativo y la profesión los progenitores, el nivel socioeconómico del hogar y la influencia de las pares femeninas y los medios de comunicación. A su vez, la carga de trabajo doméstico y de tareas no remuneradas que recae mayoritariamente en las estudiantes mujeres, sobre todo en el caso de las que pertenecen a estratos de ingresos bajos, constituyen un obstáculo a lo largo de la vida de las mujeres, tanto en la trayectoria educativa como en la laboral. Esa carga también limita el tiempo que pueden dedicar a actividades de aprendizaje continuo, a explorar el

ciberespacio y a adquirir nuevas habilidades digitales que motiven el acceso a carreras CTIM (Vaca-Trigo y Valenzuela, 2022).

2.7. Hacia el fin de la pandemia de COVID-19: contagios, muertes y vacunación.

El año 2022 representó una nueva etapa en la evolución de la pandemia de COVID-19. Si bien todavía el estado de emergencia continúa vigente, según representantes de la OMS “el final está a la vista”¹⁰, al mismo tiempo que los aprendizajes de los últimos años serán aprovechados para generar “preparación, prevención, disposición operativa y respuesta más robustas frente a pandemias en el ámbito mundial, regional y nacional”¹¹.

Las tendencias epidemiológicas de 2022 arrojan indicios de una desaceleración en los niveles de contagio de COVID-19 y una marcada caída en el número de personas fallecidas. Luego las campañas masivas de vacunación de 2021, la evidencia indicaría que la inmunización fue fundamental para reducir los efectos negativos del virus.

El surgimiento de nuevas variantes del virus en 2021 y el desigual acceso a las vacunas causaron los mayores picos de muertes a nivel mundial durante enero y abril de ese año. En enero de 2022 se registró el último pico mundial de contagios y muertes, y a partir de entonces la situación epidemiológica empezó a mejorar. Si bien se confirmaron millones de contagios a lo largo del año, estos no tuvieron correlación en la cantidad de fallecimientos.

Según los datos de la OMS¹² actualizados a diciembre de 2022, el saldo de la pandemia es de 643.875.406 casos confirmados de COVID-19 y 6.630.082 muertes. La región con más contagios es Europa, seguida de las Américas, el Pacífico Occidental, el Sudeste Asiático, el Mediterráneo Occidental y África.

Sin embargo, las Américas tienen el récord de muertes por COVID-19, con 2.876.420 personas fallecidas. De este total, el 60% corresponde a América Latina y el Caribe (1.781.009). Aproximadamente 3 de cada 10 muertes por COVID-19 sucedieron en América Latina y el Caribe, lo cual ubica a la región como una de las más castigadas por la mortalidad del virus.

El elevado número de defunciones en América Latina y el Caribe es explicable, en buena medida, debido a la incidencia de las comorbilidades o enfermedades crónicas en la pobla-

10 DW en español, 14 de septiembre de 2022. Ver.

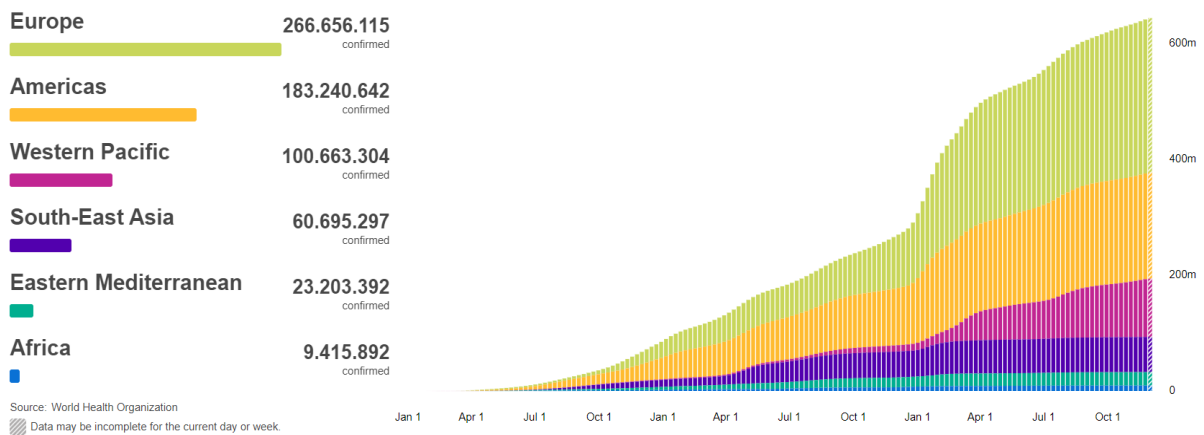
11 Comunicado de prensa OMS, 15 de septiembre de 2022. [Ver](#).

12 Ver OMS (COVID-19 Dashboard): <https://covid19.who.int/>

ción de la región, dentro de las cuales se encuentran las enfermedades cardiovasculares, renales, respiratorias, diabetes, obesidad e hipertensión. La población con este tipo de enfermedades fue la más susceptible a tener un cuadro grave de la enfermedad por COVID-19, en comparación con aquellos que no tienen comorbilidades (OPS, 2021).

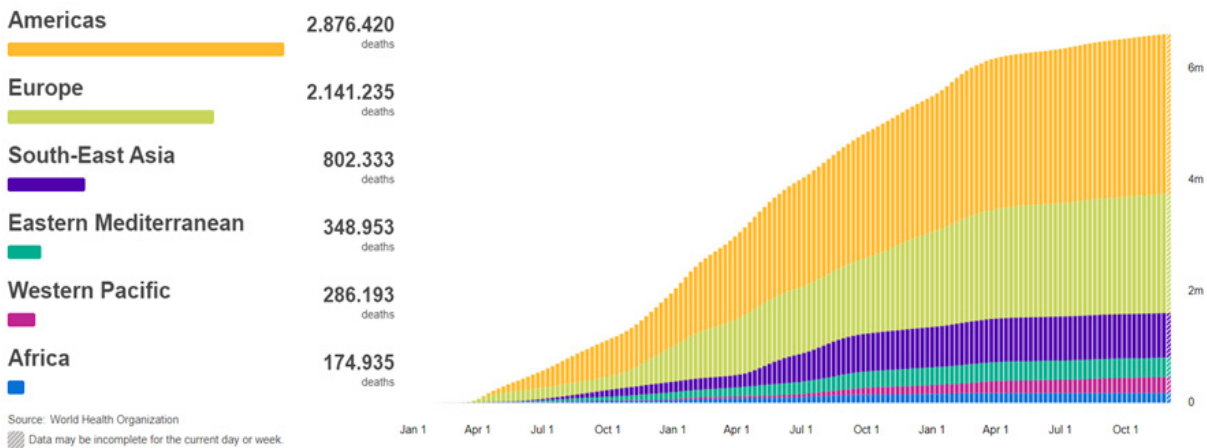
A su vez, cabe destacar la incapacidad de los sistemas de salud latinoamericanos para dar respuesta a la demanda de servicios que implicó la pandemia, principalmente en términos de disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos y la escasez de insumos clave como respiradores artificiales y oxígeno. A esto se suma el desigual acceso a las vacunas, que atravesó prácticamente todo el año 2021.

Figura 28: Cantidad de casos confirmados de COVID-19 por regiones. Enero 2020-diciembre 2022.



Fuente: OMS (COVID-19 Dashboard).

Figura 29: Cantidad de muertes por COVID-19 por regiones. Enero 2020-diciembre 2022.

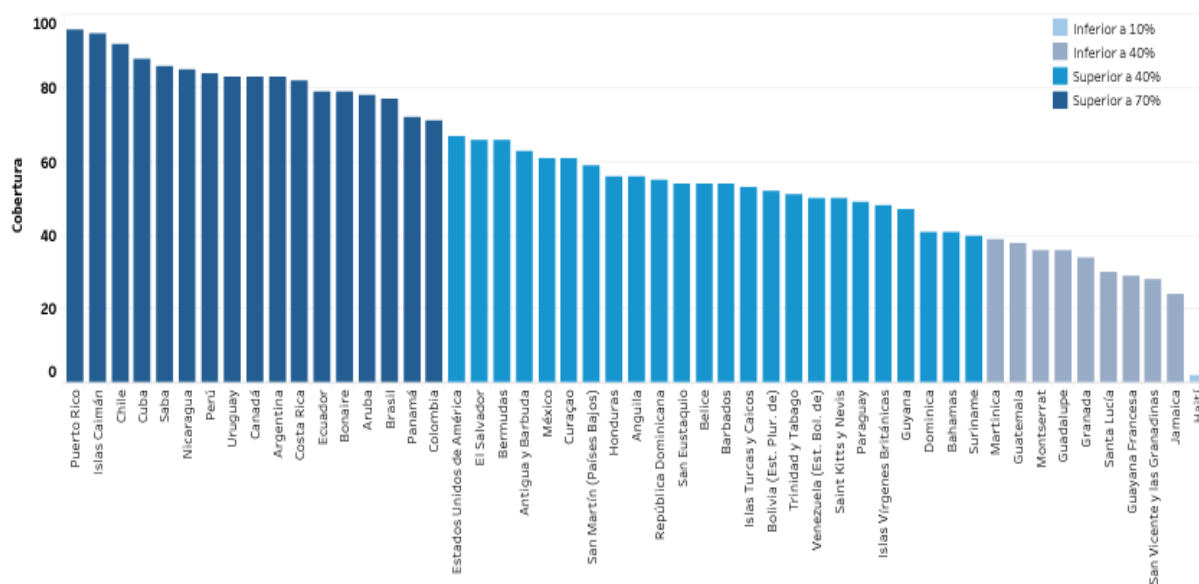


Fuente: OMS (COVID-19 Dashboard).

Según datos de la OPS (2022), en 2021 no hubo un acceso equitativo a la vacuna contra el COVID-19. El proceso de vacunación fue muy heterogéneo en América Latina y el Caribe debido a la oferta limitada de vacunas que resultó de la producción y las compras anticipadas por parte de los países de altos ingresos. A pesar de que América Latina y el Caribe ha mejorado su posición relativa en cuanto a la adquisición anticipada de vacunas, sigue existiendo asimetría en el acceso a ellas, tanto respecto a su compra como a su distribución.

Los datos para las Américas actualizados a septiembre de 2022 dejan ver que el 69,4% de la población de los países de la región había completado su esquema de vacunación contra el COVID-19. Solamente 17 países habían alcanzado la meta de 70% de cobertura de vacunación, mientras que 24 países superaron el 40% de cobertura. 10 países se encontraban aún por debajo de 40% y 1 por debajo de 10%.

Figura 30: Cobertura del esquema completo de vacunación -dos dosis- contra el COVID-19 en las Américas (actualizado al 10 de septiembre del 2022). En porcentajes.



Fuente: OPS (2022).

A continuación, se presenta información relativa a la cantidad de casos confirmados de COVID-19, cantidad de muertes y cantidad de vacunas aplicadas¹³ cada 100 personas en las subregiones y países de América Latina y el Caribe (datos actualizados a diciembre 2022).

13 Ver Our World in Data - Coronavirus Pandemic: <https://ourworldindata.org/coronavirus>

En el Cono Sur se destaca la información de Brasil, con 34,4 millones de casos confirmados y 690 mil muertes, siendo este el país más afectado de América Latina y el Caribe en términos de contagios y mortalidad. Argentina acumula 9,7 millones de contagios y 130 mil muertes, mientras que Chile tiene 4,9 millones de casos y 62 mil muertes. Tanto Uruguay como Paraguay no superaron el millón de contagios. Mientras que el primero acumula 7,5 mil muertes, el segundo casi duplica esta cantidad, llegando a 19,6 mil.

Chile se posiciona como el país con mayor cantidad de vacunas aplicadas cada 100 habitantes -llegando casi a 3 dosis por persona-. Le siguen Uruguay, Argentina y Brasil con 2,5 vacunas aplicadas por persona. En Paraguay la vacunación todavía no alcanzó a 1,5 vacuna por persona. En el caso de los Países Bolivarianos, Colombia tiene la mayor cantidad de casos acumulados, con 6,3 millones. Le siguen Perú con 4,3 millones, Bolivia y Ecuador con aproximadamente un millón de casos cada uno y Venezuela con aproximadamente medio millón de casos.

En cuanto a la cantidad de muertes, Perú ocupa el 3er lugar en América Latina y el Caribe, con 217,5 mil personas fallecidas. Colombia registra 141,9 mil muertes, mientras que Ecuador y Bolivia 35,9 mil y 22,2 mil respectivamente. Las muertes registradas en Venezuela son aproximadamente 5.800.

Las campañas de vacunación de estos países muestran diferencias significativas. Mientras Perú aplicó más de 250 vacunas cada 100 habitantes, Ecuador superó levemente las 200 vacunas aplicadas cada 100 habitantes. En Colombia se aplicaron menos de 200 vacunas cada 100 habitantes y en Bolivia y Venezuela menos de 150 cada 100.

En Centroamérica se destaca México, con 7,1 millones de contagios y 330,6 mil muertes (ocupa el 2do lugar en cantidad de personas fallecidas a nivel regional). En Costa Rica, Panamá y Guatemala los contagios superan el millón. En El Salvador los casos confirmados llegan a 200 mil, mientras que en Belice y Nicaragua son menos de 6 mil.

Excluyendo a México, Guatemala es el país de Centroamérica con más personas fallecidas a causa del COVID-19, con 19 mil decesos. Le siguen Honduras, Costa Rica y Panamá, con 11 mil, 9 mil y 8,5 mil muertes respectivamente.

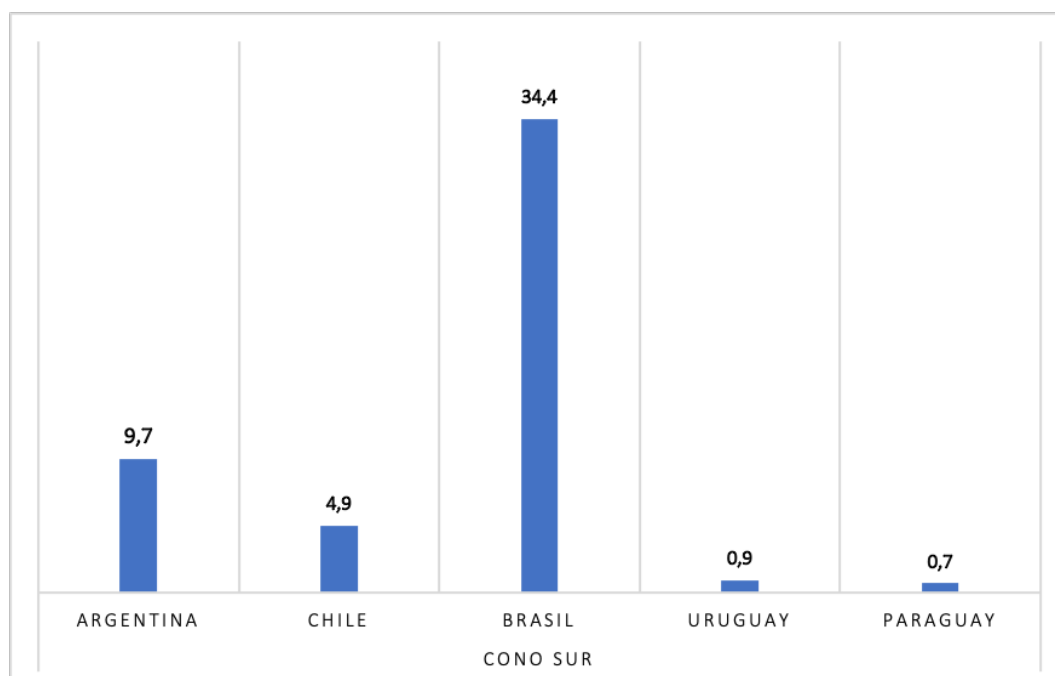
Al observar la cantidad de dosis aplicadas en esta subregión se puede mencionar que Guatemala es el país que menor cantidad de personas vacunadas tiene, ya que allí se aplicaron menos de 150 vacunas cada 100 personas. Por otro lado, Costa Rica superó las 200 vacunas aplicadas cada 100 habitantes. El resto de los países de Centroamérica tienen entre 150 y 200 dosis aplicadas cada 100 personas.

En la subregión del Caribe, se destaca Cuba como el país con más contagios, superando el millón, seguida de República Dominicana, con 0,6 millones. Por su parte, Barbados, Trinidad y Tobago y Jamaica tienen aproximadamente 100 mil casos acumulados. Bahamas, Haití, Guyana y Surinam acumulan entre 30 mil y 80 mil contagios. Por último, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Granada, Dominica y Saint Kitts & Nevis no superan los 10 mil contagios.

En cantidad de personas fallecidas, Cuba ocupa el primer lugar en el Caribe, con 8 mil decesos. República Dominicana, Trinidad y Tobago y Jamaica tienen entre 3 mil y 5 mil muertes acumuladas. Mientras que Guyana y Surinam tienen aproximadamente mil personas fallecidas, el resto de los países del Caribe no superan esa cantidad.

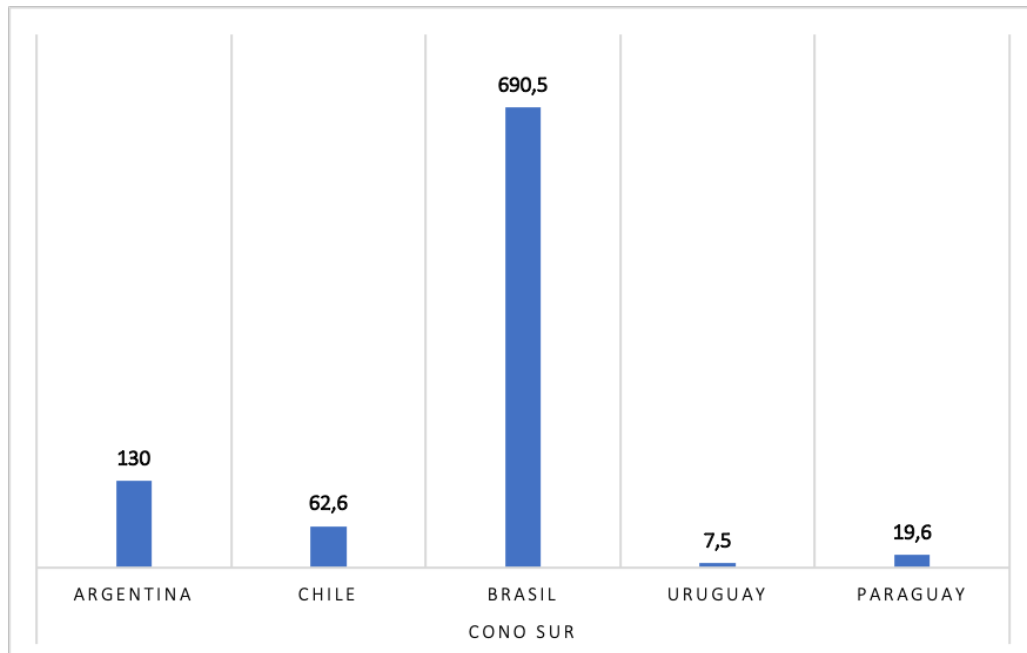
En el Caribe se observan las menores cantidades de vacunas aplicadas cada 100 habitantes. Todos los países aplicaron menos de 150 vacunas cada 100 habitantes menos dos excepciones: por un lado, Cuba, que aplicó más de 350 dosis cada 100 habitantes (es el país que más vacunas cada 100 habitantes aplicó en toda América Latina y el Caribe), y por otro lado, Haití, que tiene la menor cantidad de vacunas aplicadas en toda la región (apenas 4 dosis cada 100 habitantes).

**Figura 31: Cantidad de casos de COVID-19 confirmados al 9/12/22 en países del Cono Sur.
En millones de personas.**



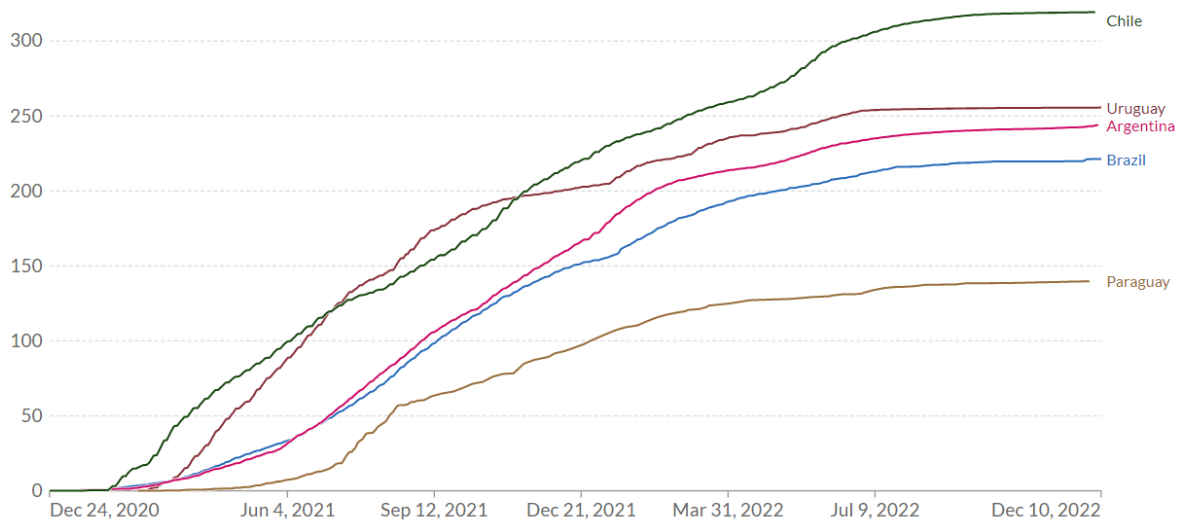
Fuente: elaboración propia en base a datos de la OMS (COVID-19 Dashboard).

Figura 32: Cantidad de muertes por COVID-19 al 9/12/22 en países del Cono Sur.
En miles de personas.



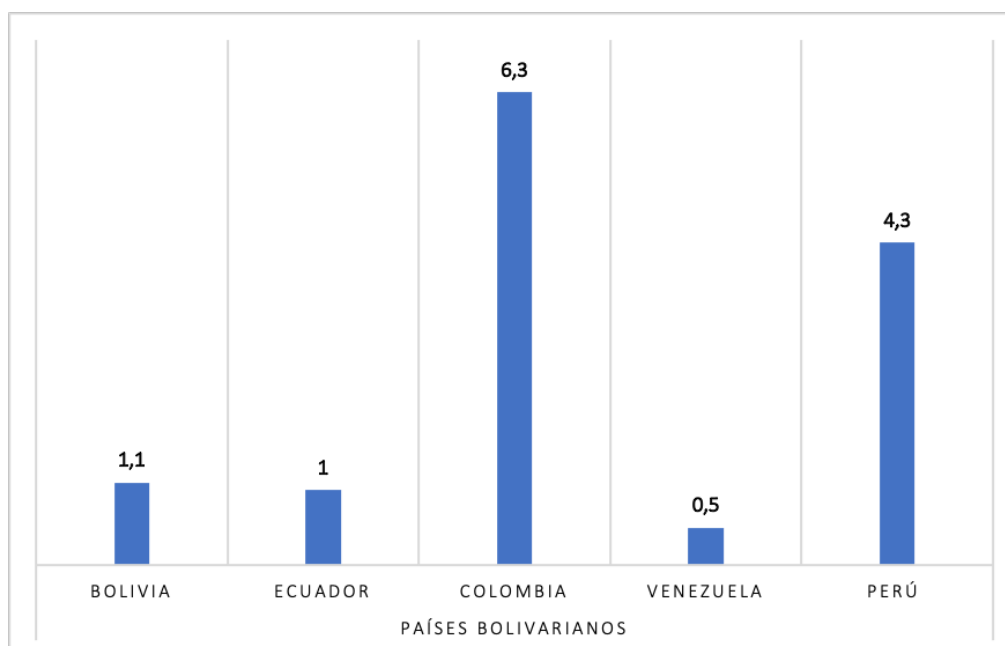
Fuente: elaboración propia en base a datos de la OMS (COVID-19 Dashboard).

Figura 33: Cantidad de dosis aplicadas de vacunas contra el COVID-19 cada 100 habitantes.
Diciembre 2020-Diciembre 2022, países del Cono Sur.



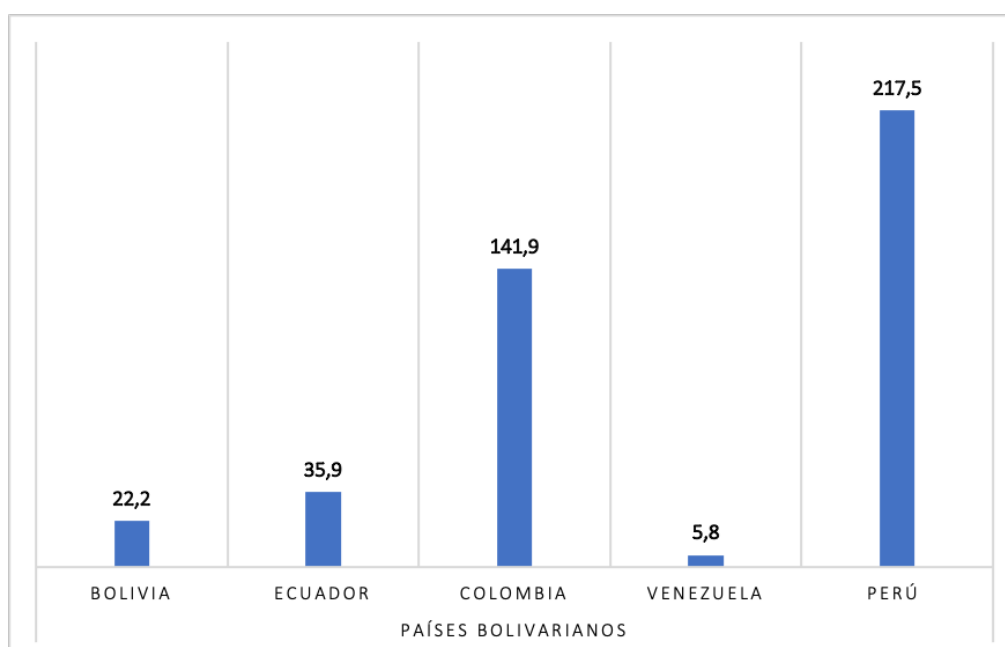
Fuente: Our World in Data COVID-19 dataset.

Figura 34: Cantidad de casos de COVID-19 confirmados al 9/12/22 en los Países Bolivarianos.
En millones de personas.



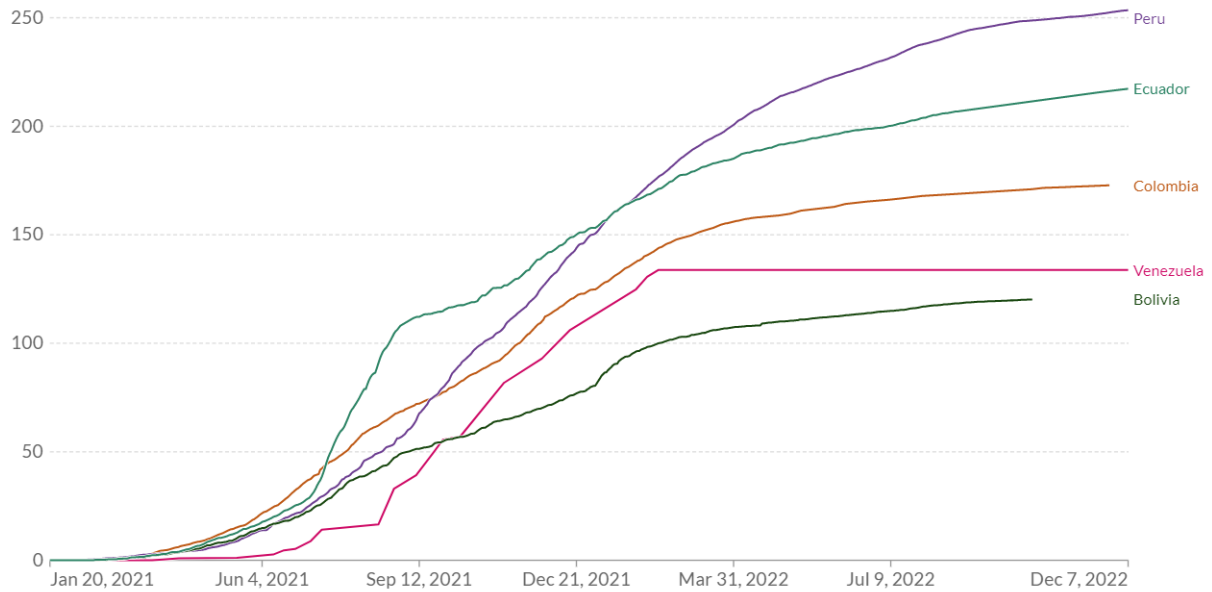
Fuente: elaboración propia en base a datos de la OMS (COVID-19 Dashboard).

Figura 35: Cantidad de muertes por COVID-19 al 9/12/22 en los Países Bolivarianos.
En miles de personas.



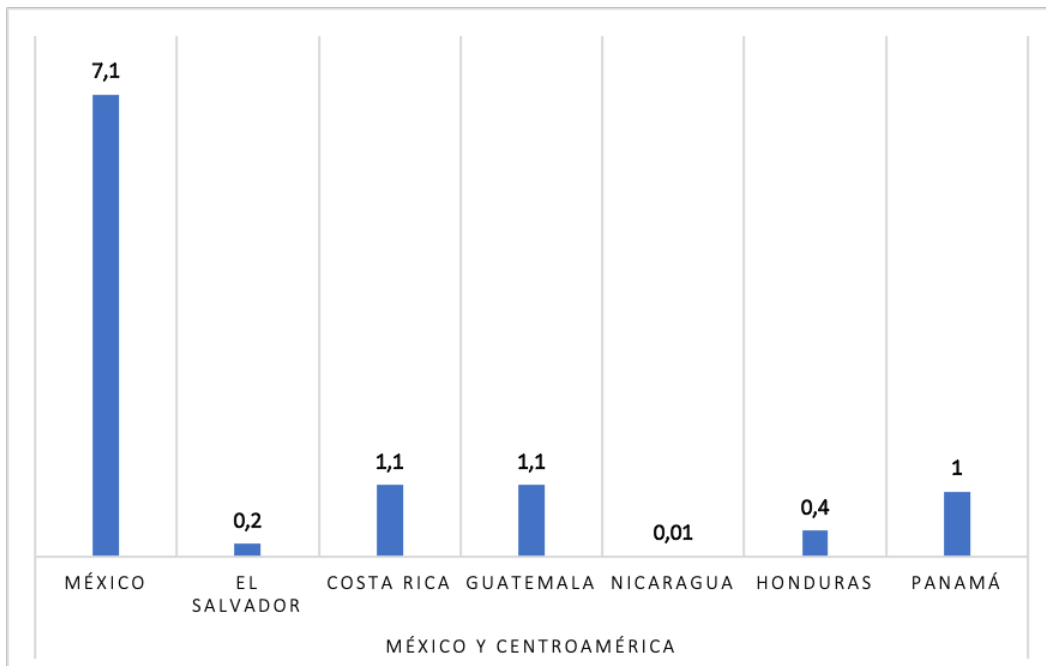
Fuente: elaboración propia en base a datos de la OMS (COVID-19 Dashboard).

Figura 36: Cantidad de dosis aplicadas de vacunas contra el COVID-19 cada 100 habitantes. Enero 2021-Diciembre 2022, Países Bolivarianos.



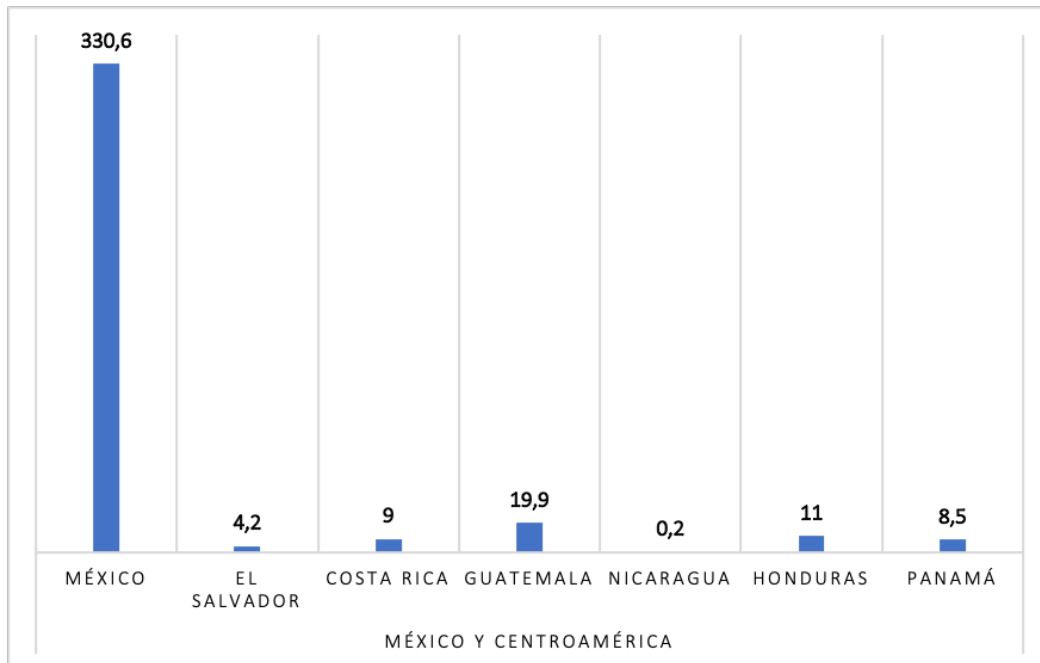
Fuente: Our World in Data COVID-19 dataset.

Figura 37: Cantidad de casos de COVID-19 confirmados al 9/12/22 en países Centroamérica. En millones de personas.



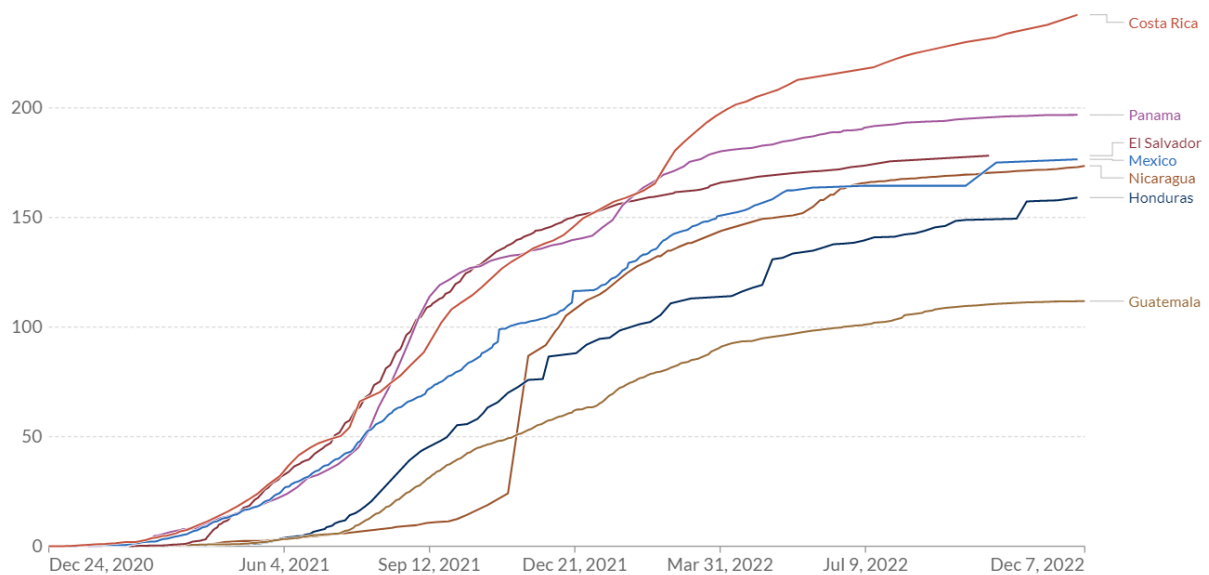
Fuente: elaboración propia en base a datos de la OMS (COVID-19 Dashboard).

Figura 38: Cantidad de muertes por COVID-19 al 9/12/22 en países de Centroamérica. En miles de personas.



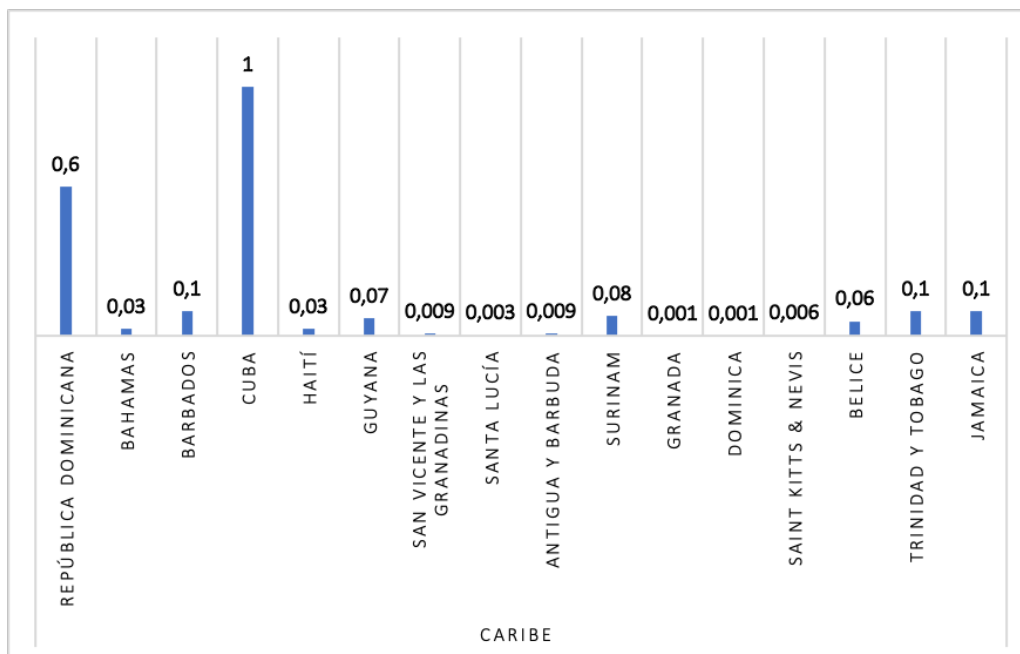
Fuente: elaboración propia en base a datos de la OMS (COVID-19 Dashboard).

Figura 39: Cantidad de dosis aplicadas de vacunas contra el COVID-19 cada 100 habitantes. Diciembre 2020-Diciembre 2022, países de Centroamérica.



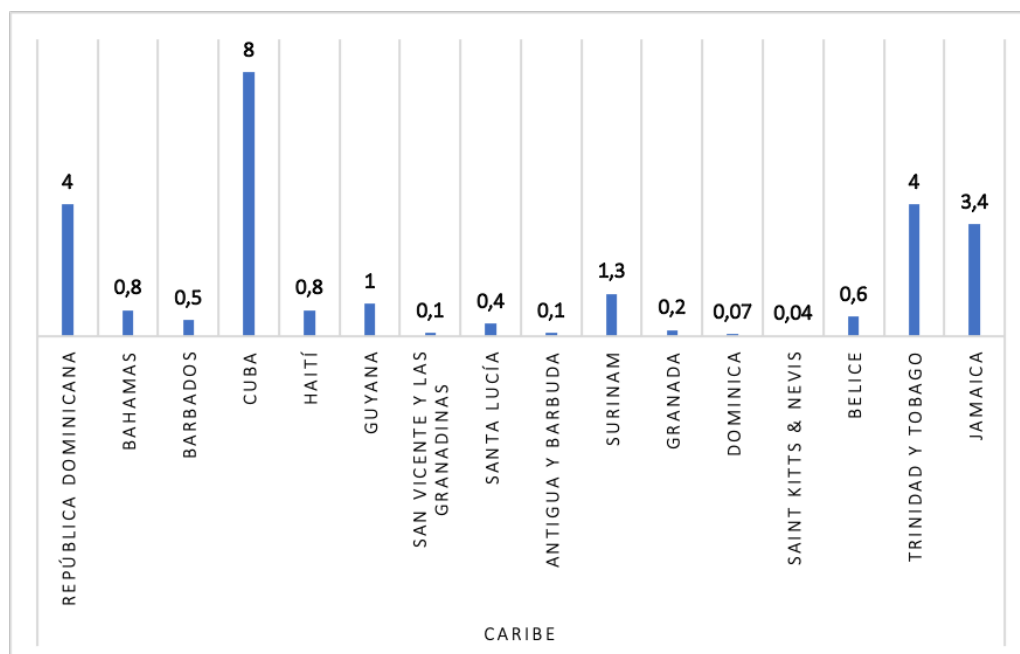
Fuente: Our World in Data COVID-19 dataset.

Figura 40: Cantidad de casos de COVID-19 confirmados al 9/12/22 en países del Caribe.
En millones de personas.



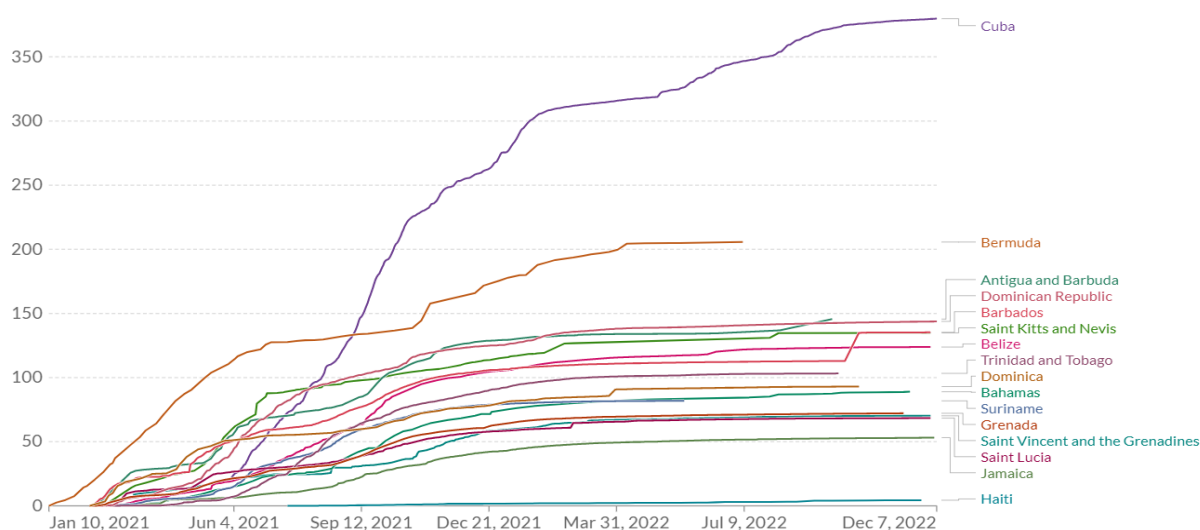
Fuente: elaboración propia en base a datos de la OMS (COVID-19 Dashboard).

Figura 41: Cantidad de muertes por COVID-19 al 9/12/22 en países del Caribe.
En miles de personas.



Fuente: elaboración propia en base a datos de la OMS (COVID-19 Dashboard).

Figura 42: Cantidad de dosis aplicadas de vacunas contra el COVID-19 cada 100 habitantes. Enero 2021-Diciembre 2022, países del Caribe.



Fuente: Our World in Data COVID-19 dataset.

2.8. Infancia y adolescencia

Si bien los niños, niñas y adolescentes no han sido víctimas directas -en términos de mortalidad- del COVID-19, la crisis de 2020 representó un gran obstáculo para su desarrollo y para el ejercicio y protección de sus derechos, tales como la educación, alimentación y salud (Marinho y Castillo, 2022).

Considerando la especial vulnerabilidad de los niños/as y adolescentes, se estima que los hogares con presencia de infancias tienen más dificultades para recuperarse de las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Así lo confirman datos actuales de UNICEF¹⁴ para América Latina y el Caribe¹⁵:

- Mientras que el 17% de los hogares sin niños/as no pueden satisfacer sus necesidades básicas durante más de dos semanas, esto asciende al 31% de los hogares con niños/as.
- El 26% de los hogares sin niños/as dependen de ingresos provenientes del trabajo informal para subsistir, lo cual se eleva al 37% de los hogares con niños/as.

14 Las familias de América Latina y el Caribe siguen luchando para recuperarse de la pandemia. Comunicado de prensa UNICEF, 18 de octubre de 2022.

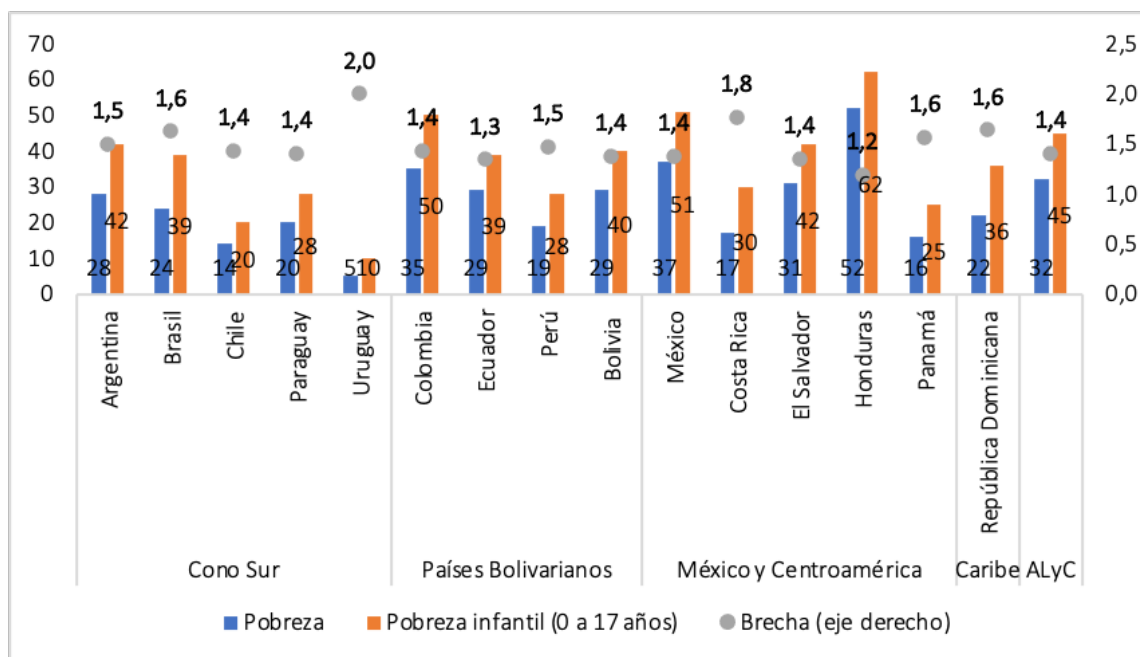
15 Son datos relevados entre noviembre 2021 y marzo 2022 a través de una encuesta telefónica realizada por UNICEF en 12 países de América Latina (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) y el Caribe Oriental.

- En términos de alimentación, el 26% de los adultos viviendo en hogares sin niños/as tuvo que reducir sus porciones de comida. Esto sucedió con el 50% de los adultos que viven en hogares con niños/as.

La incidencia de la pobreza suele afectar con más intensidad a los niños, niñas y adolescentes, ya que se encuentran más expuestos frente a la pérdida o caída de los ingresos monetarios de sus hogares. La información de CEPAL (2022c) muestra que, mientras la pobreza total de América Latina y el Caribe se ubicó alrededor del 32% en 2021, la pobreza entre niños, niñas y adolescentes llegó al 45%. Se estima que esto representa alrededor de 81 millones de niños/as y adolescentes, de los cuales 35 millones se encontrarían en situación de pobreza extrema.

En la región de Centroamérica se encuentran los dos países con mayores registros de pobreza infantil en 2021, siendo estos Honduras (62%) y México (50%). Entre los Países Bolivarianos se destaca Colombia con un 50% de niños, niñas y adolescentes bajo el umbral de la pobreza. En el caso del Cono Sur, Argentina y Brasil son los países con los porcentajes más alto, con 42% y 39% respectivamente.

Figura 43: Pobreza total y pobreza infantil (de 0 a 17 años). Países de América Latina y el Caribe y valores regionales. Año 2021.
En porcentajes de personas.

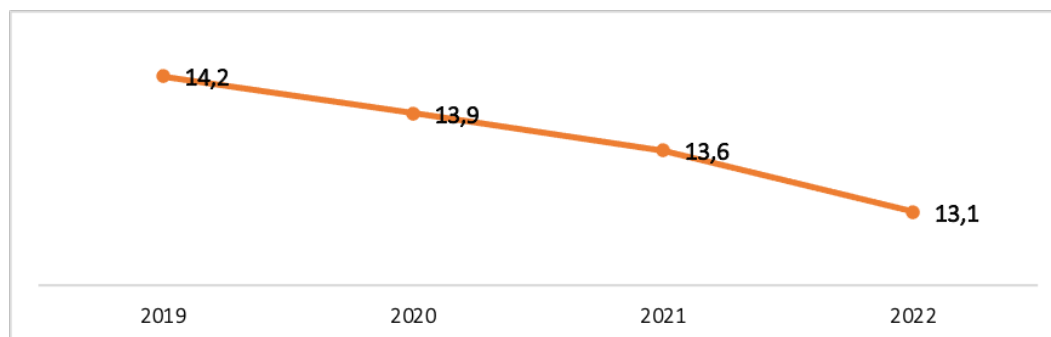


Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPAL (2022c).

Nota: la brecha corresponde al cociente entre la pobreza infantil y la pobreza total.

Al analizar las tasas de mortalidad infantil¹⁶ de la región, se puede tomar nota avances en cuanto a su reducción. Mientras que la tasa regional era de 14,2 muertes cada 1000 nacidos vivos en 2019, en 2022 esto descendió a 13,1 muertes cada 1000 nacidos vivos. Si se analizan las tasas por subregiones, se confirma la tendencia a la reducción de la mortalidad infantil en la mayoría de los países, salvo algunas excepciones.

Figura 44: Tasa de mortalidad infantil (muertes cada 1000 nacidos vivos). América Latina y el Caribe.



Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT¹⁷ (2022).

En el Cono Sur se destaca Uruguay que, más allá de ser uno de los países con menos mortalidad infantil, en 2022 alcanzó 5,8 muertes cada 1000 nacidos vivos -el valor más alto de los últimos 4 años-. Cabe mencionar que Paraguay -el país con mayor mortalidad infantil del Cono Sur- registró la misma tasa en 2019 y 2022 (16,4), a pesar de haber logrado una mejora entre 2020-2021.

Los Países Bolivarianos han logrado reducir las tasas de mortalidad infantil en los últimos 4 años. En 2022, Perú, Ecuador y Colombia registraron tasas de mortalidad que oscilaban entre 9,7 y 10,9. En contraposición, en Bolivia esta tasa se duplica y alcanza 24,9 muertes cada 1000 nacimientos. Sin embargo, este es el país de la subregión con el mayor ritmo de reducción de la mortalidad infantil entre 2019-2022. Por su parte, la mortalidad infantil en Venezuela se ubicó en 14,8 muertes cada 1000 nacidos vivos en 2022.

En Centroamérica, Guatemala tiene la tasa más alta de mortalidad infantil, que llegó a 19,8 en 2022, superando los valores de 2020 y 2021. Costa Rica también aumentó levemente su tasa de mortalidad infantil en 2022 respecto a 2021.

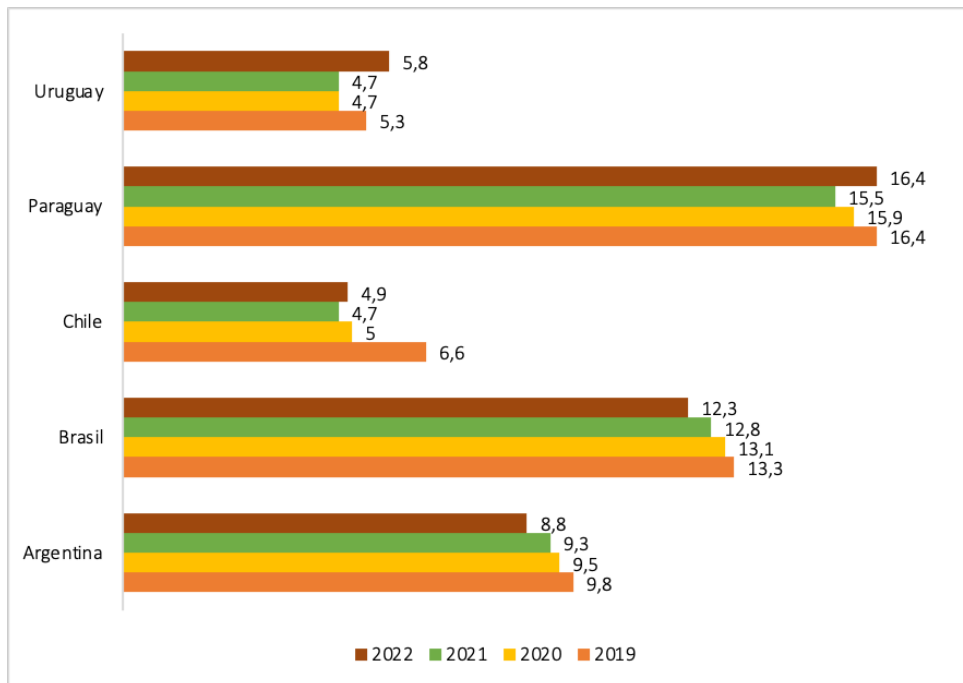
Respecto al Caribe, países como Belice, Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Santa Lucía aumentaron levemente sus tasas de mortalidad infantil en 2022 respecto a 2019. En esta subregión se exponen dos casos extremos: mientras que

16 Probabilidad de morir que tiene un recién nacido antes de cumplir un año de vida.

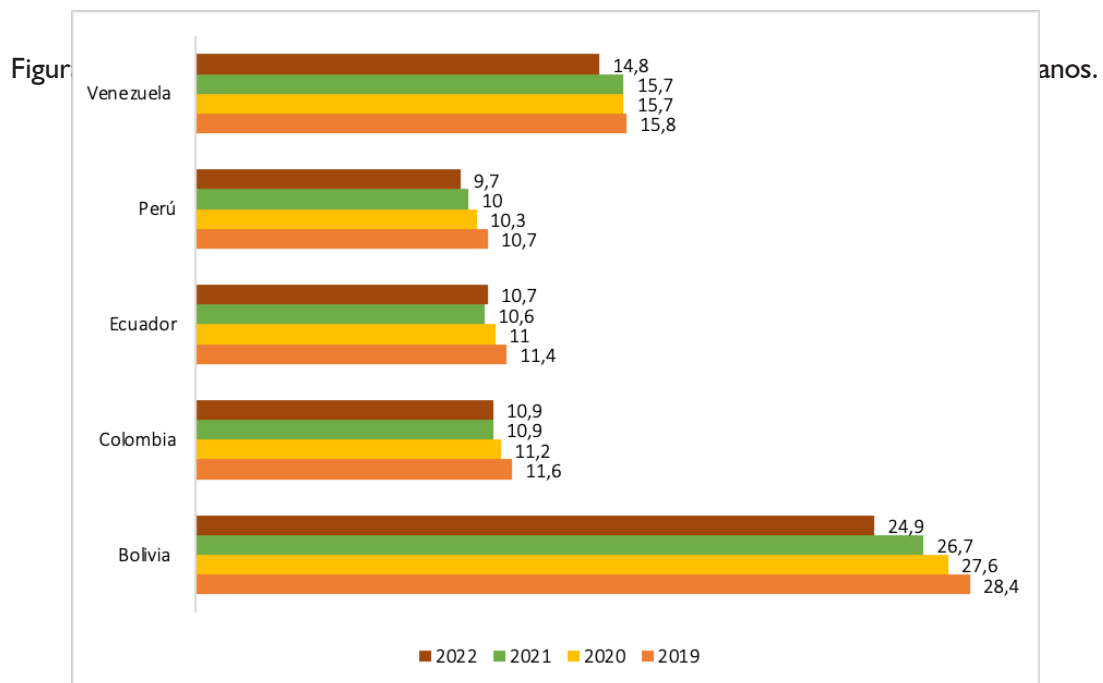
17 CEPALSTAT Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. Ver: <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html>

Cuba tiene la tasa de mortalidad infantil más baja de América Latina y el Caribe (4 muertes cada 1000 nacidos vivos), Haití tiene la más alta (43,4).

Figura 45: Tasa de mortalidad infantil (muertes cada 1000 nacidos vivos). Países del Cono Sur.

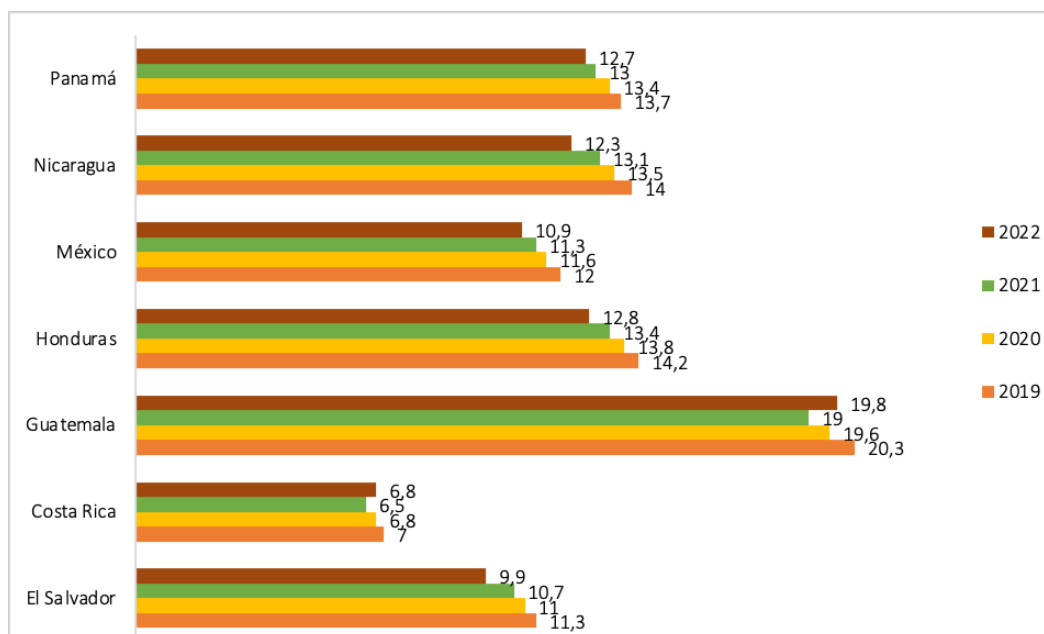


Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (2022).



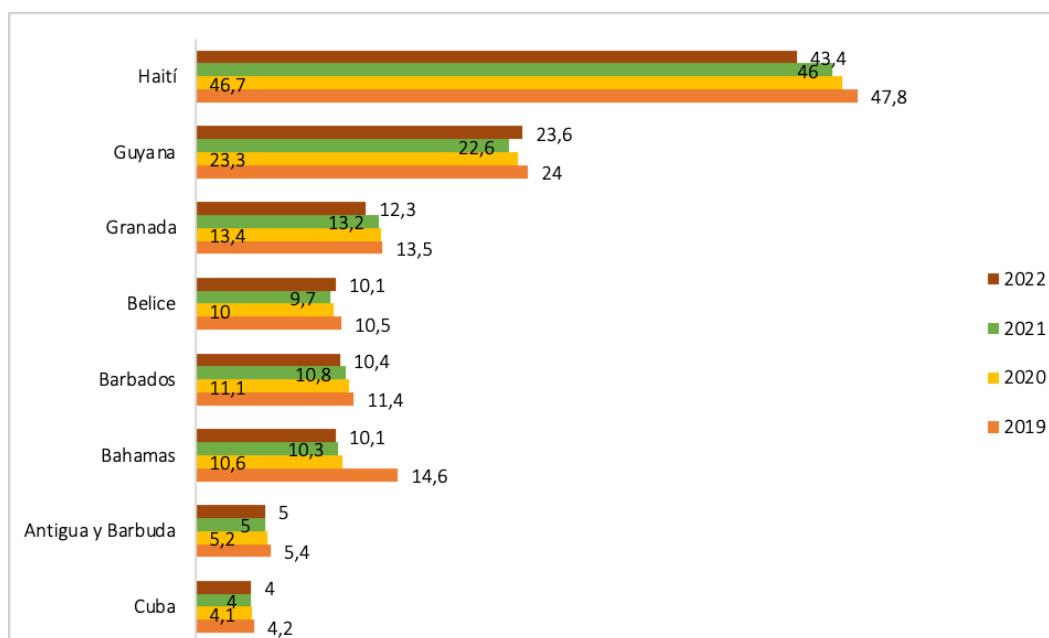
Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (2022).

Figura 47: Tasa de mortalidad infantil (muertes cada 1000 nacidos vivos). Países de Centroamérica.



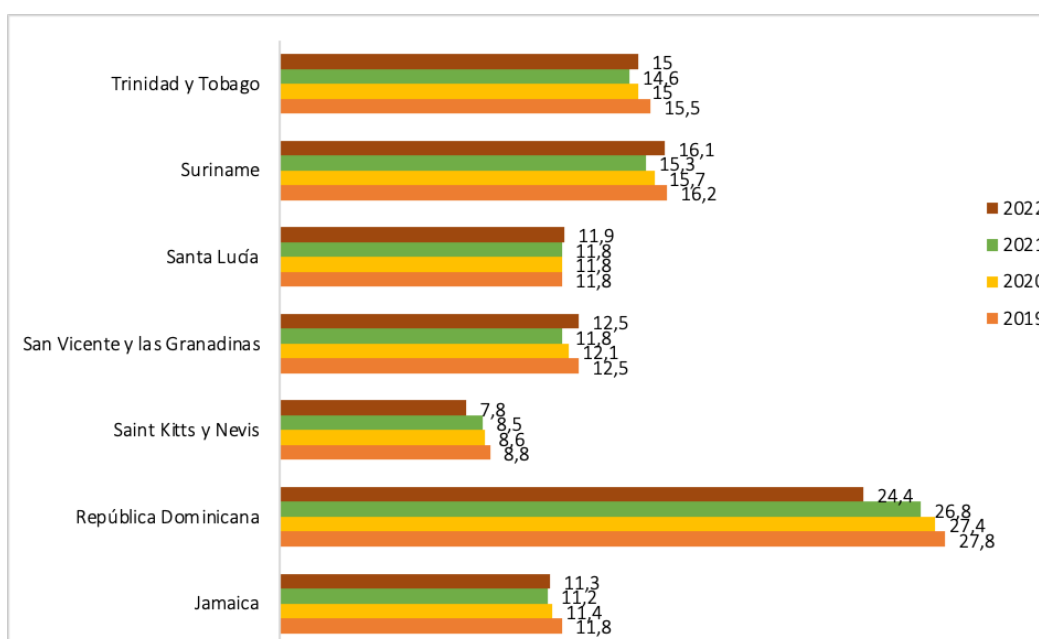
Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (2022).

Figura 48: Tasa de mortalidad infantil (muertes cada 1000 nacidos vivos). Países del Caribe.



Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (2022).

Figura 49: Tasa de mortalidad infantil (muertes cada 1 000 nacidos vivos). Países del Caribe.



Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (2022).

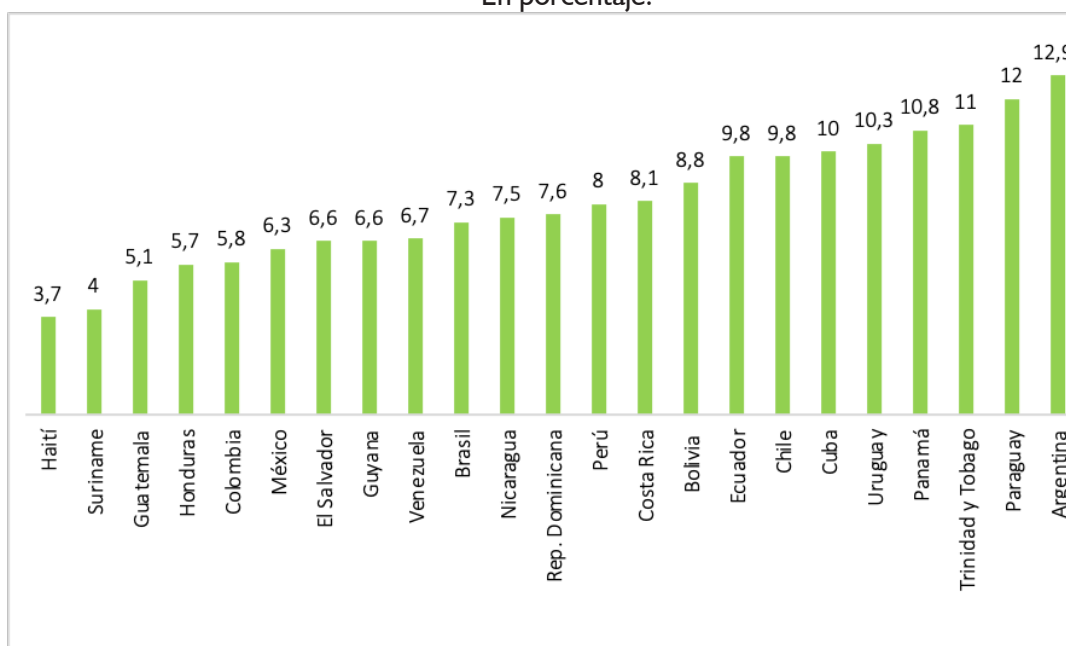
Ante la suba de precios generalizada dada por los cuellos de botella en la oferta de bienes durante la reactivación económica -luego del cierre productivo acaecido por la aparición del COVID-19-, las economías latinoamericanas sufrieron un duro golpe, evidenciado en la caída del PIB de los países de la región y en el aumento de los productos de la canasta básica, lo cual se reflejó en el empobrecimiento de las familias.

Frente a este panorama, cobra fuerza la preocupación por la potencial malnutrición infantil, siendo ampliamente conocido el impacto negativo que tiene esto en el desarrollo cognitivo de las infancias (Banks et al., 2020). La pandemia configuró un riesgo no solo de malnutrición infantil sino también de obesidad y/o sobrepeso. Se proyecta que para fines de 2022 podrían agregarse 9,3 millones de niños y niñas malnutridos y 2,6 millones con retraso en el crecimiento (Marinho y Castillo, 2022).

Los datos de la OPS¹⁸ para 2020 dan cuenta de algunas situaciones respecto al sobrepeso en la región: Argentina es el país de la región con mayor porcentaje de menores de 5 años con sobrepeso, alcanzando un 12,9%, seguido por Paraguay con un 12% y Trinidad y Tobago con un 11%. En contraposición, los valores más bajos observados en Latinoamérica son los de Honduras y Guatemala, con un 5,7% y 5,1% respectivamente.

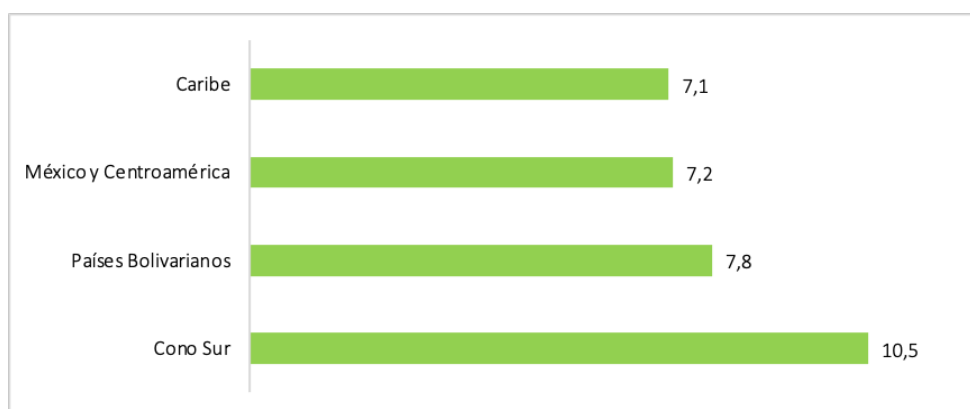
Si estos porcentajes son analizados según promedios por subregión, se evidencia que en 2020 el Cono Sur es la que mayor proporción de niños/as con sobrepeso presentó con un 10,46%, seguida por los Países Bolivarianos con un 8,1%, Centroamérica con un 7,16% y el Caribe con un 7,09%.

Figura 50: Sobrepeso en menores de 5 años. Países de América Latina y el Caribe, 2020.
En porcentaje.



Fuente: elaboración propia en base a datos de Open Data - OPS

Figura 51: Sobrepeso en menores de 5 años. Subregiones de América Latina y el Caribe, 2020.
En porcentaje.

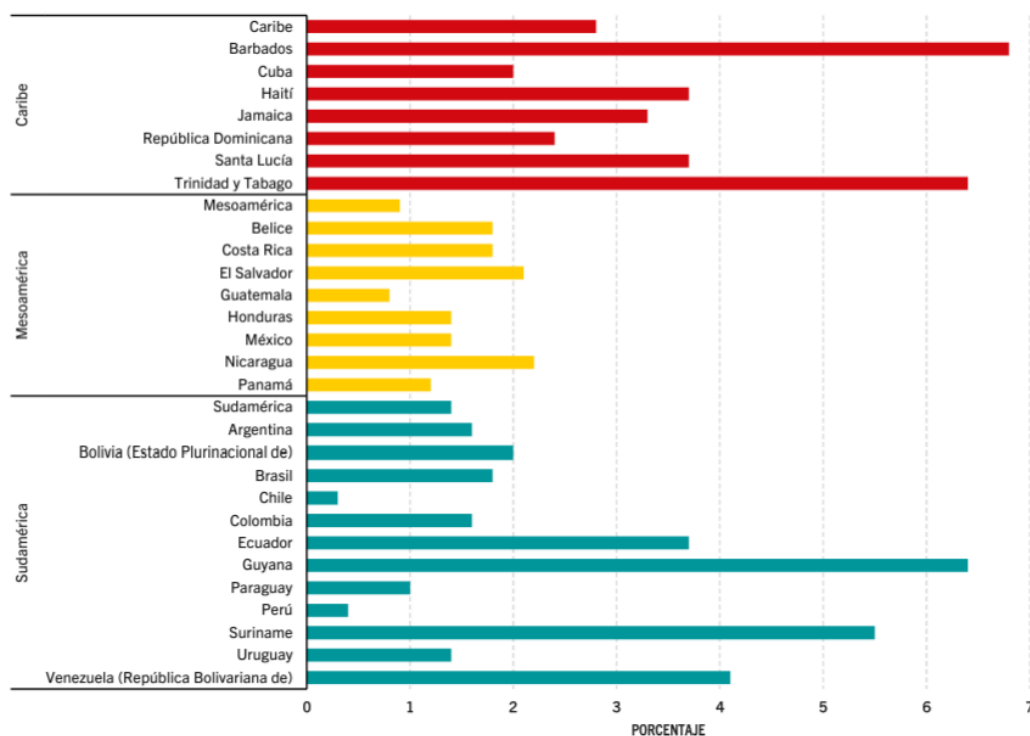


Fuente: elaboración propia en base a datos de Open Data - OPS.

Por otra parte, en América Latina y el Caribe la prevalencia de la emaciación o desnutrición aguda¹⁹ fue de 1,3% en 2020 (aproximadamente 0,7 millones de niños/as menores de 5 años). Al nivel subregional, la emaciación tuvo una prevalencia de 0,9% en Centroamérica, 1,4% en Sudamérica y 2,8% en el Caribe. Según FAO (2023), “si se mantienen estos niveles, la región está en camino de alcanzar la meta de los ODS de mantener la emaciación o desnutrición aguda por debajo del 3% de la población infantil”. Sin embargo, un grupo de países mantiene valores de desnutrición aguda superiores al 3%: Barbados (6,8%), Trinidad y Tobago (6,4%), Guyana (6,4%), Surinam (5,5%), Venezuela (4,1%) y Ecuador (3,7%).

No se debe perder de vista que, durante la pandemia y su consecuente crisis socioeconómica, en muchos hogares fue necesario saltarse comidas durante el día por falta de ingresos, fenómeno que se observa especialmente en las economías más golpeadas por la inflación (Marinho y Castillo, 2022). Esto aumentó el riesgo de emaciación o desnutrición aguda en menores de 5 años.

Figura 52: Prevalencia de la emaciación o desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco años en América Latina y el Caribe por país (último año disponible).



Fuente: FAO (2023).

19 Según FAO, es la deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema o emaciación. Resulta de una pérdida de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápidamente y es limitada en el tiempo.

Para colaborar con los hogares en la provisión de las comidas diarias siempre fue de suma importancia el rol de las escuelas, pero al cerrar por las medidas de aislamiento y prevención, el servicio alimentario asistencial provisto por los establecimientos escolares se vio paralizado, afectando de manera directa la alimentación de niños y niñas (CEPAL, 2021).

Los países de Centroamérica y el Caribe fueron los que más disminuyeron la cobertura de viandas a sus alumnos durante los períodos de aislamiento. Antigua y Barbuda, Barbados, Cuba, Guyana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago disminuyeron entre un 75% y 100% las raciones de comida que repartían a los niños y niñas en los comedores escolares. Al contrario, Bolivia y Perú adoptaron políticas alimenticias dentro de los recintos educativos.

Tabla 3: Programas de nutrición en las escuelas (alimentación escolar, raciones para llevar a casa). Países de América Latina y el Caribe. Primer trimestre 2020 y tercer trimestre 2021.

Cambios en la cobertura	Países/territorios
0-10% de caída	Guatemala
10-24% de caída	/
25-49% de caída	Ecuador y México
50-74% de caída	Jamaica
75-100% de caída	Antigua y Barbuda, Barbados, Cuba, Guyana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago.
Sin cambios	Dominica, República Dominicana, Granada, Saint Kitts y Nevis, Uruguay
Aumentó/nuevas coberturas	Bolivia y Perú

Fuente: elaboración propia en base a Marinho y Castillo (2022).

En abril de 2020, el 90% de los estudiantes del mundo se vio afectado por el cierre de escuelas y en ese momento la educación debió adaptarse a la virtualidad. Ante esta situación se midió el nivel de éxito de la implementación de la educación a distancia²⁰. En la mayoría de los países de la región esta resultó parcialmente exitosa y solo Guyana y Venezuela no lograron acoplarse a las demandas y necesidades educativas de sus alumnos, lo cual puede producir retrocesos en el nivel de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Al contrario, Cuba, República Dominicana y Uruguay lograron sobresalir en su impartición de clases a distancia destacándose del resto de los países de la región.

20 Seguimiento de UNICEF (2021) de la situación de niños y niñas a septiembre-octubre de 2021.

Tabla 4: Nivel de éxito del acceso al aprendizaje a distancia. Países de América Latina y el Caribe. Septiembre-Octubre 2021.

País/Territorio	Nivel de éxito
Antigua y Barbuda	Parcialmente exitoso
Barbados	Parcialmente exitoso
Bolivia	Parcialmente exitoso
Brasil	Parcialmente exitoso
Chile	Parcialmente exitoso
Cuba	Generalmente más exitoso
Dominica	Parcialmente exitoso
República Dominicana	Generalmente más exitoso
Ecuador	Parcialmente exitoso
Granada	Parcialmente exitoso
Guatemala	Parcialmente exitoso
Guyana	Muy problemático
Jamaica	Parcialmente exitoso
México	Parcialmente exitoso
Perú	Parcialmente exitoso
Santa Lucía	Parcialmente exitoso
San Vicente y las Granadinas	Parcialmente exitoso
Surinam	Parcialmente exitoso
Trinidad y Tobago	Parcialmente exitoso
Uruguay	Generalmente más exitoso
Venezuela	Muy problemático

Fuente: elaboración propia en base Marinho y Castillo (2022).

En el contexto de pandemia y aislamiento social se hicieron evidentes algunas brechas en el acceso a bienes y servicios y/o ejercicio de derechos. Una de las más evidentes fue la brecha digital. Frente a la imposibilidad de asistir a establecimientos educativos, la educación tuvo que adaptarse a nuevas modalidades de enseñanza.

Como es sabido, estas modalidades de enseñanza casi siempre fueron a distancia, por lo cual resultó necesario contar con acceso a algún tipo de dispositivo electrónico y, más importante

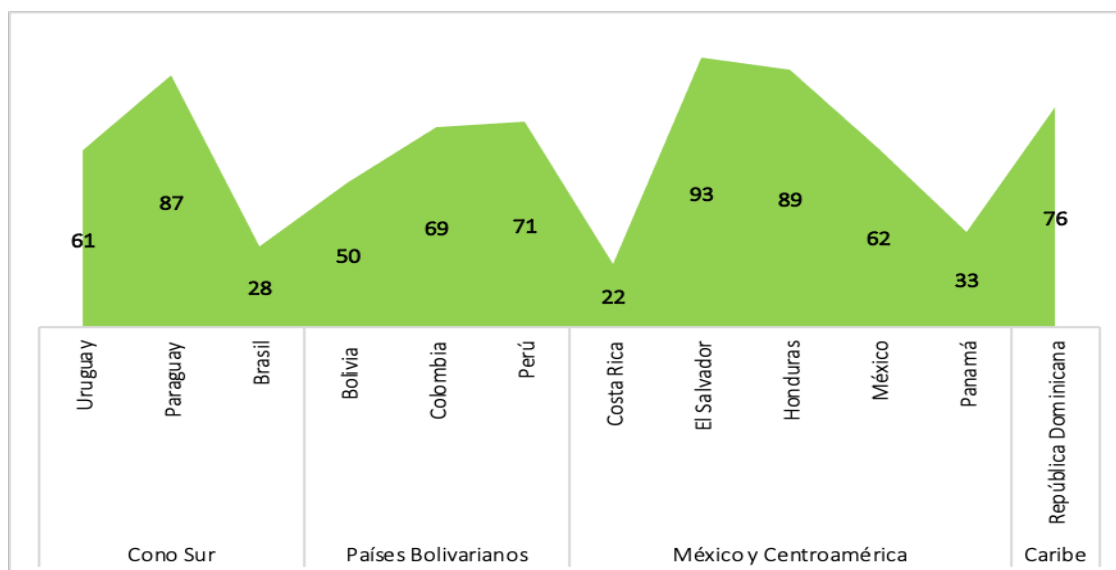
aún, a internet. Esta brecha digital expuso las desigualdades que atraviesan a América Latina y el Caribe. Según la información disponible para 12 países (CEPAL, 2022c), un gran porcentaje de los niños, niñas y adolescente pobres de América Latina y el Caribe aún no tenían acceso a internet y computadora en 2021.

Esta situación reviste particular gravedad en algunos países, particularmente de Centroamérica y el Caribe. En El Salvador, el 93% de los niños pobres no tuvieron acceso a internet en 2021. En Honduras este porcentaje fue del 89% y en República Dominicana del 76%.

En los Países Bolivarianos, la falta de acceso a internet alcanzó aproximadamente al 70% de los niños pobres en Perú y Colombia, y al 50% en Bolivia. En el Cono Sur este déficit alcanzó al 87% de los niños pobres en Paraguay y al 61% en Uruguay.

En cuanto a la tenencia de computadora, los datos de 2021 indican que la brecha digital se intensifica en los países analizados. En Paraguay, Bolivia, El Salvador, Honduras y República Dominicana el porcentaje de niños pobres sin acceso a una computadora supera el 90%. En Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, México y Panamá esta situación afectó a más del 80% de los niños pobres.

Figura 53: Población pobre menor de 18 años que no tiene conexión a internet en el hogar. Países de América Latina y el Caribe, año 2021*.
En porcentajes de personas menores de 18 años que son pobres.

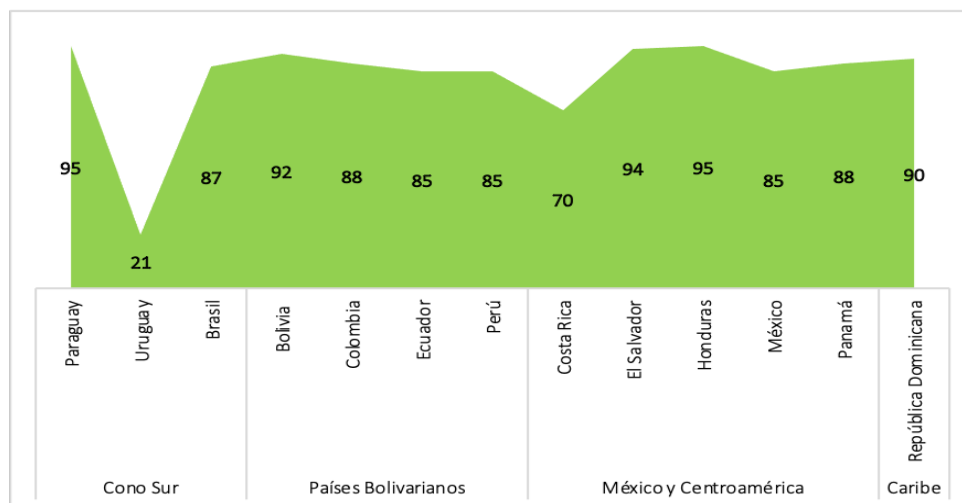


Fuente: CEPAL (2022c).

* Por falta de actualización de datos, la información para Brasil, Honduras, El Salvador y México corresponde a 2020.

Nota: el dato refiere a que ninguno de los integrantes del hogar cuenta con conexión a internet a través de computadoras personales o teléfonos móviles.

**Figura 54: Población pobre menor de 18 años que no tiene acceso a una computadora en el hogar.
Países de América Latina y el Caribe, año 2021*.
En porcentajes de personas menores de 18 años que son pobres.**



Fuente: CEPAL (2022c).

* Por falta de actualización de datos, la información para Brasil, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Ecuador y México corresponde a 2020.

El trabajo infantil priva a los niños y niñas de gozar y vivir su niñez y dignidad, siendo perjudicial para su adecuado desarrollo físico y psicológico. UNICEF y OIT (2021) han advertido que, si no se toman medidas conducentes a mitigar el trabajo infantil, debido a la pandemia de COVID-19, el 2022 podría terminar con un saldo de 168,9 millones de niños y niñas (de 5 a 17 años) en dicha situación a nivel mundial -8,9 millones más que la cifra arrojada en 2020-.

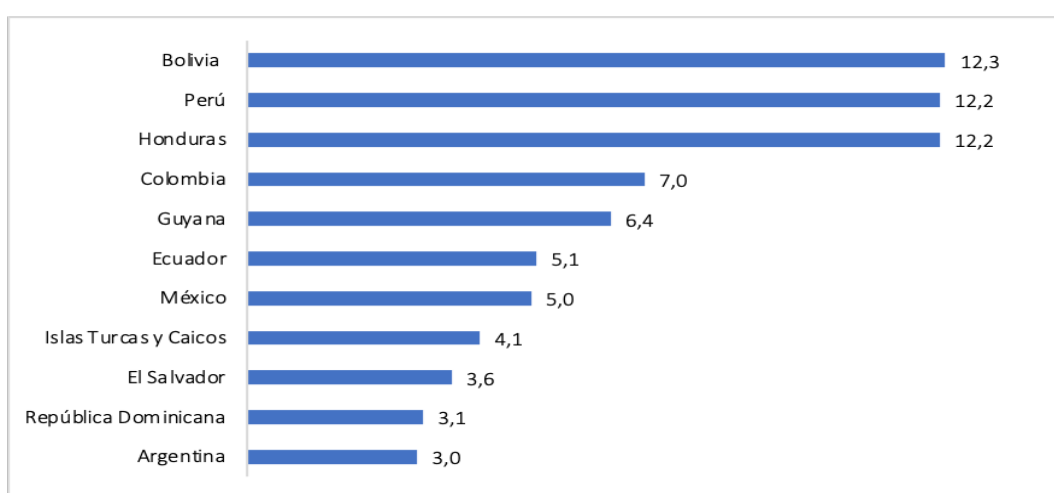
Las consecuencias del COVID-19 podrían someter a casi 9 millones de menores a la explotación infantil. Esto es alarmante si se tiene en cuenta que la cifra se mantiene estancada desde 2016, por lo que mayores esfuerzos son necesarios para garantizar el pleno goce de los derechos de cada infante. No se debe perder de vista a la hora de plantear una política pública el rol que ocupa el trabajo infantil en las cadenas de suministros no solo a nivel nacional sino mundial, y de lo vulnerables que se encuentran las infancias en contextos de crisis, conflictos internacionales y desastres naturales.

Para eliminar el trabajo infantil en 2025 en América Latina y el Caribe, se necesitaría de una reducción anual del 35,8% mientras que, para eliminarlo en 2030, el porcentaje anual de reducción de trabajadores infantiles debería ser del 17,2% (UNICEF y OIT, 2021). Estas cifras son por demás ambiciosas si se tiene en cuenta que la reducción anual observada entre 2008-2016 fue apenas del 4%.

En el período 2019-2020, Bolivia, Perú y Honduras fueron los países con mayor porcentaje de trabajo infantil rondando el 12%. Le siguen Colombia (7%), Guyana (6,4%), Ecuador

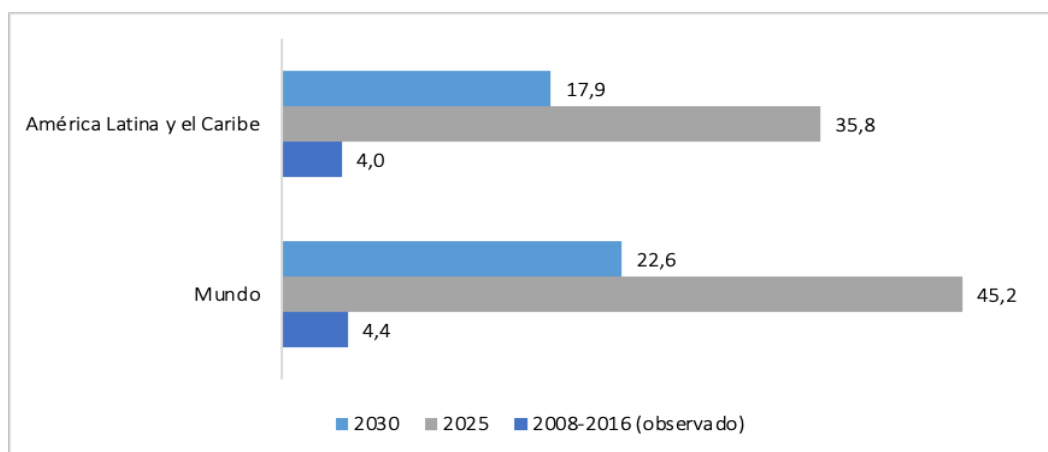
(5,1%) y México (5%). Continuando con los valores, se ubican El Salvador con un 3,6% y República Dominicana con un 3,1%. Por último, Argentina presenta 3% de trabajo infantil remunerado. Es importante destacar que en nuestra región el 67% de la mano de obra infantil está conformada por niños y el 33% por niñas. El 48,7% de todos ellos trabajan en empleos relacionados a la agricultura, siendo la principal actividad productiva donde se desenvuelven las labores de estos menores (UNICEF y OIT, 2021).

Figura 55: Figura XX. Niños/as de entre 5 y 17 años que realizan trabajo infantil. Países de América Latina y el Caribe. Promedios ponderados 2019-2020 no comparables. En porcentajes de niños/as de entre 5 y 17 años.



Fuente: elaboración propia en base a datos de UNICEF (2021), MICS 2019-20 UNICEF-OIT y ODSA-UCA (2021).

Figura 56: Reducción anual necesaria de trabajo infantil para su erradicación (2025 y 2030) y reducción observada (2018-2016). América Latina y el Mundo. En porcentajes.



Fuente: elaboración propia en base a datos de UNICEF y OIT (2020).

2.9. Migrantes

Según estimaciones del BID y la OCDE (2021), la cantidad de migrantes internacionales residentes en América Latina y el Caribe tuvo un incremento del 50%, pasando de 8,4 millones a 12,8 millones entre 2015 y 2019. Esta dinámica estuvo acompañada de un cambio en la naturaleza de las migraciones de la región, ya que tradicionalmente los flujos consistían en emigración hacia países desarrollados y/o fuera de América Latina y el Caribe.

En la actualidad, los datos muestran una tendencia de movimientos migratorios intrarregionales. Este cambio tiene una relación directa con el deterioro de la situación socioeconómica de Venezuela, ya que millones de venezolanos y venezolanas se han desplazado en búsqueda de mejores oportunidades de vida -y aproximadamente 80% de estos migrantes se han asentado en países de América Latina y el Caribe-.

A su vez, a estas nuevas dinámicas de movimientos migratorios se suman situaciones preexistentes, como por ejemplo la continua emigración de personas provenientes de Haití luego del terremoto de 2010. En términos de permisos otorgados, Colombia, Chile y Perú fueron los países que más migrantes latinoamericanos recibieron, seguidos por Argentina y Brasil, y en menor medida México y Ecuador.

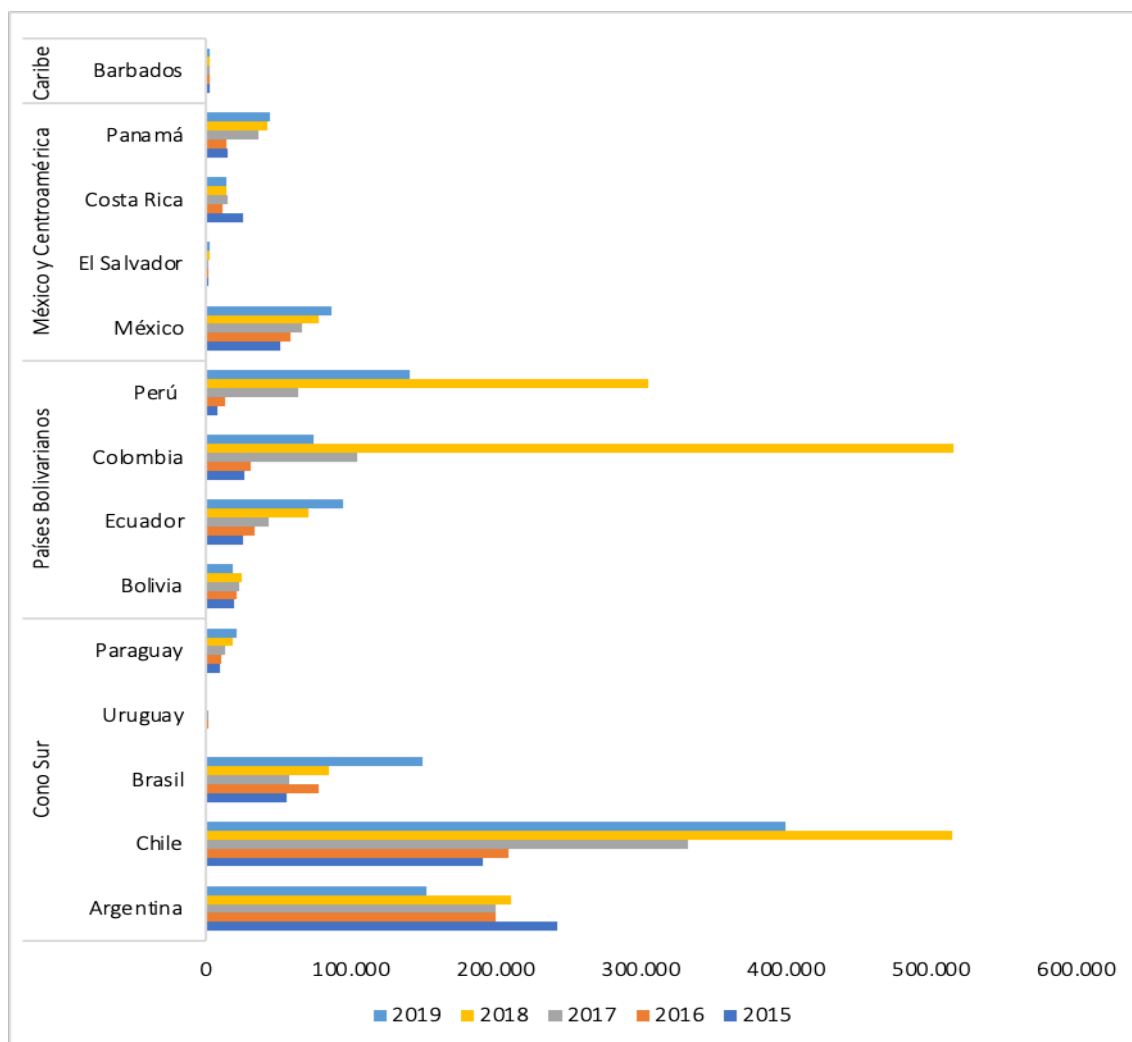
Estos cambios en la movilidad de personas a nivel regional implican un gran desafío en términos de integración a las estructuras socioeconómicas y jurídicas de los países de destino. A su vez, la pandemia de COVID-19 -con sus implicancias en múltiples dimensiones- complejizó mucho más el escenario tanto para los migrantes como para los países receptores.

Entre 2015-2019 en América Latina y el Caribe se emitieron 5.404.088 permisos para ciudadanos de la región. De este total, más del 40% se otorgaron a venezolanos/as, 10% a colombianos/as, 8% a bolivianos/as, 8% a peruanos/as y 7% a haitianos/as.

A partir de la información del BID y la OCDE (2021), se puede apreciar la magnitud del éxodo venezolano de los últimos años. Este país concentra el mayor volumen de permisos otorgados entre 2015-2019 -casi la mitad del total -. En particular, los países que más acogieron a los ciudadanos/as de Venezuela fueron Colombia (30,5%), Chile (22,2%), y Perú (19,6%), seguidos en menor medida por Argentina (8,4%), Ecuador (6,5%) y Brasil (6%).

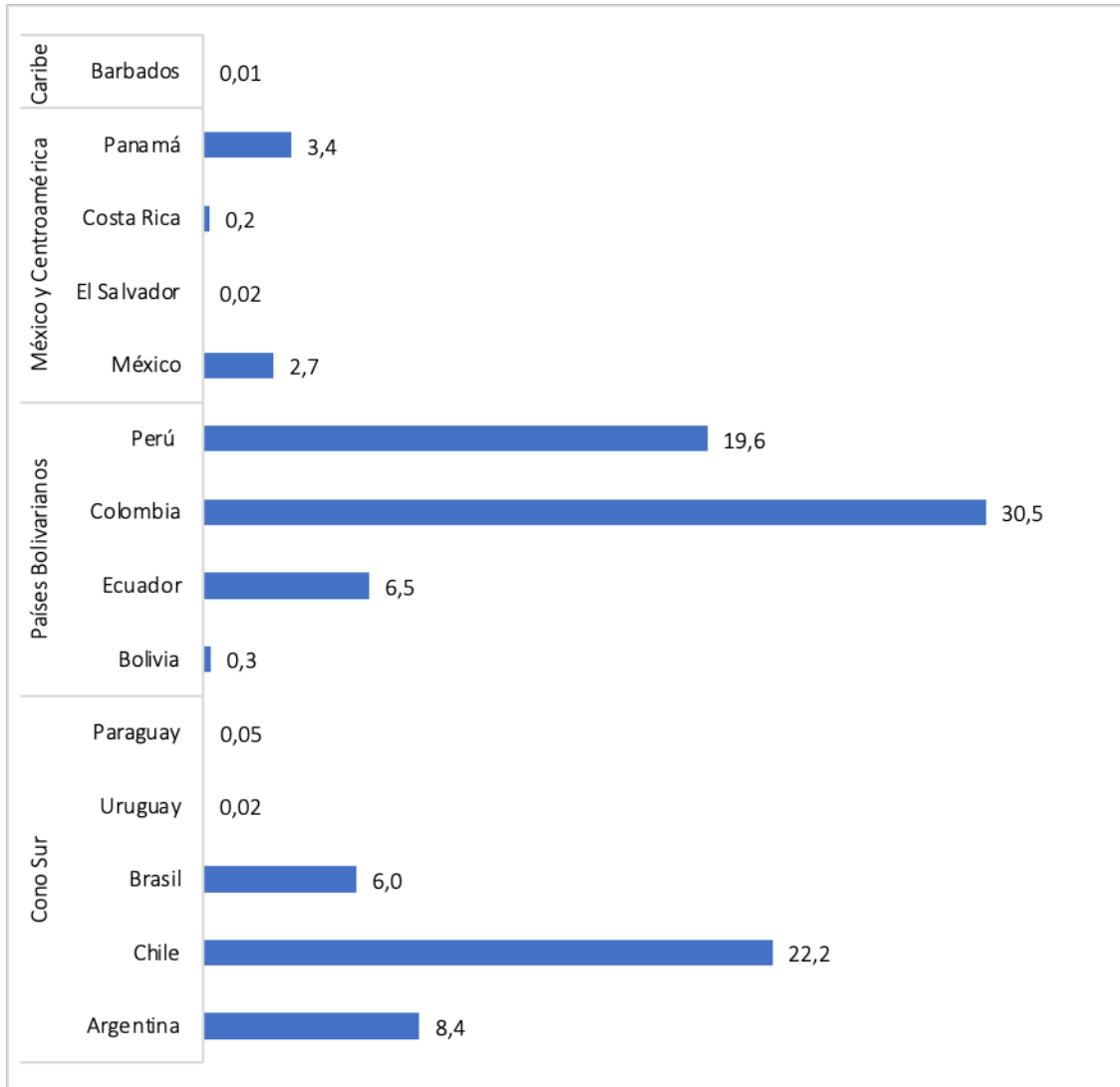
Si bien los datos tienen en cuenta, desde el punto de vista legal, la situación regular de las personas migrantes, se estima que hay un gran número de venezolanos/as en situación irregular y que el 90% de ellos se encuentran en Colombia, Ecuador y Perú.

Figura 57: Cantidad de permisos otorgados a ciudadanos de América Latina y el Caribe. 2015-2019. En cantidad de permisos otorgados por cada subregión/país.



Fuente: elaboración propia en base a BID y OCDE (2022).

**Figura 58: Cantidad de permisos otorgados a ciudadanos de Venezuela. 2015-2019.
En porcentajes sobre el total de permisos otorgados*.**



Fuente: elaboración propia en base a BID y OCDE (2022).

* el total de permisos refiere a la sumatoria de permisos otorgados por los países seleccionados en el gráfico.

Por otro lado, la plataforma R4V²¹ ofrece datos actualizados sobre el monitoreo de migrantes venezolanos/as en la región. Según este banco de datos, en marzo de 2023, la cantidad de migrantes y refugiados venezolanos/as en el mundo era de 7.24 millones, de los cuales aproximadamente 6.10 millones se encontraban en América Latina y el Caribe. Más del 85%

21 La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) está conformada por más de 200 organizaciones (incluyendo Agencias ONU, sociedad civil, organizaciones religiosas y ONGs, entre otras) que coordinan sus esfuerzos bajo el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP por sus siglas en inglés) en 17 países de América Latina y el Caribe.

de los/as venezolanos/as que realizaron movimientos migratorios intrarregionales tuvieron como principales destinos a Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil.

Figura 59: Cantidad absoluta de migrantes y refugiados provenientes de Venezuela en países de América Latina y el Caribe (actualizado a marzo 2023).

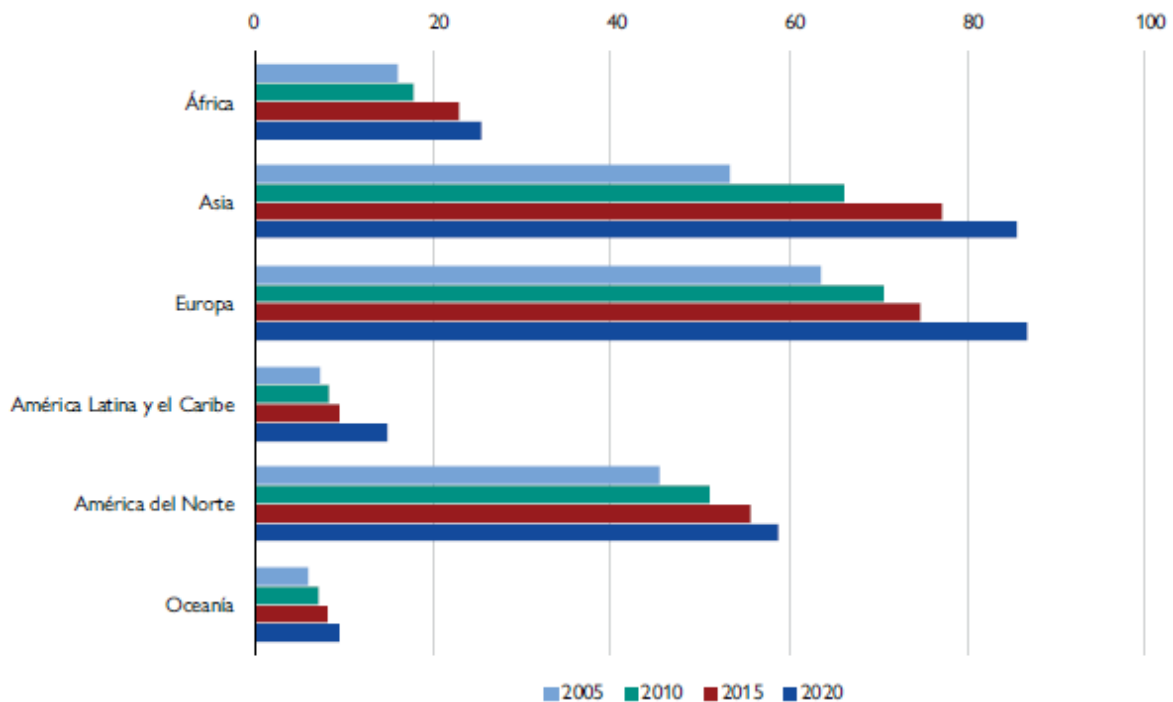


Fuente: R4V (2023).

Las estimaciones del BID y la OCDE (2021) para América Latina y el Caribe coinciden con las tendencias observadas por la OIM (2022) en su último informe anual, ya que las cifras de esta organización muestran el crecimiento en las migraciones latinoamericanas entre 2015-2020. A su vez, permiten ver que, a nivel global, América Latina y el Caribe tienen un bajo volumen de migraciones internacionales en comparación a Europa, Asia, América del Norte y África.

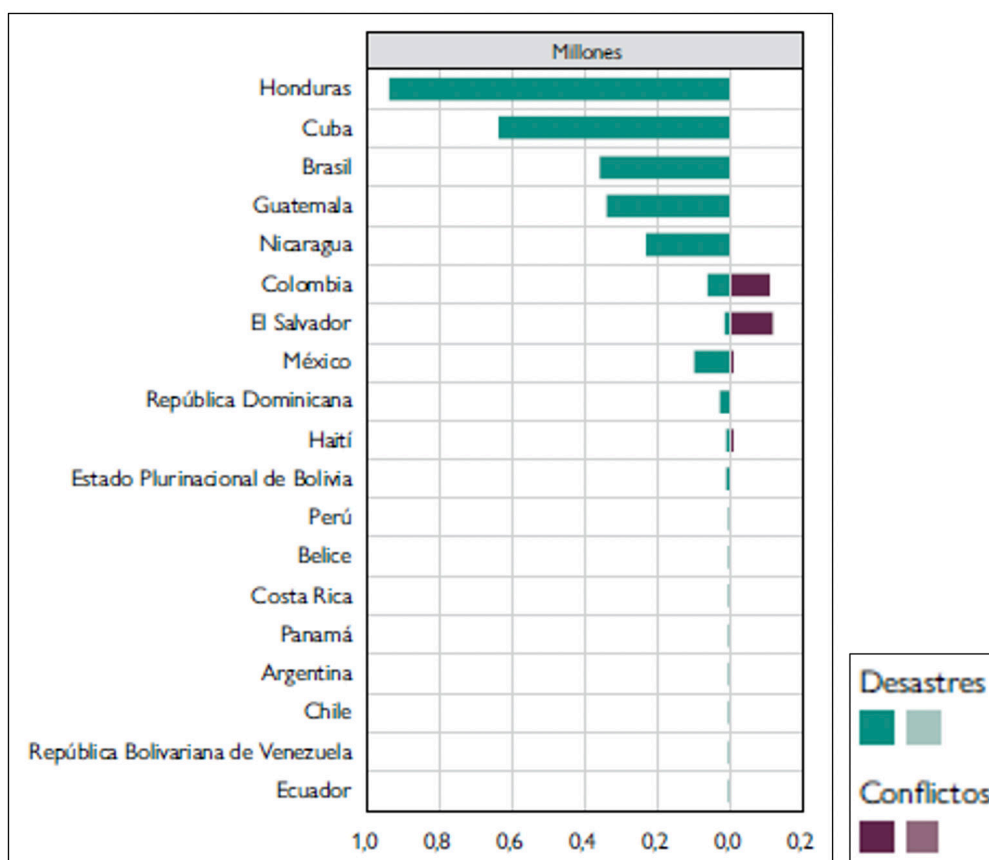
A su vez, el informe de la OIM (2022) expone algunos datos actualizados para continuar analizando las tendencias migratorias de América Latina y el Caribe. Resulta relevante la información correspondiente a desplazamientos internos a causa de desastres y/o conflictos. En este punto, se puede dimensionar el impacto de los huracanes Laura (agosto 2020), Eta y Iota (noviembre 2020) en América Central y el Caribe: durante 2020 se desplazaron 937.000 personas en Honduras, 639.000 en Cuba y 339.000 en Guatemala. Por otro lado, se registraron 114.000 desplazamientos en El Salvador y 109.000 en Colombia a causa de situaciones de violencia o conflicto.

Figura 60: Migrantes internacionales, por principal región de residencia. 2005-2020.
En millones de personas.



Fuente: BID y OCDE (2022).

Figura 61: Migrantes internacionales, por principal región de residencia. 2005-2020. En millones de personas.



Fuente: OIM (2022).

En términos de migración, no se puede perder de vista la grave situación de los últimos años en relación con las personas que migran desde y/o a través de América Central para llegar a América del Norte. La OIM (2022) pone de manifiesto a la inseguridad económica, la violencia, la delincuencia y los efectos del cambio climático como los principales factores que desencadenan estos movimientos extrarregionales. El fenómeno de las “caravanas” de migrantes ha tenido un aumento desde 2018 e incluye cada vez más familias con niños/as.

Se estima que en 2020 hubo 900.000 personas desplazadas en Honduras, Guatemala y El Salvador -tanto dentro como fuera de sus territorios-. De este total, más de medio millón de personas realizó viajes transfronterizos y un 70% se encontraba en Estados Unidos. Los primeros datos de 2021 mostraron la grave situación de estos desplazamientos en relación con las infancias, ya que de los 226.000 migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador que llegaron a la frontera con los Estados Unidos durante la primera mitad del año, se estima que unos 34.000 eran menores sin acompañamiento (OIM 2022).

Los datos de ACNUR (2023) para la primera mitad del año 2022 permiten dimensionar la escala de los desplazamientos forzados en Centroamérica. Según este organismo, en el mundo hay más de 1.3 millones de refugiados, solicitantes de asilo y desplazados provenientes de Centroamérica y México, de los cuales el 24% son desplazados internos provenientes de Honduras y El Salvador.

Debido a estos movimientos transfronterizos de personas, los gobiernos de México y Estados Unidos han incrementado en los últimos dos años las medidas restrictivas para el tránsito de migrantes -en muchos casos con excesos en acciones coercitivas a través de sus fuerzas militares y de seguridad-.

2.10. Personas Mayores

Según el BID (2022), América Latina y el Caribe ha logrado aumentar la esperanza de vida a 75 años en 2021. Si bien los peores momentos de la pandemia por COVID-19 se caracterizaron por afectar -en términos de mayor mortalidad- a las personas mayores, se estima que esto no afectará a mediano y largo plazo las tendencias demográficas de la región.

Más aún, el estudio del BID indica que América Latina y el Caribe es la región del mundo que envejece más rápido: para 2085 se espera que sea la primera región del mundo donde 1 de cada 3 personas tendrán más de 65 años. Teniendo en cuenta las proyecciones de la ONU (2019), América Latina y el Caribe tardará menos de 30 años en aumentar el porcentaje de personas mayores del 10% al 20% de la población (en Europa esta transición tardó 56 años). En esta línea, se presenta un reto para los países latinoamericanos y caribeños ya que deberán repensar estrategias socioeconómicas para dar respuesta a este proceso de envejecimiento.

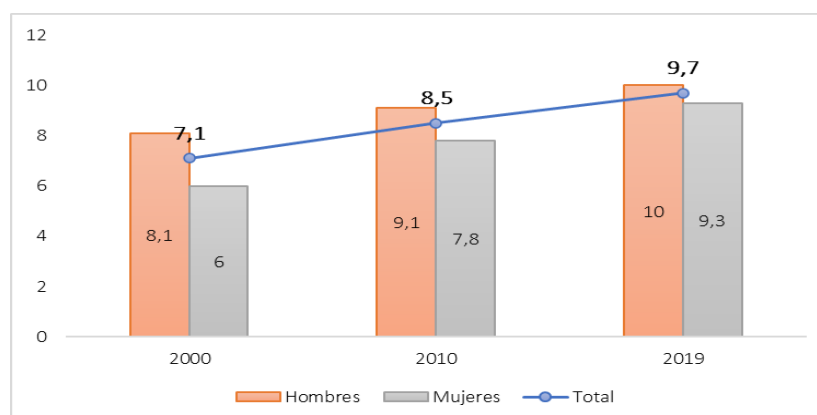
La combinación de múltiples factores, tanto biológicos como socioculturales, ponen a las personas mayores en una situación de vulnerabilidad que requiere de asistencia y protección especial en términos económicos, de salud y/o de bienestar. En este marco, el BID (2022) publicó los resultados del *Índice de Calidad de Vida de las Personas Mayores*²², que permiten tomar nota de la situación en la que se encuentran las personas mayores de la región. A nivel agregado, se destaca una mejora: en el 2000, una persona de 65 años o más podría esperar vivir 7,1 años con buena salud y sin pobreza, aumentado esto a 9,7 años en 2019.

22 Refleja el número de años que una persona de 65 años puede esperar vivir con buena salud y sin pobreza.

A pesar de esta mejora, los valores regionales esconden grandes diferencias hacia el interior de las subregiones y países de América Latina y el Caribe, principalmente por las distintas tendencias observadas en la reducción de la pobreza o la ampliación de los sistemas de protección social. Así, en países como Brasil, Chile, Panamá o Uruguay, una persona de 65 años o más puede esperar vivir más de 12 años con buena salud y sin pobreza, mientras que en Venezuela, Guatemala, Nicaragua y Honduras esto desciende a menos de 4 años.

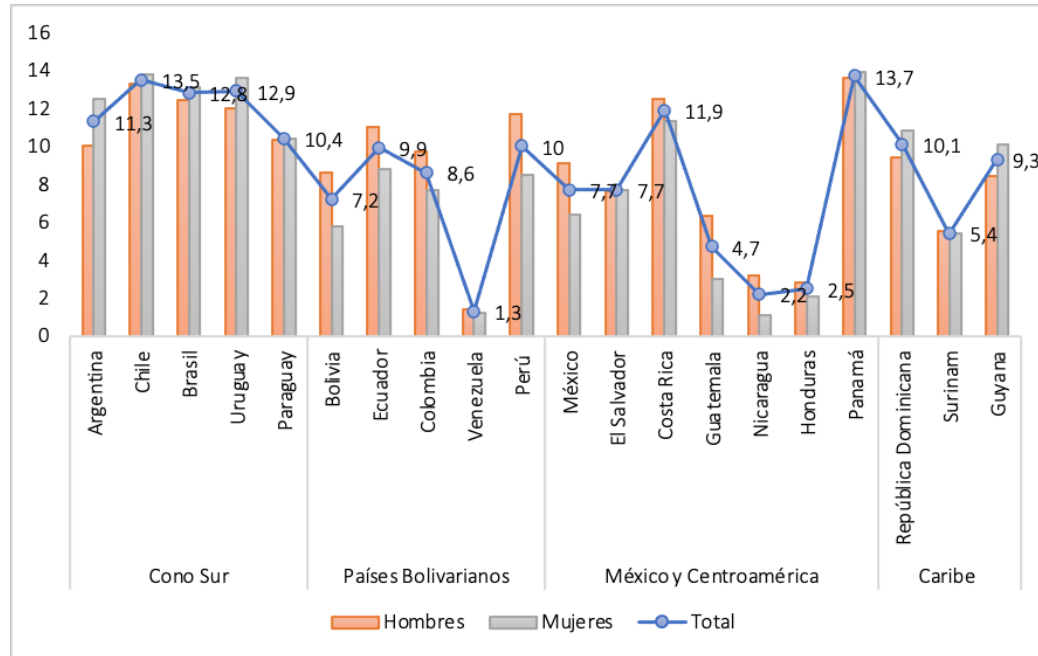
Las desigualdades de género tampoco son ajenas a las personas mayores y esto también se ve reflejado en el índice calculado por el BID: los resultados de 2019 muestran que los varones de más de 65 años pueden esperar vivir 10 años más con buena salud y sin pobreza, mientras que el promedio de años para las mujeres es de 9,3. Al nivel de los países también se presentan brechas de género. En países como Guatemala, Perú y Bolivia los hombres mayores pueden esperar vivir -sin pobreza y con buena salud- 3 años más que sus pares mujeres.

Figura 62: Figura XX. Índice de Calidad de vida de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe. 2000-2019.
En promedio de años.



Fuente: elaboración propia en base a BID (2022).

Figura 63: Índice de Calidad de vida de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe. 2019.
En años por país/subregión.



Fuente: elaboración propia en base a datos del BID (2022).

3. Situación ambiental

3.1. Cambio climático y desastres naturales

El cambio climático es uno de los problemas más dramáticos que actualmente enfrenta la humanidad, cuyos efectos negativos son muy difíciles de revertir sin compromisos consensuados a nivel internacional con el liderazgo de los Estados. Por las características sociales y geográficas de América Latina y el Caribe, la región se encuentra en una posición de vulnerabilidad frente a las consecuencias de los fenómenos extremos derivados del cambio climático, como las sequías o inundaciones.

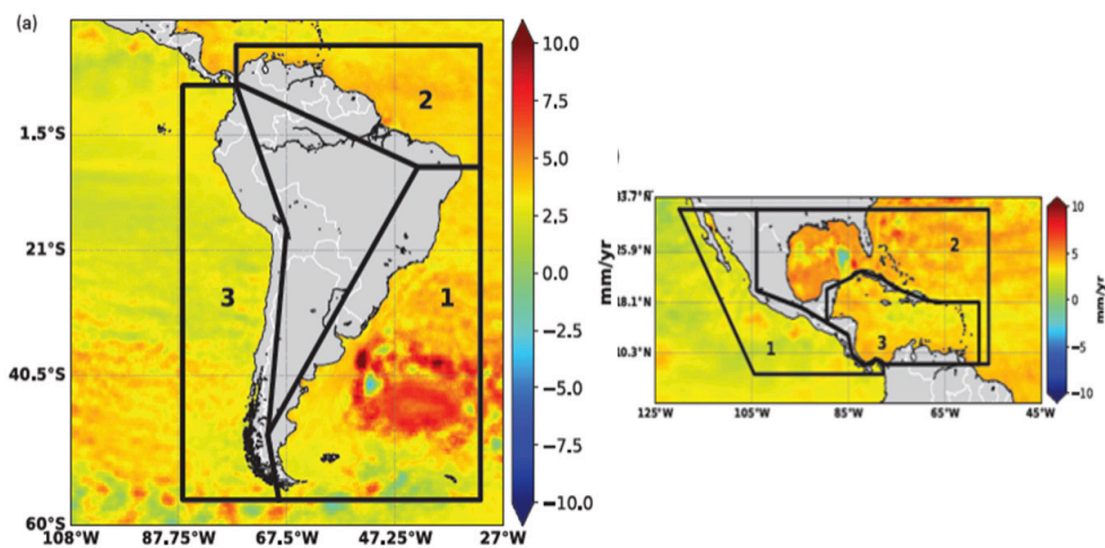
Este no es un fenómeno ambiental ajeno y distante, por el contrario, tiene incidencia directa con problemas sociales persistentes a nivel regional, tal como lo menciona el último informe de la Organización Meteorológica Mundial (2022): “(...) el impacto creciente del cambio climático y la variabilidad climática, agravado por los efectos de la pandemia de COVID-19, no solo han mermado la productividad de los sistemas ecológicos de la región, sino que también han detenido décadas de progreso contra la pobreza, la desigualdad y la inseguridad alimentaria en la región”.

Si bien el año 2021 fue uno de los más fríos de la última década -por la influencia de situaciones climáticas particulares-, la tendencia regional de aumento de temperaturas continuó: el año 2021 se situó entre el sexto y el décimo más cálidos en México y América Central, entre el séptimo y el decimoséptimo más cálidos en el Caribe, y entre el sexto y el decimosexto más cálidos en América del Sur. La tasa media regional de aumento de la temperatura se duplicó, ya que entre 1961-1990 el aumento era de 0,1° C por década, lo cual se incrementó a 0,2° C por década entre 1991-2021.

Respecto a la preservación de los glaciares -que se ven directamente afectados por el aumento de las temperaturas- los datos recientes indicarían que las masas de hielo en la zona tropical de los Andes se han reducido entre el 25% y 50% desde la década de 1950 hasta la actualidad. Mientras que los glaciares de los Andes tropicales han perdido alrededor de -0,95 m de equivalente en agua al año durante 1990-2020, los glaciares de los Andes secos y los Andes meridionales lo hicieron a razón de -0,72 m y -0,56 m respectivamente. Según la OMM (2022) estos datos representan las tasas de pérdida de masas de hielo más altas a nivel mundial, con una consecuente escasez de agua dulce para las poblaciones y ecosistemas andinos.

Otro de los efectos asociados al cambio climático tiene que ver con el calentamiento de los océanos y el aumento del nivel del mar, con efectos devastadores para la biodiversidad marina y poblaciones costeras, ya que contamina los acuíferos de agua dulce, erosiona las costas, inunda las zonas de baja altitud y aumenta el riesgo de mareas de tempestad. Se destaca que en las últimas tres décadas (1993-2022) el nivel del mar relativo aumentó a un ritmo de $3,33 \pm 0,4$ mm al año, según la media mundial. En el Atlántico sur y el Atlántico norte tropical esto sucedió a un ritmo de $3,53 \pm 0,0$ mm y $3,28 \pm 0,1$ mm al año respectivamente. En las zonas cercanas al Golfo de México esto sucedió a razón de $3,48 \pm 0,1$ mm al año, mientras que alrededor de Centroamérica y el sur del Caribe, fue de $3,23 \pm 0,1$ mm al año. En que respecta a la vertiente del Pacífico, la tasa de cambio fue de $2,23 \pm 0,2$ mm al año.

Figura 64: Tendencias del nivel del mar en América Latina y el Caribe. Enero 1993- Agosto 2021. Servicio de Copernicus relativo al cambio climático (C3S).



Fuente: Estado del Clima en América Latina y el Caribe 2021 (OMM, 2022).

Designaciones de área: a1 - Atlántico meridional, a2 - Atlántico norte tropical, a3 - costa pacífica de América del Sur; b1 - costa pacífica de América Central, b2 - Atlántico norte subtropical y golfo de México, b3 - Atlántico norte tropical.

Entre los fenómenos climáticos extremos se pueden mencionar la “megasequía” en la zona central de Chile -que prosiguió en 2021, llegando a 13 años consecutivos, siendo la más prolongada de la región-. Además, en la cuenca del Paraná-Plata, los daños a la agricultura causados por la peor sequía desde 1994 redujeron gravemente las cosechas de soja y maíz. En América del Sur, las sequías provocaron un descenso del 2,6 % en la cosecha de cereales de 2020-2021 con respecto a la temporada anterior.

Por otro lado, la temporada de huracanes de 2021 fue la tercera más activa de la que se tenga registro (con 21 tormentas de gran intensidad, incluidos 7 huracanes). Asimismo, las anomalías en las precipitaciones de 2021 afectaron de forma heterogénea a América Latina y el Caribe: en la zona central de México hubo precipitaciones superiores a lo normal²³ en un 60%, mientras que en Guatemala, El Salvador, Belice y Nicaragua y la región del Caribe las anomalías de precipitación se situaron entre 20%-50% por debajo de lo normal. En América del Sur se registraron precipitaciones por debajo de lo normal (20%-60%) en la Zona Andina -incluyendo a Chile- y también en la cuenca del Paraná-Plata y Venezuela. En cambio, la parte occidental de Colombia, la Amazonia central, la Guayana Francesa, Surinam y Guyana registraron precipitaciones superiores a lo normal durante el año.

En cuanto a la situación de la deforestación de la selva amazónica en Brasil, los datos del INPE²⁴ para el período 2021-2022 muestran un descenso del 11% en la tala ilegal -el primer período con datos alentadores luego una década de incremento sostenido de la deforestación-. Sin embargo, en términos absolutos, esto significa que el mayor bosque tropical del mundo perdió 11.568 kilómetros cuadrados de árboles por la tala ilegal entre agosto de 2021 y julio de 2022. Tampoco se debe perder de vista que, más allá de este reciente descenso de la tala ilegal, el año 2021 fue el peor en 15 años ya que desaparecieron más de 13.000 kilómetros cuadrados de superficie arbórea.

Si bien la Amazonía ocupa gran parte del Brasil, los territorios de los Países Bolivarianos también conforman el bosque tropical más grande del mundo. Según los datos de WWF (2022), durante el 2021 se alcanzó el quinto registro histórico más alto de pérdida total de bosques primarios -por deforestación e incendios-, con una estimación de 2 millones de hectáreas afectadas. Bolivia, Perú y Colombia lideraron -luego de Brasil- la pérdida de bosques primarios durante 2021.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, 2022) en América Latina y el Caribe se produjeron 175 desastres durante el período 2020-2022²⁵. De ellos, el 88% se debieron a causas meteorológicas, climatológicas o hidrológicas. A su vez, estos desastres fueron la causa del 40% de las muertes registradas debidas a desastres y del 71 % de las pérdidas económicas.

23 El estudio utiliza la normal climatológica estándar de 1981-2010 para calcular las anomalías de la precipitación en 2021, expresadas como porcentaje por encima o debajo de lo normal (OMM, 2022).

24 INPE. Consultado en diciembre 2022: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>

25 Hasta septiembre 2022.

América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables²⁶ y con mayor exposición²⁷ frente a las amenazas de desastres. La pobreza, inseguridad alimentaria, desigualdades de género, falta de vivienda y/o condiciones dignas de hábitat, entre otras problemáticas, configuran un mayor riesgo frente a los desastres. Por esta razón, la región debe enfocarse no solo en estrategias de reducción de riesgos, sino en la disminución de los grados de vulnerabilidad y exposición a través del desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente.

La temporada de huracanes de 2022 fue una de las más intensas según los registros de las tormentas en la región. En particular, los huracanes Fiona, Ian y Julia causaron devastadores efectos en el Caribe y América Central entre septiembre y octubre, principalmente en República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Colombia y Venezuela.

El gobierno de República Dominicana estimó que 2.497 viviendas habían sido afectadas, y 12.485 habían sido desplazadas a áreas seguras, tras el paso del huracán Fiona. En cuanto al suministro de servicios, 709.272 personas quedaron sin electricidad y 1.151.384 de personas vieron afectado su acceso al agua potable. En Puerto Rico se reportaron inundaciones, deslizamientos de tierra y cortes de energía generalizados tras el paso de este huracán²⁸.

Por otro lado, el Huracán Ian afectó con particular intensidad a Cuba, generando graves daños materiales y un corte total en el suministro de energía eléctrica de la isla²⁹. Por su parte, el huracán Julia afectó a casi 5.000 familias en el Norte de Colombia y provocó graves deslizamientos de tierra en Venezuela, donde fallecieron al menos 50 personas. Esta tormenta también provocó al menos 28 muertes en Centroamérica, donde desencadenó importantes inundaciones tras su paso por tierra³⁰.

3.2. Protección legal del ambiente

Según la información del Observatorio-I0 de CEPAL³¹, actualmente solo 10 países de América Latina y el Caribe cuentan con legislación interna para la mitigación del cambio climático.

26 Son las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la vulnerabilidad de un individuo, una comunidad, los activos o los sistemas a los impactos de las amenazas (UNDRR, 2022).

27 Es la situación en que se encuentran las personas, infraestructuras, viviendas, capacidades de producción y otros activos humanos tangibles situados en zonas propensas a las amenazas (UNDRR, 2022).

28 CNN en español, 20 de septiembre de 2022. Ver.

29 BBC News Mundo, 28 de septiembre de 2022. Ver.

30 DW en español, 12 de octubre de 2022. Ver.

31 Ver: <https://observatoriop10.cepal.org/es>

Respecto a los países que no cuentan con este tipo de legislación se toma nota de Uruguay en el Cono Sur; Bolivia y Perú en los Países Bolivarianos; y Panamá, Costa Rica, El Salvador, Belice y Nicaragua en Centroamérica.

En el caso del Caribe se registra una falta generalizada de legislación para la mitigación del cambio climático, ya que los siguientes países no cuentan con este tipo de herramientas legales: Venezuela, Surinam, Guyana, Trinidad y Tobago, Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Barbados, Antigua y Barbuda y Saint Kitts & Nevis.

En abril de 2021 se consagró un hito en la protección de los derechos ambientales, al entrar en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Este tratado internacional de carácter vinculante es pionero en materia de protección ambiental y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

El Acuerdo de Escazú reviste gran relevancia porque se trata de la primera iniciativa regional y multilateral que cristalizó en un instrumento jurídico de vanguardia para la protección de los derechos humanos. Según CEPAL (2022d) sus objetivos son "(...) garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto".

Actualmente el tratado cuenta con 13 Estados parte, donde el instrumento ya tiene plena vigencia. A su vez, hay 12 Estados que lo firmaron, pero aún no lo ratificaron y 9 Estados que aún no firmaron el acuerdo, en detalle: Bahamas, Barbados, Bermudas, Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Según Global Witness (2022), en 2021 fueron asesinadas 200 personas protectoras de la tierra y del medio ambiente. El 68% de estos asesinatos fueron cometidos en países de América Latina y el Caribe. A su vez, la mayoría de estos ataques -casi el 40%- fueron contra pueblos originarios y se concentraron principalmente en México y la Amazonía (Brasil, Perú y Venezuela). México, Brasil, Colombia, Nicaragua y Honduras encabezan la lista regional de asesinatos con 54, 33, 26, 15 y 8 víctimas respectivamente.

La visibilización del Acuerdo de Escazú es clave en términos de institucionalizar un marco común de protección de los derechos ambientales, principalmente en una región donde las personas activistas por la protección del ambiente son vulnerables a la criminalización y difamación.

Figura 65: Países de América Latina y el Caribe con legislación para la mitigación del cambio climático (en verde). Actualizado a noviembre de 2022.



Fuente: Observatorio I0, CEPAL (2022).

Tabla 5: Fechas y estados de firmas y ratificaciones del Acuerdo de Escazú a diciembre 2022.

	FIRMA	ESTADO PARTE (RATIFICACIÓN)
Antigua Y Barbuda	27/9/2018	4/3/2020
Argentina	27/9/2018	22/1/2021
Belice	24/9/2020	Pendiente
Bolivia	2/11/2018	26/9/2019

Brasil	27/9/2018	Pendiente
Chile	/	13/6/2022
Colombia	11/12/2019	Pendiente
Costa Rica	27/9/2018	Pendiente
Dominica	26/9/2020	Pendiente
Ecuador	27/9/2018	21/5/2020
Granada	26/9/2019	Pendiente
Guatemala	27/9/2018	Pendiente
Guyana	27/9/2018	18/4/2019
Haití	27/9/2018	Pendiente
Jamaica	26/9/2019	Pendiente
México	27/9/2018	22/1/2021
Nicaragua	27/9/2019	9/3/2020
Panamá	27/9/2018	10/3/2020
Paraguay	28/9/2018	Pendiente
Perú	27/9/2018	Pendiente
República Dominicana	27/9/2018	Pendiente
Saint Kitts & Nevis	26/9/2019	26/9/2019
San Vicente Y Las Granadinas	12/7/2019	26/9/2019
Santa Lucía	27/9/2018	1/12/2020
Uruguay	27/9/2018	26/9/2019

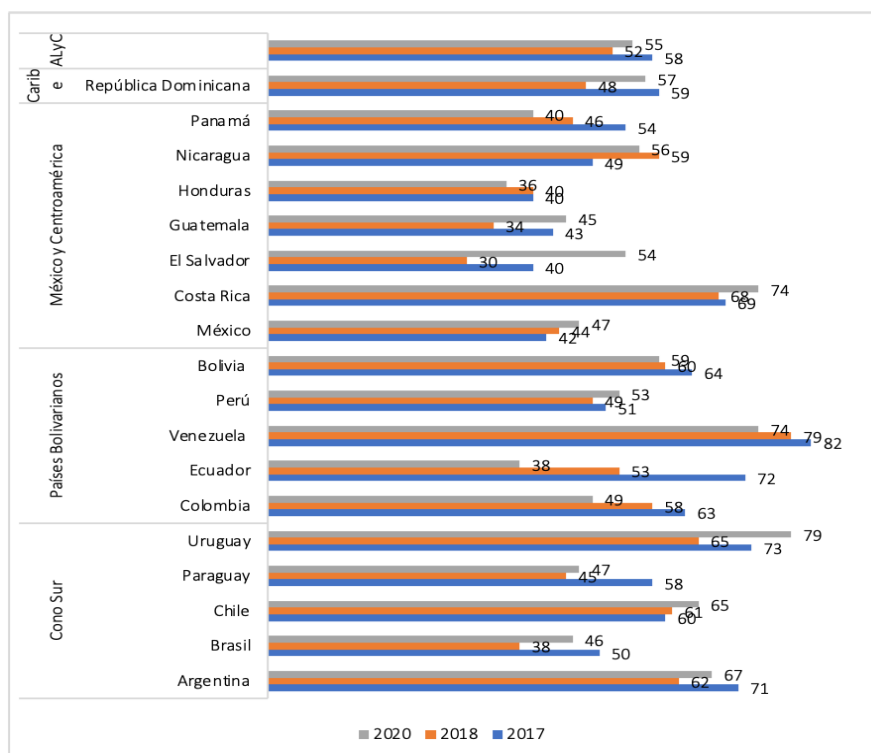
Fuente: elaboración propia en base a información de Observatorio 10, CEPAL (2022).

4. Situación sociopolítica

En la actualidad, 6 de cada 10 latinoamericanos y caribeños consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno (Latinobarómetro, 2021). Sin embargo, este apoyo se ha mantenido estable durante los últimos 10 años, sin volver a los niveles de la década 2000-2010, que eran mayores (LAPOP, 2021).

En este sentido, para 2021 se registró que el 57% de los latinoamericanos estaban disconformes con el funcionamiento de la democracia. Asimismo, la pandemia influyó en las tendencias de disconformidad con la democracia (más allá de que la mayoría de las personas la consideren la mejor forma de gobierno), principalmente por la constante evaluación sobre el desempeño de los gobiernos frente a la emergencia sanitaria y su consecuente descontento social.

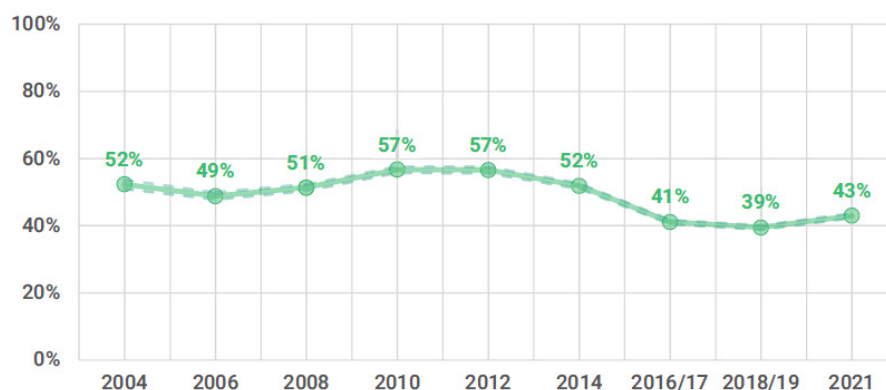
Figura 66: Percepción de la democracia como mejor forma de gobierno. Países de América Latina y el Caribe, años 2017, 2018 y 2020.
En porcentaje de personas que creen que la democracia es la mejor forma de gobierno.



Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (2022).

Los datos descargados de CEPALSTAT son tabulaciones especiales de las encuestas de opinión realizadas por la Corporación Latinobarómetro en los respectivos países.

Figura 67: Satisfacción con la democracia. América Latina y el Caribe, 2004-2021.
En porcentaje de personas que reportaron estar satisfechas con la democracia.



Fuente: LAPOP (2022).

En cuanto a la confianza en el Estado de Derecho, en 2021 solo un tercio de las personas de la región manifestaron creer que sus derechos básicos se encuentran protegidos. Este es un dato alarmante, ya que implica desconfianza en las instituciones y escepticismo respecto al funcionamiento de los órganos del Estado.







No se debe perder de vista que los niveles de confianza sociopolítica están condicionados por la percepción social respecto a las personas gobernantes, y que la corrupción es un fenómeno bastante generalizado en América Latina y el Caribe, donde los escándalos por esta problemática han sido cada vez más frecuentes en la última década. La percepción de corrupción en la región indica que casi dos tercios de los ciudadanos latinoamericanos creen que más de la mitad o todos los políticos son corruptos (LAPOP, 2021).

Como bien se expuso en los apartados anteriores, la región no ha sido ajena a las devastadoras consecuencias socioeconómicas de la pandemia. En estos términos, en 2021 el 60% de las personas de la región declararon que su situación económica había empeorado -esto significa un aumento de 20 puntos porcentuales respecto a 2018/19-. No se debe perder de vista que este deterioro socioeconómico contribuye al descontento con la democracia, principalmente en términos de representación, polarización y conflictividad social.

A nivel sociopolítico, es llamativo la fuerte presencia del “voto castigo” en las elecciones presidenciales celebradas en el marco de la pandemia (2020, 2021 y 2022), lo cual evidencia la traducción de las consecuencias socioeconómicas de la crisis en términos electorales -aunque en 2019 ya se vislumbraba esta tendencia-. En las contiendas electorales celebradas en República Dominicana, Bolivia, Ecuador, Perú, Honduras, Chile, Costa Rica, Colombia y Brasil los oficialismos perdieron las elecciones, dando lugar a alternancias en los poderes ejecutivos. El calendario electoral de 2023 presenta 3 elecciones presidenciales (Argentina,

Paraguay y Guatemala) que serán importantes para continuar evaluando las tendencias sociopolíticas regionales.

Figura 68: Elecciones 2019-2022 y “voto castigo” en América Latina y el Caribe.

País	Fecha de la elección	Presidente anterior	Presidente Actual	Alternancia
 El Salvador	03/02/2019	Salvador Sánchez Cerén	Nayib Bukele	Alternancia
 Panamá	05/05/2019	Juan Carlos Varela	Laurentino Cortizo	Alternancia
 Guatemala	16/06/2019 11/08/2019	Jimmy Morales	Alejandro Giammattei	Alternancia
 Argentina	27/10/2019	Mauricio Macri	Alberto Fernández	Alternancia
 Uruguay	27/10/2019 24/11/2019	Tabaré Vázquez	Luis Lacalle Pou	Alternancia
 República Dominicana	05/07/2020	Danilo Medina	Luis Abinader	Alternancia
 Bolivia	18/10/2020	Jeanine Áñez	Luis Arce	Alternancia
 Ecuador	07/02/2021 11/04/2021	Lenin Moreno	Guillermo Lasso	Alternancia
 Perú	11/04/2021 06/06/2021	Francisco Sagasti	Pedro Castillo	Alternancia
 Nicaragua	07/11/2021*	Daniel Ortega	Daniel Ortega	Continuidad
 Honduras	28/11/2021	Juan Orlando Hernández	Xiomara Castro	Alternancia
 Chile	21/11/2021 19/12/2021	Sebastián Piñera	Gabriel Boric	Alternancia
 Costa Rica	06/02/2022 03/04/2022	Carlos Alvarado	Rodrigo Chaves	Alternancia
 Colombia	29/05/2022 19/06/2022	Iván Duque	Gustavo Petro	Alternancia
 Brasil	02/10/2022 20/10/2022	Jair Bolsonaro	Lula Da Silva	Alternancia

Fuente: CEIUC (2023).

*Las elecciones de 2021 en Nicaragua no se consideran libres, justas ni competitivas.

Figura 69: Calendario electoral 2023, América Latina y el Caribe.



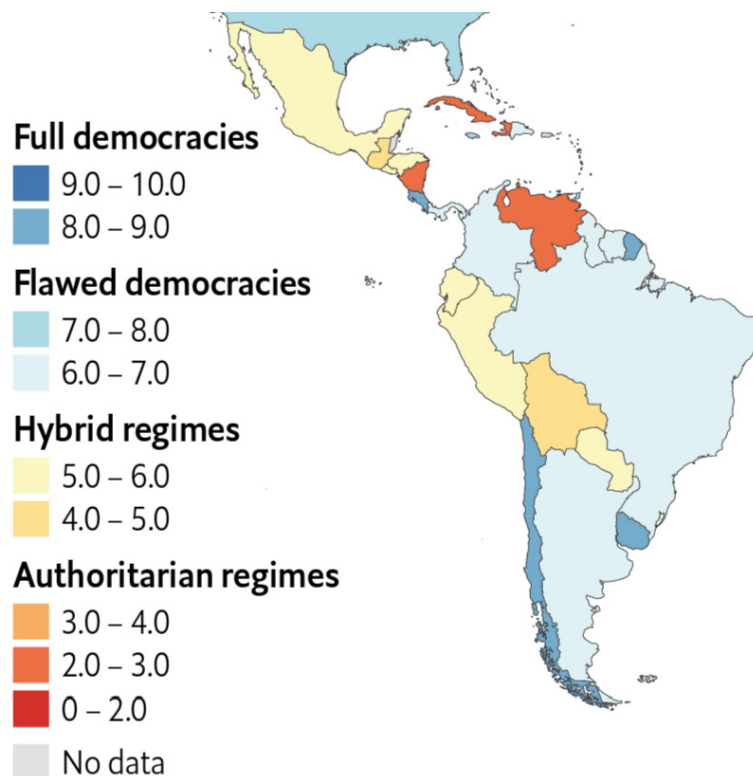
Fuente: CEIUC (2023).

Según la medición del Índice de Democracia³² (EIU, 2022) en 2022, Uruguay fue uno de los países con mejor desempeño del mundo, calificando junto a Costa Rica y Chile como los tres únicos países de la región con democracias plenas. Por otra parte, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Guyana, Jamaica, Panamá, Surinam y Trinidad y Tobago son considerados países con democracias deficientes.

32 El índice se construye a partir de más de 60 indicadores que responden a 5 dimensiones: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles.

En el ranking continúan aquellos países con regímenes híbridos, a saber: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú. Por último, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití continúan calificando como regímenes autoritarios.

Figura 70: Democracy Index 2022. Mapa regional según tipo de régimen.



Fuente: EIU, The Economist (2022).

Por otro lado, recientemente se han desatado diversos procesos políticos en la región que dan cuenta de una importante escalada de la conflictividad social, acompañada de una crisis de representación y, en algunos casos, de mayores niveles de autoritarismo.

En Argentina -sumida en una grave crisis económica desde 2018- durante los últimos dos años se han intensificado profundos desacuerdos entre el oficialismo y la oposición, y entre el poder ejecutivo y el sistema de justicia. Esto, sumado a un contexto de descontento social por la descontrolada inflación y pérdida de poder adquisitivo, reviste un complejo panorama de polarización política de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

En Brasil, la división que ha sufrido la sociedad durante los últimos 6 años ha desembocado en un difícil escenario de gobernabilidad para el reciente presidente electo Lula Da Silva, quien debió enfrentar a sectores radicalizados que se niegan a aceptar los resultados electorales y

que han escalado la violencia hasta invadir las sedes del Tribunal Supremo, el Congreso y el Poder Ejecutivo³³.

Chile aun no logra dar respuesta a las demandas del estallido social de 2019, ya que el presidente Gabriel Boric -además de no encontrar los consensos necesarios para llevar a cabo la agenda de reformas sociales que demanda el pueblo chileno- tiene la delicada tarea de promover nuevos acuerdos para la redacción de una alternativa de proyecto constitucional luego del mayoritario rechazo al texto sometido a plebiscito en septiembre de 2022.

En Perú se registró la mayor percepción de corrupción de la región, con un 88% de personas que consideraron que la mayoría de los políticos son corruptos. Este dato no es casualidad en un país que atraviesa una profunda crisis institucional desde hace algunos años, donde la polarización electoral y fragmentación en el Congreso han desembocado en una grave crisis de gobernabilidad que llevó a la asunción de 7 presidentes en los últimos 10 años. Esta situación ha provocado una profunda convulsión social en últimos meses de 2022, ya que luego de la destitución del presidente Castillo en diciembre de 2022 se desataron masivas protestas y violentos enfrentamientos que han dejado un saldo de 48 manifestantes muertos, 1301 heridos, cientos de detenidos y al menos un desaparecido³⁴. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha visitado recientemente el Perú para observar la preocupante situación de los derechos humanos en este contexto³⁵.

Resulta alarmante el estado de los derechos humanos en Nicaragua, marcado por crecientes limitaciones a la libertad de expresión, detenciones arbitrarias y hostigamiento a opositores. Se estima que 3000 ONGs nacionales e internacionales han sido prohibidas en el país, al mismo tiempo que se ha censurado a 26 medios de comunicación nacionales y 3 internacionales, frente a lo cual la CIDH instó a Nicaragua a cesar la persecución contra la prensa independiente y rendir cuentas sobre sus acciones³⁶. También, durante 2022, la persecución política en este país alcanzó a miembros de la Iglesia Católica, tanto laicos como clérigos, que han sido considerados como opositores al régimen. La perpetuidad de Daniel Ortega en el poder ha generado rechazo casi unánime de la comunidad y organismos internacionales de derechos humanos, que consideran que las elecciones celebradas en noviembre de 2021 no fueron justas ni libres³⁷.

33 Página 12, 8 de enero de 2021. [Ver.](#)

34 Noticias ONU, 6 de marzo de 2023. [Ver.](#)

35 Página 12, 13 de enero de 2023. [Ver.](#)

36 Nicaragua debe cesar la persecución contra la prensa independiente y rendir cuentas sobre sus acciones. Comunicado de prensa CIDH, 15 de julio de 2022.

37 Perfil, 17 de diciembre de 2022. [Ver.](#)

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele solicitó por décima segunda vez una prórroga del estado de excepción en el país³⁸, bajo el argumento de continuar combatiendo a las maras y el crimen organizado. Múltiples organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, se han manifestado en contra de la suspensión de garantías constitucionales durante este régimen de excepción y advierten sobre la posible consolidación de un régimen autoritario en el país centroamericano. A su vez, varias anomalías institucionales en la gestión de Bukele han sido calificadas por la CIDH como violaciones a la independencia de poderes, al mismo tiempo que se hizo un llamado a restablecer la plena vigencia de los derechos y garantías ya que "... la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común"³⁹.

En México se cumplieron cuatro años de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya tiene en agenda las elecciones de 2024 y la reelección de su partido, Morena. En este marco, el presidente -que muchos consideran como populista- convocó a una marcha de apoyo a su gobierno que resultó ser masiva. Sin embargo, la situación en México está lejos de ser favorable: hay mayores niveles de violencia, los escándalos de corrupción han llegado a la familia del presidente y las perspectivas de crecimiento económico para 2023 son menores a las de 2022⁴⁰.

En 2022 Honduras inició una etapa de cambio político, signada por el giro a la izquierda y la victoria electoral de Xiomara Castro, primera mujer en gobernar al país. El nuevo gobierno de Honduras deberá hacer frente a una tradición de inestabilidad política, autoritarismo y persistentes problemas sociales marcados por la pobreza, el hambre y la desigualdad.

Por otro lado, Colombia también enfrenta grandes desafíos socio-políticos en el contexto de la primera asunción de un gobierno de izquierda en el país, luego de la victoria de Gustavo Petro en las elecciones de junio de 2022. El nuevo gobierno deberá hacer frente a las problemáticas estructurales del país, como la pobreza, la informalidad laboral y la continuidad del acuerdo de paz con las guerrillas, a la vez que deberá encontrar consensos y herramientas para llevar adelante una agenda de reformas progresistas, en pos de cumplir con las promesas electorales.

En Venezuela, la pandemia no hizo más que agravar la crisis humanitaria que ya venía azotando al país, junto a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que múltiples orga-

38 Infobae, 11 de enero de 2023. [Ver](#).

39 CIDH llama a El Salvador a restablecer los derechos y garantías suspendidos hace un año por el régimen de excepción. Comunicado de prensa CIDH, 6 de abril de 2023.

40 The Washington Post, 5 de diciembre de 2022. [Ver](#).

nismos internacionales han denunciado en los últimos años. A pesar de esto, el 2023 podría ser un año bisagra para la situación en este país bolivariano, ya que la guerra entre Ucrania y Rusia ha reordenado el equilibrio de poder en el mundo con profundas consecuencias en el comercio. Por esta razón, se podría dar lugar a una paulatina recomposición de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Asimismo, la figura de Guaidó como presidente interino perdió legitimidad, dando chances a la oposición venezolana para organizar una nueva hoja de ruta en función de las elecciones de 2024. Estos factores, tanto internos como externos, podrían dar lugar a una nueva etapa de diálogo en el país de cara a establecer una nueva convivencia democrática y recuperación institucional.

En México se cumplieron cuatro años de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya tiene en agenda las elecciones de 2024 y la reelección de su partido, Morena. En este marco, el presidente -que muchos consideran como populista- convocó a una marcha de apoyo a su gobierno que resultó ser masiva. Sin embargo, la situación en México está lejos de ser favorable: hay mayores niveles de violencia, los escándalos de corrupción han llegado a la familia del presidente y las perspectivas de crecimiento económico para 2023 son menores a las de 2022.

Recientemente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha declarado que Haití se encuentra en la peor situación humanitaria y de los derechos humanos en décadas⁴¹⁴². Los sucesos en Haití desembocaron en una ola de violencia cuando comenzaron las protestas contra el presidente Jovenel Moïse, en 2019. Los hechos se volvieron cada vez más complejos desde el magnicidio del presidente, en 2021. Desde entonces, los problemas de seguridad y la crisis institucional se agravaron⁴³. Una nueva embestida de la inflación, la devaluación de la moneda y el aumento en el precio de los combustibles no hicieron más que acrecentar los disturbios, saqueos, manifestaciones y enfrentamientos entre bandas armadas, incluso llevando al primer ministro, Ariel Henry, a solicitar asistencia internacional para controlar la situación. Las elecciones presidenciales, legislativas y el referéndum constitucional que estaban previstos en Haití para septiembre de 2021 aún continúan aplazadas.

41 Haití: La comunidad internacional debe actuar ya para evitar una tragedia, según Türk. Comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 3 de noviembre de 2022.

42 HRW – Informe 2023 Haití.

43 Página 12, 18 de octubre de 2022. Ver.

5. Contribución teológico-pastoral

Como cristianos y ciudadanos nos dejamos interpelar constantemente por la realidad, por su complejidad, y en su legítima autonomía. Además, buscamos reconocer, en esa misma realidad, a la luz de la Sagrada Escritura, los signos de la presencia y de los planes de Dios, que nos permiten interpretar dicha realidad con una mirada creyente y discernir lo que Jesucristo, Señor de la Vida, está realizando en ella y espera de nosotros sus discípulos misioneros.

Por tanto, ante los datos que se nos han presentado en este nuevo informe sobre la realidad económica, política y social de América Latina y el Caribe en la postpandemia, no somos indiferentes, sino que, por el contrario, estamos dispuestos a escuchar, a entrar en diálogo con este contexto y a asumir el desafío de iluminar y buscar la transformación evangélica de dicha realidad, como discípulos misioneros del Resucitado.

El contexto descrito, junto a los signos de recuperación anotados, nos habla también de un gran clamor que el Señor escucha, y ante el cual Él no permanece indiferente. El estado actual de la sociedad latinoamericana y caribeña, vislumbrado en sus rasgos más significativos, señala situaciones y tendencias que comprometen la dignidad fundamental de muchos ciudadanos y ciudadanas, los derechos fundamentales de niños, jóvenes, mujeres en edad laboral, y poblaciones en situación de pobreza extrema; la llamada “cascada de crisis”, acelerada por las incertidumbres de la guerra y la presión inflacionaria, por la creciente deslegitimación de las instituciones y el escepticismo hacia los dirigentes políticos, por el aumento de las migraciones y de la violencia en general, generan un estado de aflicción en gran número de ciudadanos y un clamor que llega al corazón misericordioso de Dios.

Una vez más el aumento de las carencias y desigualdades reclaman cambios estructurales que lleven los procesos de recuperación postpandemia a niveles de un auténtico desarrollo humano integral y sostenible, y exigen el compromiso de todos, tanto en el nivel personal, comunitario, social, institucional e internacional, para que los obstáculos hacia la vivencia del bien común sean superados.

Ante este panorama, una mirada creyente y una escucha atenta, nos llevan, en primer lugar, a evocar el relato bíblico del encuentro de Moisés con Yahvé en la zarza que ardía sin consumirse; encuentro en el cual Yahvé le manifestó a Moisés la solidaridad para con su pueblo: «Dijo el Señor: “He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado el clamor ante sus opresores. Como conozco sus sufrimientos, he bajado para arrancarlo de la

mano de los egipcios y hacerlo subir de esta tierra a una tierra buena y espaciosa; a una tierra que mana leche y miel...».» (Ex 3, 7-8)

El reconocimiento de la solidaridad de Dios ante los clamores humanos y de su acción salvífica en medio de estas circunstancias, nos llena de esperanza, y nos compromete en nuestra condición de discípulos misioneros, de ciudadanos del Reino, llamados a buscar que dicho Reino se extienda y transforme la vida de la sociedad.

Presencia, cercanía y obra salvífica del Señor que se reconocen a través del “desborde” de iniciativas solidarias que se siguen dando en los distintos contextos y niveles de la sociedad; y que de formas diferenciadas han permitido a muchos sobrevivir a los efectos de la crisis, levantarse, y abrir caminos, que aunque parecen insuficientes ante la magnitud de los desafíos estructurales y culturales, sin embargo son signo de las transformaciones profundas que se reclaman y ya se están gestando. Un dinamismo, que dentro de la lógica del Reino de Dios, se ve como la pequeña semilla que se siembra, imperceptible a los ojos de muchos, que va creciendo y va produciendo fruto (cf. Mt 13,31-32). «También es cierto que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto. En un campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tozuda e invencible. Habrá muchas cosas negras, pero el bien tiende a brotar y a difundirse... Los valores tienden siempre a reaparecer de nuevas maneras, y de hecho al ser humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible. Esa es la fuerza de la resurrección y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo.» (EG 276), nos dice el Papa Francisco.

Y junto a esta confesión de fe en la iniciativa de Dios (cf. EG 24), como Iglesia que peregrina en América Latina y el Caribe, también reconocemos que el contexto que ha sido descrito, en sus múltiples rostros, es aquel en el que se inscribe nuestra misión evangelizadora. Es a este contexto donde el Señor nos envía como testigos y levadura en la masa, para que seamos, por nuestro servicio al Reino, fermento de transformación, servidores de la Vida Plena que quiere para todos.

Un contexto que reclama, como lo ha señalado el Papa Francisco, un desarrollo valiente y creativo de la dimensión social del Evangelio y de la evangelización (cf. EG 176-258), un trabajo real por la inclusión social de todos aquellos que están en las periferias del sufrimiento, una apropiación de la actitud del buen samaritano, para que resurja nuestra vocación de ciudadanos, constructores de un nuevo vínculo social. Así lo afirma en la Fratelli Tutti:

«Esta parábola es un ícono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor

del hombre herido en el camino. La parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para que el bien sea común.» (FT 67)

Es necesario, además, reconocer que el panorama actual y local que hemos revisado está inscrito en un contexto mayor tanto en lo histórico como en lo espacial-territorial. La situación de América Latina y el Caribe no está al margen de las coyunturas que han impactado al mundo en los últimos tres años. Tal como se ha presentado, la crisis económica e inflacionaria que pone en entredicho la supervivencia y la vida digna de nuestros pueblos tiene una estrecha relación con los mercados de los países desarrollados y los efectos de la guerra en Ucrania.

De allí la importancia de que nuestra lectura creyente de la realidad y nuestras iniciativas logren relacionar lo local con lo global, teniendo presente los llamados que ha hecho el Papa a favorecer la fraternidad universal y emprender el camino de la sinodalidad. Si bien es necesaria una mirada particular, desde lo diverso de nuestras comunidades, la contemporaneidad nos exige una consciencia eclesial mayor, vivida desde la comunión y la solidaridad con los sufrimientos de toda la humanidad y una gran capacidad para articular nuestras acciones.

Es fundamental tomar consciencia de la capacidad que tenemos para incidir en la realidad desde las mediaciones de la acción evangelizadora: la predicación y la enseñanza en todas sus formas y etapas, los momentos celebrativos y sacramentales, la vida comunitaria que generamos, el compromiso solidario y por la justicia que despertamos, acompañamos y animamos. Dichas mediaciones, adecuadamente inculturadas y articuladas, creativamente renovadas, nos permitirán ser fermento de cambio ante los desafíos señalados por el informe que, aunque parecen enormes, son susceptibles de ser transformados.

Como comunidad creyente, en sus múltiples rostros y espacios de realización, somos capaces de incidir en la vida económica desde el nivel personal y de las costumbres, generando conversión en los hábitos y estilos de vida, para que seamos consumidores responsables, como también en la generación de empresa con criterios que ponen al centro la dignidad humana y el bien común. Desde la enseñanza social de la Iglesia podemos aportar a los debates políticos, en la generación de nuevos modelos económicos, como el movimiento de la “economía de Francisco” lo está haciendo, y en el apoyo a procesos que requieren la articulación internacional. Desde el criterio de la ecología integral, reconociendo los vínculos entre el clamor de los pobres y de la tierra, podemos aportar a un planteamiento más integral de los problemas y sus posibles soluciones.

La ampliación del mercado laboral para las mujeres es un campo de particular atención, así como la generación de mejores condiciones de la actividad laboral; de igual manera el desafío

de lograr la seguridad alimentaria para un número tan significativo de la población. En este sentido la experiencia de la acción eclesial en red, como en el campo de las migraciones, o en el trabajo de los bancos de alimentos, que en un buen número son iniciativas de la Iglesia, pueden aportar a la búsqueda de una acción conjunta que logre una mayor incidencia y transformación de la situación. De igual forma, la capacidad de generar, como se han llamado: “redes de solidaridad” o de “misericordia”, que logran atender a las necesidades inmediatas de las familias, en los contextos locales y territorios de más difícil acceso, es otra herramienta que ha mostrado su efectividad, ante las necesidades de asistencia humanitaria.

La Iglesia ya realiza un gran aporte en el campo de la salud, pero sin duda insuficiente ante las necesidades de infraestructura, de mejores sistemas de atención, de mayor cobertura, evidenciadas por la pandemia del COVID 19. La atención inmediata, así como la incidencia política por mejores condiciones para el desarrollo del derecho de la salud, serán necesarias.

Y el gran desafío del cuidado de los niños y de los ancianos, en cuanto sujetos más vulnerables dentro de la sociedad, también requieren mantener y acrecentar el compromiso de la Iglesia en este campo. Son muchas las iniciativas eclesiales, de laicos y de organizaciones eclesiales, en favor de la niñez y de los ancianos, que es necesario mantener, fortalecer y acrecentar. Pero también requieren de una buena articulación, como se ha venido haciendo sobre todo en el tema del cuidado de la infancia, interactuando con otras confesiones religiosas y con proyectos de los gobiernos.

La invitación del Papa Francisco a un nuevo pacto educativo, que ha venido generando en las instituciones educativas católicas procesos de renovación, es una fuerte motivación para aportar a la reparación del daño causado por la interrupción de los procesos educativos en los colegios, escuelas y universidades, por causa de la pandemia. La recomprender los fines y mediaciones de la educación desde los objetivos de un humanismo solidario, de la fraternidad universal y de la amistad social, puede aportar a reconocer nuevos procesos y mediaciones pedagógicas que llenen los vacíos causados.

Y a la base de estos desafíos están los procesos de iniciación cristiana, que deben transformarse para mostrar más claramente las implicaciones que se desprenden de la fe y el seguimiento del Señor Jesucristo en la vida social, en la participación en la construcción de la sociedad, en el cuidado de la casa común, en el sentido de responsabilidad para con los otros (cf. LS 202-246). Es necesario reconocer con gran consciencia las implicaciones de aquella experiencia de los discípulos con Jesús, cuando los dijo, ante la gran multitud que lo escuchaba: “Denles ustedes de comer” (Cf. Mc 6,30-44). Una interpelación de Jesús, ante un sentido individual del cuidado de las personas, y un llamado a una comprensión solidaria del cuidado de unos por otros, como camino que realmente responde a las necesidades de todos y genera sobreabundancia, que se reserva para nuevas ocasiones. La iniciación cristiana

debe ser iniciación a una vida vivida en comunión y solidaridad con otros. Que se hace concreta en la convivencia diaria, así como llega hasta el compromiso con la caridad más alta, que es la participación política.

Un compromiso social, que en coherencia con el testimonio de Jesús, opta por la no violencia, por los caminos del diálogo, la reconciliación y la paz, al margen de cualquier tipo de violencia, que jamás será aceptable al ir en contra de la dignidad humana y del bien común, incluso cuando se pretenden hacer reivindicaciones de derechos fundamentales afectados.

El contexto nos lleva entonces a ratificar nuestra opción preferencial por los pobres, por la dignidad humana y por la construcción de sociedades solidarias, donde somos capaces de ver el sufrimiento del otro y de dar nuestro aporte para mejorar su calidad de vida. En este sentido, la dimensión social de la evangelización debe tener un lugar central en nuestros horizontes pastorales y en la acción eclesial en nuestros contextos. Recordando, que la Iglesia no es una ONG sino una comunidad que movida por el Espíritu Santo anuncia y comunica la vida y la alegría del Evangelio a todas las personas. No podemos olvidar que todas nuestras acciones tienen como fin último invitar al encuentro con Jesucristo y a vivir en su seguimiento, para tener vida verdadera en Él. En este sentido nuestra respuesta a los problemas sociales debe expresar el auténtico sentido cristiano del amor, la fraternidad y la edificación del Reino de Dios. También es necesario superar el asistencialismo presente aún en iniciativas de la acción social de la Iglesia. Es importante que en un horizonte de corresponsabilidad y desde la diversidad de carismas que suscita el Espíritu entre los fieles cristianos, podamos proponer y consolidar proyectos orgánicos que puedan aportar a la solución de los problemas sociales presentes en nuestros territorios, teniendo presente la necesaria articulación con los Estados, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de cooperación internacional, los movimientos sociales y los diversos procesos sociales animados por las comunidades locales.

Nos vemos, además, llamados a una renovación de nuestras prácticas pastorales reconociendo que en el contexto postpandemia, aún existen dolores y fracturas a nivel social que requieren de nuestro acompañamiento. La crisis sanitaria hizo que los muertos se convirtieran en cifras, se deshumanizó la pérdida de los seres amados y se rompieron rituales que en las comunidades servían de apoyo para afrontar el dolor ocasionado por la muerte. Actualmente, superada la crisis en la mayoría de los países y con un porcentaje avanzado de vacunación en la mayor parte de la región, podríamos caer en la tentación de olvidar a quienes han quedado de alguna u otra manera marcados por la pérdida durante el Covid-19.

También reconocemos que no basta con la reapertura de los templos y el acceso a actividades en los distintos escenarios eclesiales; hoy más que nunca debemos ser una Iglesia en Salida (cf. EG 20-49), caminar por los senderos por los que camina el pueblo, escuchar sus inquietudes, angustias y búsquedas; comprender los cambios que la pandemia implicó para

las dinámicas familiares, los proyectos de vida y la perspectiva de realidad de las personas. Hoy más que nunca debemos ser un Hospital de Campaña, pero no un hospital que espera a que lleguen a él los enfermos, sino que sale en su búsqueda; anunciando la esperanza en un contexto de desesperanza, entendiendo los cambios sociales y culturales, y fermentando la sociedad desde la vivencia y el compromiso con los valores del Evangelio, de tal manera que seamos en verdad “sal de la tierra y luz del mundo” en medio de nuestra sociedad.

6. Referencias bibliográficas

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR] (2023). Regional overview Central America and Mexico | Mid 2022.
- Banco Interamericano de Desarrollo [BID] (2022). Envejecer en América Latina y el Caribe: protección social y calidad de vida de las personas mayores. Washington DC.: BID.
- Banco Interamericano de Desarrollo [BID] y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] (2021). Flujos migratorios en América Latina y el Caribe: estadísticas de permisos para migrantes.
- Banco Mundial (2023). Global Economic Prospects. Washington DC.: Banco Mundial.
- (2022). Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course. Washington DC.: Banco Mundial.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2022a). Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL.
- (2022b). Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis? Santiago: CEPAL.
- (2022c). Panorama Social de América Latina y el Caribe. La transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible. Santiago: CEPAL.
- (2022d). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. (LC/PUB.2018/8/Rev.1). Santiago: CEPAL.
- (2021). La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. Santiago: CEPAL.
- Economist Intelligence Unit (2022). Democracy Index 2021. Frontline democracy and the battle for Ukraine. London: EIU.
- Fondo de Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] (2021). Tracking the situation of children during COVID-19. Nueva York: UNICEF.
- y OIT (2021). Trabajo infantil: Estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir. Ginebra y Nueva York: OIT y UNICEF.
- Fondo Monetario Internacional [FMI] (2022). Perspectivas de la economía mundial: Afrontar la crisis del costo de vida. Washington DC.: FMI.

- Latinobarómetro (2021). Informe 2021. Adiós a Macondo. Santiago: Corporación Latinobarómetro, Lupu, Noam, Mariana Rodríguez y Elizabeth J. Zechmeister (Eds.) (2021). El pulso de la democracia. Nashville, TN: LAPOP.
- Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres [UNDRR] (2022). Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2022. Nuestro mundo en peligro: Transformar la gobernanza para un futuro resiliente. Ginebra: UNDRR.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], FIDA, OMS, PMA y UNICEF. (2023). Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional - América Latina y el Caribe 2022. Hacia una mejor asequibilidad de las dietas saludables. Roma: FAO
- (2022). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022. Adaptación de las políticas alimentarias y agrícolas para hacer las dietas saludables más asequibles. Roma: FAO
- Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2022a). Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo. Tendencias 2022. Ginebra: OIT.
- (2022b). "Un crecimiento débil y crisis global frenan la recuperación del empleo en América Latina y el Caribe". Nota técnica, 1 de septiembre de 2022.
- (2022c). Panorama Laboral 2022. América Latina y el Caribe. Lima: OIT.
- (2021). Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022. La protección social en la encrucijada: en busca de un futuro mejor. Ginebra: OIT.
- Organización Internacional para las Migraciones (2021). Informe sobre las migraciones en el Mundo 2022. Ginebra: OIM.
- Organización Meteorológica Mundial [OMM] (2022). Estado del Clima en América Latina y el Caribe 2021. Ginebra: OMM.
- Organización Mundial de Comercio [OMC] (2022). "Russia-Ukraine conflict puts fragile global trade recovery at risk". Comunicado de Prensa, Press/902, 12 de abril. Recuperado de: https://www.wto.org/english/news_e/pres22_e/pr902_e.htm
- Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2021). COVID-19 and comorbidities in the Americas. Hands-on tool to estimate the population at increased and high risk of severe COVID-19 due to underlying health conditions for the Americas. Washington: OPS
- (2022). Salud en las Américas 2022. Panorama de la Región de las Américas en el contexto de la pandemia de COVID-19. Washington: OPS
- Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela [R4V] (2023). Refugiados y Migrantes Venezolanos en la Región - Mar 2023.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (2022). Informe sobre Desarrollo Humano 2021/2022. New York: PNUD.

Sahd, J., Zovatto, D. y Rojas, D. (Eds.) (2023). Riesgo Político en América Latina 2023. Santiago de Chile: CEI UC.

Vaca-Trigo, I. y M. Valenzuela (2022). "Digitalización de las mujeres en América Latina y el Caribe: acción urgente para una recuperación transformadora y con igualdad", Documentos de Proyectos (LC/TS.2022/79). Santiago: CEPAL.

World Wide Fund for Nature Inc. [WWF] (2022). Informe Amazonía Viva 2022. Quito: WWF.

